

UNIVERSIDAD AMERICANA

**FACULTAD DE DIPLOMACIA Y RELACIONES
INTERNACIONALES**



APLICACIÓN DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA 1995-2001

Linda Jeanette Plata Curran

Egda Alejandra Ramírez Vélez

Monografía para optar al grado de Licenciatura en Diplomacia y Relaciones
Internacionales

Profesor Tutor : Doctor Alfonso Antonio Valle González

Managua, Nicaragua, Agosto, 2001.

UNIVERSIDAD AMERICANA

**FACULTAD DE DIPLOMACIA Y RELACIONES
INTERNACIONALES**



APLICACIÓN DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA 1995-2001

LINDA JEANETTE PLATA CURRAN EGDA ALEJANDRA RAMIREZ VELEZ

Monografía presentada al jurado integrado por:

PRESIDENTE : _____

Doctor Orlando Guerrero Mayorga

SECRETARIO : _____

Licenciada María del Socorro Herrera

VOCAL : _____

Doctor Roberto Cajina

Para completar las exigencias del grado
Licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales

AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser la luz que guía nuestras vidas día con día.

A nuestras madres, por su apoyo incondicional, sin el cual no hubiésemos logrado llegar hasta esta etapa de nuestra vida.

A nuestro tutor, el *Doctor Alfonso Antonio Valle González* por el inmenso cariño y entrega con que guió nuestros pasos para la realización del trabajo que hoy tenemos el agrado de presentar a los honorables Miembros del Jurado. Gracias Maestro.

A la *Doctora Manuela Knapp de Aguilar* y a la *Licenciada María de Jesús Fuentes* por su excelente labor en la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales y toda la asistencia , apoyo y cariño brindado a lo largo de nuestra carrera.

Al *Licenciado Róger Gurdián Vigil* de la Universidad Autónoma de León por su valioso apoyo.

DEDICATORIA

A Dios que está siempre a mi lado, mostrándome el camino.

Al Doctor Guillermo Curran Rojas, mi abuelo, el hombre más maravilloso y ejemplar que he podido conocer.

A mi madre y mejor amiga, que con su entrega y amor incondicional ha hecho de mí la mujer que ahora soy.

Linda Jeannette Plata Curran

DEDICATORIA

A la Virgen, que no ha dejado de acompañarme en mi camino.

A las dos Egdas que complementan mi vida y han dejado en mí los puntos cardinales que ahora me guían.

A la memoria de Ignacio Vélez Paíz, mi eterno Norte.

Egda Alejandra Ramírez Vélez

<u>Introducción</u>	08
----------------------------	----

Capítulo I: Conceptos Generales de Seguridad Democrática

1. Seguridad Democrática, Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana	11
1.1 Conceptos Generales de Seguridad y Seguridad Democrática	11
• Evolución del concepto de Seguridad Democrática	16
1.2. Gobernabilidad Democrática	19
1.3. Seguridad Ciudadana	25
1.4. Interrelación entre Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana	32
1.5. Inseguridad Ciudadana	37
2. Seguridad Democrática en Centroamérica	47

Capítulo II: El Sistema de la Integración Centroamericana y el Tratado Marco de Seguridad Ciudadana

1. Antecedentes del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica	53
2. El Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica	59
2.1. Estado de Derecho	63
2.2. Seguridad de las Personas y sus Bienes	67
2.3. Seguridad Regional	71
2.4. Organización e Institucionalidad	78
2.5. Disposiciones Finales	79

Capítulo III: Gestores de la Seguridad Democrática en Centroamérica y Nicaragua

1. Órganos del Sistema de Integración Centroamericana Gestores	
--	--

de la Seguridad Democrática	82
1.1. Reunión de Presidentes	83
1.2. Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores	88
1.3. Comisión de Seguridad	95
2. Órganos Encargados del Enlace y Ejecución de la Seguridad Democrática en Nicaragua: Instituciones y Competencias	100
2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores	101
2.2. Ministerio de Defensa	110
2.3. Ministerio de Gobernación	122
<u>Capítulo IV: Principales Amenazas a la Seguridad Democrática en Centroamérica y Nicaragua</u>	
1. Amenazas Externas a la Seguridad Democrática	133
1.1. Narcotráfico	134
1.2. Destrucción del Medio Ambiente	145
1.3. Conflictos Territoriales	148
2. Amenazas Internas a la Seguridad Democrática	153
2.1. Pobreza	154
2.2. Pobreza y Corrupción	156
2.3. Grupos Armados	158
2.4. Corrupción y Seguridad de los Habitantes	160
2.5. Inseguridad Ciudadana	167
<u>Conclusión</u>	172
<u>Recomendaciones</u>	178
<u>Bibliografía</u>	181
<u>Anexos</u>	186

INTRODUCCION

Los centroamericanos han ido construyendo una historia de integración regional, expresada en veintidós intentos desde el proceso de Independencia de avanzar en dirección a la unidad regional, materializada en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

La Centroamérica de estos tiempos vive uno de los momentos más intensos y decisivos de su historia, la región debe enfrentar ahora el triple reto de conjugar identidad, integración y globalización y decidir si su actuar será en conjunto o individual. Puede decirse que la globalización es un hecho irreversible y en este sentido, los centroamericanos y particularmente los nicaragüenses, debemos estar conscientes de que frente a este reto, la integración es uno de los mejores instrumentos para enfrentar las consecuencias adversas y, al mismo tiempo, potenciar todas las oportunidades y beneficios que se deriven de esta nueva era, por esto es de suma y vital importancia, acelerar dicho proceso de integración a fin de estar en la mejor posición posible para defender la identidad propia, intereses, valores y principios de los pueblos de la región.

Es en estos esfuerzos de integración en donde la Seguridad Democrática se erige como elemento clave, en cuanto se aborda como un concepto de carácter principalmente preventivo e integral compuesto por aspectos políticos, económicos, sociales e incluso militares, pero enmarcándose en lo social y teniendo como eje al ser humano. Este concepto nace con el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, del cual Nicaragua es miembro, lo cual supone un gran reto para el país de cara a la implementación

de los preceptos de dicho tratado, en cuanto esto implica un paso importante en el seno del proceso de integración regional en el que Nicaragua se encuentra inmerso.

En el presente trabajo monográfico hemos hecho el esfuerzo de dejar claro el concepto de Seguridad Democrática, los componentes fundamentales que lo complementan: gobernabilidad, seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, y la interrelación existente entre dichos conceptos.

Luego abordamos el Tratado Marco de Seguridad Democrática en su totalidad, desde los antecedentes históricos, la visión global del mismo y sus puntos relevantes. En nuestra opinión es muy importante que este instrumento jurídico sea del conocimiento de estudiantes de estudios superiores, por el hecho mismo de ser el instrumento jurídico que regula todo lo concerniente a seguridad en la región.

Igualmente nos parece fundamental tener identificados los órganos involucrados en las competencias de la seguridad democrática, ya sea a nivel regional o a nivel nacional. En el Capítulo III de nuestra tesis monográfica enfocamos este tema, agregando nuestras valoraciones sobre la competitividad de los órganos regionales y nacionales.

Lo anterior evidencia la importancia de abordar el tema de la Seguridad Democrática y su aplicabilidad en Centroamérica así como también las principales amenazas tanto externas como internas, abordando de manera amplia y específica el caso de Nicaragua, tocados en el Capítulo IV.

Finalmente para, presentamos las conclusiones, en la cuales puntualizamos aspectos importantes que evidencian la importancia de la implementación en la región centroamericana del Modelo de Seguridad Democrática contenido en el Tratado Marco.

Igualmente, presentamos nuestras conclusiones, así como una serie de recomendaciones que a nuestro juicio podrían servir como directrices para la implementación del Modelo antes referido.

Capítulo I: Conceptos Generales de Seguridad Democrática

1. Seguridad Democrática, Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana

1.1. Conceptos Generales de Seguridad y Seguridad Democrática

Podemos afirmar que la Seguridad es sobretodo, una exigencia humana y el “saber a qué atenerse”, es el elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad.¹

Ya desde finales del pasado siglo, el uso del valor seguridad se ha extendido virtualmente a todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano: Seguridad Social, Seguridad Jurídica, Seguridad de Datos, Seguridad Colectiva, Seguridad de Tráfico Vial, Seguridad Ciudadana, entre otros. Todas estas variantes tienen como base común la “Seguridad Jurídica”, la cual es definida por Manuel Osorio² *como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran.*

Es decir, la Seguridad Jurídica representaría la garantía de la aplicación objetiva de la ley. En este sentido, esta visión ha debido ampliarse en el nuevo contexto en el cual las versiones contemporáneas de la seguridad desarrollan el concepto, entendiendo como

¹ Pérez Luño, Antonio Enrique. La Seguridad Jurídica. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 1994, Pág. 11 (Segunda Edición revisada y puesta al día).

² Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 21ª, Buenos Aires. Heliasta, 1994.

jurisdicción de seguridad todo aquello que pueda significar riesgo para el bienestar colectivo.

A nuestro criterio, ya no sólo estamos hablando de la seguridad jurídica en cuanto a la protección de la soberanía y la integridad territorial, es decir una visión Estado-Céntrica y limitada, sino que el concepto de seguridad trasciende a estos elementos y se amplía hacia un concepto más integral que tiene como eje al individuo inmerso en el sistema democrático.

Citando el caso de las dictaduras, éstas tienden a ser gobiernos agresivos, sin los constreñimientos de instituciones democráticas, tienden a generar inestabilidad y conflictos internos que por lo general traspasan las fronteras nacionales, surgiendo así un clima de inseguridad y desconfianza en las Relaciones Internacionales. Esa desconfianza e inseguridad representa una amenaza a la paz y estabilidad de la región, por lo cual se considera imperativo defender, promover y fortalecer la democracia en los Estados, pues de su vigencia cabal depende la paz y la seguridad regional.

La Seguridad Democrática, es definida como la suma de las seguridades existentes en el Estado de Derecho, que determinan y limitan las atribuciones del Poder Público, comprometiendo la continuidad de la gestión gubernamental en favor del bienestar colectivo, entendido como el goce de las libertades fundamentales y los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador.³

Es así que la Seguridad Democrática supone, por ejemplo, que las personas individuales cuyos derechos políticos y civiles vinculados con las democracias sean violados, están habilitados para interponer las denuncias y peticiones que estimen convenientes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.⁴

El nuevo contexto internacional caracterizado por el fin de la guerra fría y la preeminencia de la democracia y de la economía de mercado también está marcado por un proceso de creciente interdependencia global que abarca prácticamente todo los aspectos de la vida: la sociedad, la cultura, la política, entre otros. Por ello, la mayoría de los problemas/desafíos/amenazas que enfrentan nuestras sociedades y democracias en el hemisferio ya no pueden ser manejados ni solucionados unilateralmente, o solamente dentro de las fronteras de un país.

Desafíos como el medio ambiente, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la seguridad, la democracia, el comercio, los derechos humanos, la salud, entre otros, no solo son interdependientes entre sí, sino que también atañen y vinculan a los gobiernos y

³ Carta Democrática Interamericana, Artículo 04.

⁴ Carta Democrática Interamericana, Artículo 05.

sociedades de la región en una red de interdependencia cada vez más compleja y profunda. Son desafíos “intermésticos”⁵, parte internacionales y parte domésticos.

De lo anterior resulta la profunda interrelación entre la Seguridad Democrática y la democracia misma, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes, transparencia en la gestión pública y responsabilidad pública de los sistemas electorales, independencia de los organismos responsables de conducir y verificar las elecciones libres, justas y regulares, son entre otros, elementos esenciales para asegurar la seguridad democrática en las naciones centroamericanas.

La región centroamericana se encuentra en un proceso avanzado de consolidación de un novedoso modelo de seguridad, contenido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, basado en el fortalecimiento de la democracia, sus instituciones y el Estado de Derecho. Por tanto es que dicho Tratado se erige como el instrumento que fusiona la cultura de paz y la seguridad humana y las contextualiza a la realidad integracionista centroamericana.

Según la opinión de Rubén Perina⁶, la comunidad hemisférica de Naciones-Estado está construyendo, más concentrada y enfáticamente, un régimen democrático interamericano por medio del desarrollo de principios, normas e instrumentos jurídicos/diplomáticos y de acciones o prácticas cooperativas y colectivas para la protección, defensa y promoción de la

⁵ El concepto castellanizado del inglés “intermestic” surgió hace algunos años en los trabajos académicos relacionados a la interdependencia.

⁶ Coordinador del Área de Fortalecimiento Institucional, Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), Secretaría General de la OEA.

democracia. Se entiende por régimen, siguiendo la definición de Stephan D. Krasner, *un conjunto explícito e implícito de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones, alrededor de los cuales las expectativas y acciones de los actores convergen en un campo dado de las Relaciones Internacionales.*

En esta coyuntura, cada uno de los Estados Naciones del hemisferio ve su propia seguridad reflejada en la seguridad, estabilidad y continuidad de cada una de las democracias de la región. Desde esta perspectiva, la paz y la seguridad del continente dependen de la seguridad, estabilidad y viabilidad de las democracias que lo conforman.

El interés y el compromiso de defender colectivamente la vigencia de la democracia en los Estados parte de la región es tanto un interés como un compromiso por la paz y la seguridad regional. Creemos que lo que debe buscarse fundamentalmente, es la seguridad y la paz democrática, o dicho de otra forma, la seguridad y la paz que alienten y provean la vigencia de valores y prácticas democráticas en los vecinos de la comunidad regional.

En el caso de Nicaragua, valoramos que la preocupación debe ser más bien por la defensa de la seguridad y la supervivencia de un sistema de gobierno democrático en contra de agresiones o amenazas como la inseguridad, la corrupción, el irrespeto a la institucionalidad, que representan un enorme obstáculo para la consolidación de la democracia en detrimento de los débiles e incipientes procesos de la región como el nuestro.

La noción de lo que se puede llamar Seguridad Democrática ya aparecía en la Carta de 1948 de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando los Estados Miembros estipulaban que “la solidaridad y los altos fines que con ella se persiguen requieren de la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa⁷”

Evolución del concepto de Seguridad Democrática

No fue sino hasta en la era moderna que el concepto de seguridad dejó de limitarse a la prevención y protección de una nación y sus ciudadanos ante amenazas reales o ficticias, internas o externas. Esta concepción clásica generó Estados donde lo prioritario era lo militar, donde la Seguridad Nacional⁸ se relacionaba con el poder de una Nación-Estado frente a otros Estados, por lo que se definió en tres niveles:

- A. Seguridad frente a la división interna: concebida y enfocada hacia el alcance de una cohesión interna y de la seguridad contra la violencia civil interna;
- B. Seguridad frente a la amenaza militar externa: entendida como la protección de las fronteras y las áreas estratégicas del territorio nacional;
- C. Seguridad de intereses: conglomeraba los intereses de la Nación, especialmente los de carácter económicos y políticos, ya sea adentro o afuera de sus fronteras.

⁷ Carta de Bogotá de la Organización de Estados Americanos, Artículo 03.

⁸ Urbina Aguilar, José Francisco. Desmovilización, Desmilitarización y Democratización de Centroamérica. Costa Rica. 1994. Pág. 113.

Esto evidencia que había una aplicación casi nula de otros instrumentos del Estado de cara a la garantía de la Seguridad. Todo se reducía a la defensa de los intereses nacionales a través de la vía militar y el fortalecimiento de los cuerpos militares como mecanismo de persuasión.

Posteriormente se empezó a hablar del concepto de seguridad bajo una visión transformadora, incorporando la pluralidad de situaciones que podían crear un estado de riesgo global, es decir, se empezó a hablar de “Seguridad Global”, pero tratando de adecuar este concepto a un mecanismo de seguridad que funcionara como “un instrumento central para prevenir y resolver los conflictos y preservar la paz”.⁹ Ejemplo de ello son las transformaciones políticas ocurridas en la era de los ochentas en el orden mundial (como la apertura de la ex Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas con la Perestroika y el Glasnot, la caída del muro de Berlín...) que repercuten directamente en la región centroamericana.

Consecuentemente, se establecieron comisiones especiales de expertos e intelectuales sobre el tema que generaron una serie de ideas y términos sobre seguridad, tales como “seguridad total”, “seguridad común”, “seguridad democrática”, “orden mundial” (world orderism).

Estos grupos alertaron a la Comunidad Internacional sobre la imperante necesidad de modernizar el concepto de Seguridad, ya que un conflicto entre dos naciones fácilmente se convertía en un foco gestor de un conflicto multinacional. Esto ponía en conflicto la Seguridad Global.

⁹ Urbina Aguilar, José Francisco. Desmovilización, Desmilitarización y Democratización de Centroamérica. Costa Rica. 1994. Pág. 77

La o las nuevas nociones de seguridad debían de encaminarse a alcanzar la seguridad social, política y económica tanto de los Estados-Nación, como de las distintas Regiones y por supuesto, de la Comunidad Internacional.

Surge entonces, el concepto de “Seguridad Permanente”. Este se basaba en la interdependencia que existe entre las naciones. Su fundamente ideológico era que ninguna esfera (Estado-Nación, Región o Comunidad Internacional) trabaja independiente de las otras, aunque cada una tuviese esferas de acción y objetivos bien definidos.

De acuerdo a José Urbina Aguilar, la *Seguridad Permanente es un proceso que aspiró a crear un Estado en el que la gente pudiese vivir sin las amenazas a sus derechos fundamentales y a sus oportunidades de lograr progreso personal y colectivo. Incorporándose, además, la idea que no debía privarse a los seres humanos de su derecho de participar en los procesos económicos y políticos, si no más bien deben garantizárseles sus derechos y facultades fundamentales.*

*Este concepto se concibió como un instrumento para guiar los esfuerzos que se realizaban hacia un replanteamiento de la seguridad en Centroamérica y en otros países en vías de desarrollo.*¹⁰

¹⁰Urbina Aguilar, José Francisco. Desmovilización, Desmilitarización y Democratización de Centroamérica, 1994. Costa Rica. Pág. 114 y 115.

1.2. Gobernabilidad Democrática

El proceso de pacificación de la década de los 90 en América Central dio lugar a: (a) una recomposición de la dinámica democrática en el marco de los sistemas políticos respectivos, con la incorporación y legitimación de diversas fuerzas políticas, previamente beligerantes en el marco de la crisis que caracterizó a la región en los años setenta y ochenta, y la creciente institucionalización de mecanismos y procedimientos democráticos para abordar estos y otros conflictos; (b) una reorientación de las prioridades políticas sobre dimensiones y aspectos de orden económico y social en el marco de programas de ajuste y de desarrollo económico; y (c) una reactivación del proceso de integración centroamericano a través de una dinámica de encuentros presidenciales e interagenciales para la firma de acuerdos y tratados que llevarían al establecimiento y consolidación de las instituciones regionales.

Por tanto, es para nosotros evidente que, con la firma del Acuerdo de Esquipulas se inicia el proceso de democratización en toda la Región Centroamericana. Este proceso de transición hacia la democracia introdujo cambios tanto en el ámbito de Gobernabilidad Democrática como en el de Seguridad Ciudadana.

La gobernabilidad democrática se ha ido desarrollando en función de nuevas modalidades de resolución de conflictos políticos, generando de esta manera nuevos marcos institucionales que controlan las reglas y condiciones dentro del estamento gubernamental.

De la misma forma, la seguridad ciudadana se ha visto afectada por nuevas formas de violencia no necesariamente vinculadas a la confrontación ideológica de los años anteriores, lo que ha dado como resultado la transformación y eventual debilitamiento del aparato judicial y policial de estas sociedades ante los nuevos desafíos en materia de seguridad.

En este contexto, podemos afirmar que la gobernabilidad democrática se ha impuesto como un tema prioritario de la agenda de las sociedades centroamericanas, y está íntimamente vinculada a la necesidad de canalizar e integrar en cualquier conflicto por medios políticos, democráticos e institucionales; ampliar la participación en los sistemas políticos y profundizar la democratización; desarrollar sistemas políticos más eficientes, legítimos, participativos y transparentes; para reducir la arbitrariedad y aumentar la seguridad en el marco de los derechos ciudadanos, asegurando los derechos humanos y de la seguridad ciudadana; mejorar y perfeccionar los aparatos judiciales y policiales haciéndolos más legítimos, eficaces y honestos; reformar los cuerpos armados de seguridad, y promover una administración pública eficiente y transparente.

La confrontación característica de los años setenta y ochenta ha sido sustituida por una dinámica política que implica no sólo una participación creciente de fuerzas políticas y electorales, sino también de las distintas fuerzas sociales representativas de la sociedad civil. Desde esta perspectiva creemos que la gobernabilidad democrática en los países de Centroamérica no sólo está marcada por la evolución y consolidación de la sociedad política (partidos políticos, sindicatos, legislaturas) sino también por la sociedad civil:

movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, comunidades profesionales y epistémicas, asociaciones civiles, entre otras.

Consecuentemente observamos que en la coyuntura actual, la gobernabilidad democrática implica una activa participación e incidencia de la sociedad civil en la formulación e implementación de políticas públicas. Lo anterior debe complementarse con la existencia de instituciones consolidadas en donde puedan interactuar y coordinar sus esfuerzos las agencias gubernamentales y las organizaciones civiles.

En base a nuestra investigación nos sumamos a la convicción de que la participación de la sociedad civil puede asumir diferentes modalidades, entre las cuales se encuentran la manipulación nominal, la información unilateral, la consulta, la conciliación y el poder delegado por parte del Estado, y diferentes iniciativas organizadas desde la sociedad civil que pueden incluir la incidencia directa sobre legisladores o decisores de agencias gubernamentales (*lobby*); la incidencia directa a través de campañas de movilización social y formación de alianzas para la promoción de agendas específicas; la participación en consejos de planificación o concertación de políticas nacionales, departamentales o municipales de carácter general o sectorial; la influencia en la propuesta de candidatos o partidos políticos o el planteamiento de políticas alternativas; controles y auditorías; el desarrollo de casos judiciales para establecer jurisprudencia en torno a derechos económicos, sociales y políticos de la ciudadanía; campañas de opinión pública; protestas y movilizaciones, y el desarrollo y difusión de investigaciones en temas sociales relevantes.

A su vez, el proceso de incidencia y participación de la sociedad civil en las políticas públicas, implica diversas fases: (a) la construcción del problema público; (b) la incorporación del problema a la agenda; (c) la formulación de la política pública; (d) su implementación; y (e) su monitoreo, evaluación y control por parte de la sociedad civil. Aquí, debemos aclarar que las Políticas Públicas son formuladas y administradas por la Administración pública, por tanto, el sector privado puede ser un ejecutor, pero siempre bajo la supervisión del ente regulador.

La transición de una gobernabilidad autoritaria a una gobernabilidad democrática implica un cambio de perspectiva desde la gobernabilidad del Estado (garante de la seguridad nacional frente al enemigo interno y externo en el marco de las doctrinas de seguridad nacional imperantes en décadas anteriores) a una gobernabilidad que involucra no sólo al Estado sino al mercado, en función de los programas de ajuste y de reforma estructural, y a la sociedad civil en tanto se encuentra enmarcada en una nueva interlocución entre el Estado y los actores sociales en el marco de la gobernabilidad democrática.

Por ende creemos que las transiciones recientes hacia una gobernabilidad democrática, han enfatizado un desplazamiento hacia la relación entre Estado y mercado, donde este último asume crecientes responsabilidades en la ejecución de políticas públicas a través de los procesos de privatización: en los campos de la salud, sistemas de empresas de servicios públicos (ENEL por ejemplo en el caso Nicaragua), la educación y la seguridad, y recientemente en Nicaragua se ha propuesto la privatización del sistema de transporte público; todo lo anterior en el marco de los programas de ajuste y reforma estructural.

El vínculo consecuente del Estado con la ciudadanía se ha desplazado en el sentido de privilegiar el rol de ésta última como consumidor o como usuario, así como su rol activo como miembro de la comunidad política (sentido tradicional) en el marco del desarrollo de políticas públicas.

Esta visión ignora o desplaza a un lugar secundario, el rol de la sociedad civil y, en particular de la ciudadanía, en la formulación y ejecución de políticas públicas en diversos campos, concebidos básicamente como beneficiarios de éstas en un proceso de formulación e implementación “desde arriba hacia abajo”.

Pese a que la orientación actual del Estado en teoría tiende a promover el bien común a través de la construcción de consensos, el rol de la ciudadanía y de la sociedad civil, en tanto conglomerado de intereses diversos, fragmentarios y complejos, es desplazado a un segundo plano, a favor de la interlocución con los actores políticos tradicionales (partidos políticos) o con las expresiones de intereses corporativistas (empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales) que, con frecuencia, tienden a incidir sobre la orientación de las políticas públicas desarrolladas por el Estado, en el marco de una mayor capacidad de interlocución e incidencia con y sobre las élites burocráticas a cargo de la toma de decisiones en torno a políticas públicas.

En este sentido, para que ocurra una consolidación de la gobernabilidad democrática en los países de la región centroamericana, es necesario por un lado su profundización, institucionalización e incremento de los rendimientos del Estado en términos del desarrollo del sistema político y, por otro, la implementación de vínculos de interlocución con los

actores de la sociedad civil que superen el tradicional carácter unilateral de los mismos, desde el Estado a la sociedad civil.

Estos actores, básicamente concebidos como ciudadanos activos en busca de una ampliación de sus derechos y de la reafirmación, validación y legitimación del bien común promovido por el Estado, configuran un conglomerado pluriforme y diverso que complejiza el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas tendientes a promover este bien común.

Desde esta perspectiva, la gobernabilidad democrática supone el procesamiento político por medios institucionales de los conflictos dentro de la sociedad y entre ella y el Estado. Tales conflictos ocurren en un entorno condicionado por las determinaciones derivadas de la administración de los procesos socioeconómicos en un escenario de reforma. Este cambio socioeconómico es a su vez condicionado por las exigencias de adaptación de la economía y la sociedad a los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que imprime el proceso de globalización.

Asimismo, la gobernabilidad democrática implica la generación conjunta de espacios públicos en los cuales se adopten decisiones sobre asuntos de interés colectivo con la participación de actores de la sociedad civil, en un marco institucional y normativo claramente establecido, pero regido por las dinámicas políticas del conjunto de la sociedad y en función de la ampliación de los derechos de la ciudadanía y su mayor participación en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

1.3. Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana se entiende como un componente fundamental de la seguridad en general. En su acepción más amplia, ésta se refiere a la percepción, prevención y protección de la población ante el conjunto de amenazas que pueda sufrir una nación. En este sentido, tradicionalmente se ha identificado la seguridad con la defensa nacional referido a la protección de la soberanía y la integridad territorial, por lo que esta visión tiende a ser Estado-céntrica y privilegia la función militar. En su interpretación más radical esta visión ha dado lugar a excesos tales como la virtual subsunción de la nación en el Estado y el sobredimensionamiento del factor militar.

Un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) nos facilita una definición descriptiva de este tema: *la Seguridad Ciudadana, seguridad pública o de los habitantes, como también se le denomina, se refiere al derecho que le asiste al ciudadano o, en sentido más amplio, al integrante de una sociedad organizada, de desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes.*¹¹

Hace también referencia al vínculo de las personas y el Estado, asentándose en la idea de que alguno de los componentes centrales del Contrato Social es la obligación que adquiere la autoridad estatal de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a cambio de la

¹¹ Instituto de Investigaciones y Asistencia Legislativa. Página 08. Nicaragua

delegación de poder que este último ha hecho, ya que los gobiernos se crean para proteger las libertades a las que cada individuo tiene derecho por el mismo hecho de existir.

De esta definición podemos destacar dos elementos fundamentales:

- a. Los ciudadanos o residentes de un país tienen derecho de desarrollar su vida con la mayor tranquilidad posible, de ejercer sus derechos y manejar sus bienes sin estar sometidos a amenazas.
- b. El Estado es el obligado a garantizar al desarrollo en tranquilidad de la vida ciudadana.¹²

Las versiones contemporáneas de la Seguridad Ciudadana amplían el concepto, entendiendo como jurisdicción de la seguridad todo aquello que pueda significar riesgo para el bienestar colectivo. En este sentido, por ejemplo, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, incluyó entre las nuevas dimensiones de seguridad el crecimiento incontrolado de la población, el peso de la deuda externa, las barreras al comercio internacional, las drogas, el abismo entre ricos y pobres, poniendo especial atención en los problemas ecológicos y al surgimiento de nuevas enfermedades.¹³

¹² Instituto de Investigaciones y Asistencia Legislativa. Pág. 08. Nicaragua.

¹³ Ghali, Boutros Boutros (1992). *An Agenda for Peace*. New York: United Nations.

Otra de las percepciones actuales es la de “seguridad humana” postulada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, que busca focalizar la preocupación en la vida cotidiana.

En el informe de Desarrollo Humano de 1994 este concepto se desarrolla más y se afirma que la seguridad humana tiene dos componentes principales:

- a) seguridad ante amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, y
- b) protección contra alteraciones súbitas o violentas en el modo de vida. Agrega que la seguridad humana comprende siete niveles o categorías:

- Seguridad Económica;
- Seguridad Alimentaria;
- Seguridad en materia de Salud;
- Seguridad Ambiental;
- Seguridad Personal;
- Seguridad Comunitaria
- Seguridad Política.

Dada la amplia gama de aspectos que implica la Seguridad Humana, sólo abordaremos aquellos que competen a nuestro análisis en el presente trabajo.

Dentro de la Seguridad Personal, que se refiere a la protección frente a la violencia física, se incluyen las amenazas provenientes del Estado, de otros Estados, de grupos de la población (incluyendo las tensiones étnicas), las que surgen de individuos o pandillas (violencia callejera), amenazas contra las mujeres, contra los niños y contra la propia persona (como el uso de estupefacientes).¹⁴

En cambio, la Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública o de los Habitantes, se refiere al derecho que asiste al ciudadano, o en un sentido más amplio al integrante de una comunidad organizada, de desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes.¹⁵

Los problemas de seguridad ciudadana, tal como son considerados por las modernas agendas de seguridad, se refieren a la generalización de una situación en la cual el Estado no cumple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social. Esto significa una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y gobernados, constituyendo para los ciudadanos una situación de profunda inestabilidad en la vida cotidiana.

En los países centroamericanos, pese a la dilución de la confrontación bélica entre fuerzas políticas, la seguridad de los ciudadanos se ha visto afectada por otras situaciones drásticas. Por un lado, la profundización de la crisis económica, la profesionalización y

¹⁴ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre el desarrollo humano*. México: Fondo de Cultura Económica. 1994.

¹⁵ Idem

reestructuración de las funciones de las fuerzas armadas y de sus relaciones con las fuerzas policiales, y el nuevo rol de los poderes públicos en un marco democrático, se han articulado a un incremento en los niveles de delincuencia, violencia criminal e impacto cotidiano sobre la seguridad de los ciudadanos y más específicamente de la sociedad civil en general¹⁶.

En ese sentido, es importante señalar la creciente inadecuación de la administración de justicia; la corrupción policial y judicial; las acciones extrajudiciales de las fuerzas policiales; la violación de los derechos humanos en las prácticas institucionales, la impunidad y otras formas de violencia estatal; los efectos criminógenos de los sistemas penitenciarios y la reproducción institucional de la violencia en las cárceles.

El Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1994 insiste que el concepto de seguridad debe cambiar urgentemente de dos formas: a) de un enfoque exclusivo en la seguridad territorial a uno mayor sobre la seguridad de las personas, b) y de la seguridad a través del armamentismo hacia la seguridad mediante el desarrollo humano. Por tal razón, el PNUD hace un llamado a utilizar las reducciones en gastos de defensa para financiar el desarrollo humano. Si gran parte de las amenazas a la seguridad humana se originan en la pobreza y la falta de oportunidades, este llamado parece la mejor política posible de defensa.

¹⁶ Datos proporcionados por el Capitán Juan Rivera, Encargado Interino de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional.

En tal sentido afirma que “...para mucha gente una sensación de inseguridad deriva más de las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que del temor a un acontecimiento cataclístico mundial...” y en consecuencia las preocupaciones del ciudadano son más bien reflejadas en las interrogantes siguientes:

¿Tendrán suficiente para comer ellos y sus familias?

¿Perderán su empleo?

¿Estarán libres de delincuentes los barrios y calles?

¿Serán víctimas de violencia en razón de su sexo?

¿Los torturará un estado represivo?

¿Serán objeto de persecución por su religión o su origen étnico o político?

Este enfoque del concepto y contenido de la seguridad ciudadana nos lleva a analizar esa responsabilidad estatal que se materializaría en la existencia de leyes y organismos que hagan real ese ambiente de tranquilidad ciudadana en el que sea posible ejercer el derecho y deberes ciudadanos en un ambiente de armonía social. Este concepto está referido, sobre todo a la Seguridad Pública.

Ahora bien, llegando al tema que nos ocupa en el presente trabajo, la seguridad ciudadana es parte de la seguridad humana que tiene al individuo, a la persona humana como enfoque. Un bajo nivel de seguridad humana equivale a un alto nivel de inseguridad nacional y en el actual contexto regional caracterizado por la construcción de la

Democracia, la inseguridad de una nación afecta al resto de las mismas. Es aquí donde ambos conceptos se interrelacionan de manera indisoluble.

Seguridad Ciudadana y Seguridad Democrática son dos conceptos diferentes, pero no desligados.

La “Seguridad Ciudadana” comprende no sólo la prevención y control de amenazas a los individuos de una sociedad, sino que este concepto supone además como ya mencionamos en párrafos anteriores, la existencia de los individuos en un clima de tranquilidad y estabilidad ciudadana, es decir un ambiente en el que los ciudadanos tengan plena confianza la existencia en las leyes existentes, instituciones y organismos sólidos y capaces con la misión expresa de protegerlos y procurarles las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos.

La Seguridad Democrática es más bien un concepto centroamericano de seguridad que surge a partir de una perspectiva democrática en la coyuntura de la integración y cuya premisa fundamental podemos decir que consiste en la apreciación de la región centroamericana como un todo que puede y debe ejercer sus medidas de seguridad y defensa de manera colectiva y en base a los valores democráticos propugnados por el Sistema de Integración Centroamericano como son la Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

1.4. Interrelación entre Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana

Según estudios recientes de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) la gobernabilidad está referida a la *capacidad política de una sociedad y debe ser vista como una construcción de la política, construcción que supone un conjunto de acciones asociadas a la formación de un sistema de acciones públicas que implican poder, mando y autoridad. La cuestión reside en la forma en que los actores se paran frente al sistema político*¹⁷.

La esencia de este concepto se refiere a las relaciones entre gobernantes y gobernados, con respecto a la reproducción o transformación del orden social establecido y el sistema de regulaciones o mediaciones que canalizan los conflictos entre ellos.

Si abordamos a la gobernabilidad desde una perspectiva clásica, referida a los “modos” de gobernar y manejar o administrar los conflictos entre los distintos sectores que coexisten y que compiten dentro de un sistema político nacional, tenemos como ventaja el hecho de que se limita a estudiar el espacio dentro del sistema político y el comportamiento de los actores tradicionales que operan dentro de éste.

Es para nosotros claro que la gobernabilidad en nuestros países debe de ser el medio para avanzar en la consolidación de los derechos sociales, políticos y económicos. Mientras

¹⁷ Leticia Salomón, Proyecto de Investigación “Gobernabilidad Democrática y la Seguridad Ciudadana en Centroamérica”, CRIES, Mayo 2001.

tanto, la gobernabilidad democrática se refiere específicamente a la *construcción de un orden institucional, plural, conflictivo y abierto*.

Observamos que los regímenes en donde la gobernabilidad democrática ha sido más efectiva como en el caso de Costa Rica, son aquellos en donde el Estado posee dos características fundamentales:

- a) Altos niveles de soberanía externa que les permite controlar las causas y consecuencias del desarrollo histórico de sus poblaciones nacionales;
- b) Altos niveles de dependencia doméstica; es decir, altos niveles de subordinación en relación a las sociedades civiles que cuentan con la capacidad para condicionar los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas.

Creemos que en el caso del Estado nicaragüense se distingue por su dependencia externa y por su alto grado de autonomía en relación a la sociedad, que lo hace vulnerable a los efectos y consecuencias más difíciles de la globalización.

La gobernabilidad democrática implica de hecho la existencia de un orden democrático que goza de legitimidad social, de una institucionalidad adecuada y de un conjunto de procedimientos que permiten gobernar de acuerdo a este orden. Igualmente, se caracteriza primordialmente por aceptar la pluralidad, diversidad y por ende, la conflictividad de los distintos actores sociales y políticos en competencia.

Las demandas de gobernabilidad democrática aumentan a la vez que los recursos disponibles disminuyen. Si lo analizamos desde esta perspectiva, la ingobernabilidad ocurre cuando el nivel de conflicto entre los distintos actores desborda las capacidades del sistema político; es decir, cuando la práctica política se percibe como un desorden.

Frente a la pérdida de capacidades del sistema, el horizonte social se desdibuja produciendo en los sujetos sociales y el sistema mismo una sensación de pérdida acelerada de seguridad, la cual es vivida psicológica y socialmente por los individuos. Nos referimos a la confianza que genera un ambiente social y material estable. La pérdida de esta estabilidad genera situaciones de desconfianza, crisis e inseguridad.

De ahí que los problemas de la gobernabilidad democrática y los de seguridad ciudadana se encuentren estrechamente vinculados, a pesar de que generalmente no siempre es reconocida esta relación.

Consecuentemente, coincidimos con otros autores¹⁸ en que la seguridad ciudadana también se compone por una condición psicosociológica que se manifiesta en la confianza que poseen los miembros de una sociedad para organizar, controlar y planificar su existencia.¹⁹ Partiendo de lo anterior, el concepto de Inseguridad Ciudadana se refiere a la ausencia de esta confianza. Más concretamente, alude a la existencia de una condición social en que

¹⁸ Tales como Robert Giddens, quien afirma que la seguridad ciudadana es de hecho una condición psicosociológica. Citado en Elvira Cuadra, Andrés Pérez y Angel Saldomando, “Orden Social y Gobernabilidad en Nicaragua 1990-1996”, CRIES, 1998. Pág. 74.

“las circunstancias de la vida diaria se conviertan en una amenaza permanente”²⁰. De aquí que la relación entre seguridad ciudadana y gobernabilidad sea estrecha y directa. El desarrollo de una condición de seguridad ciudadana requiere de la existencia de condiciones sociales relativamente estables y predecibles. El concepto de gobernabilidad se refiere, más bien, a la existencia de una capacidad institucional para crear y reproducir estas condiciones.

La existencia de un orden social estable y predecible, es una condición necesaria pero no suficiente para generar un sentido de seguridad ciudadana. Un sistema político puede ser estable y predecible en términos de su capacidad para generar inseguridad, como por ejemplo el régimen de la Alemania Nazi para la comunidad judía. De aquí que, para generar condiciones de seguridad, un sistema político debe ofrecer no solamente estabilidad, sino también un mínimo de garantías para asegurar el bienestar de sus ciudadanos.

Tomando en cuenta estas consideraciones, es posible argumentar que la crisis de gobernabilidad y seguridad ciudadana que se vive en Nicaragua tiene una doble dimensión que se expresa en la incapacidad del orden social actual para garantizar el acceso a las necesidades materiales primarias de la inmensa mayoría de la población y en la ausencia de un orden social estable y predecible.

Si consideramos la actual situación sociopolítica, tomando como ejemplo las elecciones en nuestro país: contrario a otras naciones, en Nicaragua cada elección abre un sinnúmero de impredecibles consecuencias sociales que dificultan enormemente la planificación de la vida individual y social. En el noticiero matutino del día 05 de junio de 2001 del Canal 02, el empresario privado Carlos Pellas mencionaba el posible peligro de una emigración de capital estimado en un cien millones de dólares, si el clima electoral no ofrece muestras de confianza y estabilidad a los ciudadanos nicaragüenses.

Si vemos la contraparte, en países con sistemas políticos consolidados, las elecciones simplemente introducen variaciones marginales en la manera de administrar un orden social estable y predecible. Resulta curioso que dos países vecinos tengan preámbulos tan antagónicos en las antesalas electorales, como en el caso Nicaragua y Costa Rica. En el caso nicaragüense, lamentablemente, la incertidumbre impera, mientras que para su vecino más cercano las elecciones constituyen apenas cambio en las figuras políticas que gobernarán el país.

Para completar la visión global del tema de gobernabilidad y seguridad ciudadana en Nicaragua, a la crisis política, agregamos las tensiones que causan la pobreza generalizada en que vive la mayoría del país, agregamos los altos niveles de incertidumbre que produce el desorden social imperante¹⁹, el deterioro constante de la economía²⁰, y la ausencia de una

¹⁹ En los primeros días del mes de junio (del 01 al 16 de junio del 2001) se produjeron una serie de protestas estudiantiles universitarios por un alza ilegal en las tarifas del transporte público, a la que luego se sumaron paros de los sindicatos de transportistas por contrarrestar dicha alza. Centenares protestaron en violentas manifestaciones callejeras.

estrategia nacional viable orientada a enfrentar este deterioro. La condición existencial que crea el vivir dentro de un marco social en continuo proceso de deterioro produce formas de conducta humana que paradójicamente tienden a acelerar la descomposición del sistema social, es decir, el vivir sin la capacidad de organizar y planificar el futuro, induce a la población de todos los estratos sociales a actuar simplemente en función del presente.

El aprovechar al máximo las oportunidades inmediatas sin considerar las consecuencias de la manera en que éstas son aprovechadas se convierten en un principio de vida para quienes viven sin la garantía de un mañana. Sin esta garantía, no sólo se hacen imperceptibles las oportunidades que se derivan de una conducta social apegada a la ley y la moralidad, sino también de los castigos que devienen de conductas sociales reñidas con ésta. La ley, que en lo fundamental impone códigos de conducta social mediante la generación social de consecuencias a la conducta individual, pierde su valor en ausencia de un horizonte de tiempo en el que puedan materializarse estas consecuencias.

1.5. Inseguridad Ciudadana

Según el Capitán Juan Rivera de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional de Nicaragua, las encuestas y sondeos de opinión realizadas en los últimos años en la región centroamericana colocan *la violencia y la inseguridad como la principal preocupación de*

²⁰ El presidente del Banco Central de Nicaragua, Doctor Noel Ramírez, anunció a los medios públicos oficialmente que el crecimiento económico nacional sería del 3% en lugar del 4% estimado, aludiendo a la crisis cafetalera de inicios del año 2001 como causa fundamental.

los centroamericanos. Los ciudadanos temen por su seguridad porque saben que la violencia y la criminalidad se han incrementado; se enteran por los medios de comunicación, por los vecinos o porque ellos o su familia han sido víctimas de los delincuentes en algún momento. Estas personas que ni siquiera conocen las estadísticas policiales y saben que la situación empeora día a día.

Otra fuente de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional²¹ nos informaba que los datos policiales presentan problemas graves para reflejar la realidad de cada país, tal como se señala en las siguientes afirmaciones:

- Las víctimas no denuncian los delitos ante las instancias respectivas porque desconfían de la eficiencia de la policía o de la corrupción de sus integrantes. También porque no le dan mucha importancia a lo perdido, porque tienen temor a las represalias, porque saben quiénes son los responsables y no quieren dañarlos, o porque piensan resolver individualmente el asunto.
- Las víctimas no denuncian porque no saben ante quién hacerlo. Esto ocurre cuando hay más de alguna policía, y existen oficinas del Ministerio Público o de los Derechos Humanos.
- Las víctimas denuncian en más de una oficina, ocasionando un doble conteo en los datos delictivos.
- Las víctimas prefieren denunciar en los medios de comunicación para atraer más rápidamente la atención de las autoridades.

²¹ Este oficial solicitó que nos abstuviésemos de utilizar su nombre y rango.

- Los registros policiales cambian los criterios de agrupación o tipificación de los delitos, y hasta la cobertura geográfica de sus oficinas, lo que vuelve incomparables los datos de un año a otro o de un país a otro.

Lo anterior nos evidencia que un dato policial no recoge la dimensión exacta del problema y sirve únicamente como indicador de tendencias. La actitud de las personas y el mayor o menor grado de confianza en las instituciones pueden hacer que la cantidad de delitos denunciados cambie de un mes a otro o de un año a otro.

Lo mismo ocurre con el mejoramiento de los sistemas de información y procesamiento. Los datos sobre violencia familiar, violaciones o acoso sexual, por ejemplo, se han incrementado sustancialmente en la década del noventa con relación a la década del ochenta o en el año 1999 con relación a 1995, y esto puede responder a una mayor disposición a la denuncia (mayor conciencia de derechos) o a una reciente tipificación como delitos, y no necesariamente a un incremento de los hechos denunciados. Una situación similar puede observarse con las denuncias de violación a los derechos humanos.

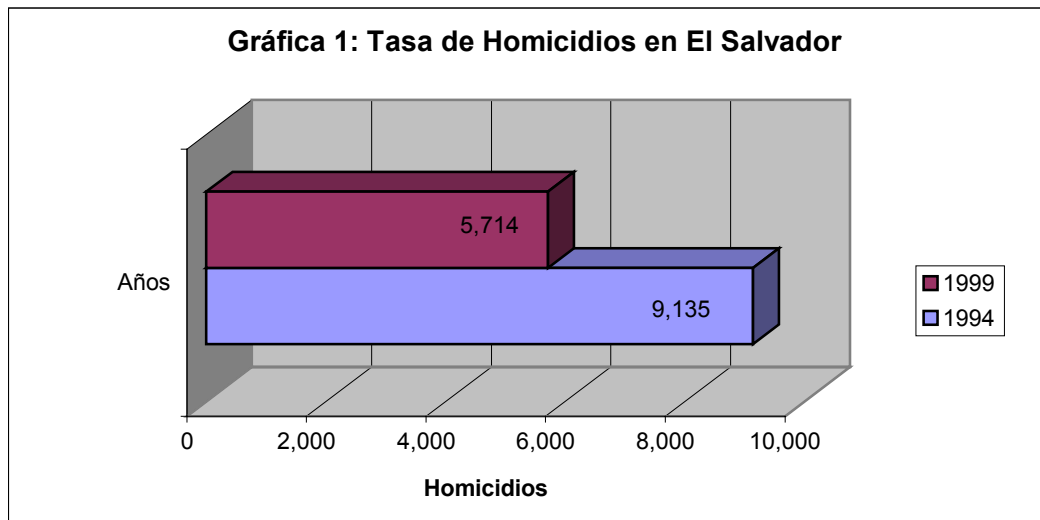
Esto nos indica que si un hecho delictivo en particular sufre un incremento sustancial de un año a otro, habría que investigar si ha ocurrido algún hecho de los ya señalados antes de afirmar que los asaltos o robos a personas o residencias aumentaron en un cincuenta o un sesenta por ciento, con lo cual pudiéramos estar realizando deducciones erradas.

Si lo anterior ocurre dentro de cada país, cabe preguntarse lo que sucede con los datos que pretenden comparar la situación de la región. Por ello es que se han desarrollado algunas encuestas de victimización en los últimos años, con las cuales se pretende recoger directamente la condición de víctimas de los encuestados o de sus parientes, vecinos o amigos. Encuestas como éstas, realizadas periódicamente y con procedimientos científicos, permiten tener un conocimiento más real de la evolución de la violencia y criminalidad en un país o una región.

La situación anterior ha llegado a plantear como prioritaria la unificación de criterios policiales en el ámbito centroamericano, para tener estadísticas que reflejen con mayor propiedad lo que está ocurriendo en Centroamérica en materia de seguridad ciudadana. Esa es una de las tareas pendientes de la Asociación Centroamericana de Jefes de Policía, constituida a raíz de la firma del Tratado Marco de Seguridad Centroamericana.

Hechas todas las reservas podemos considerar ciertas indicadores que proporcionan datos interesantes sobre lo que ocurre en la región en términos de Seguridad Ciudadana.

En El Salvador, según datos proporcionados por Alma Benítez para el período 1994-1999, exceptuando 1998 del que sólo presenta datos parciales, los homicidios pasaron de 9,135 en 1994 a 5,714 en 1999, presentando una tendencia reductiva en todos los años considerados. En cambio, las lesiones se incrementaron sustancialmente de 1994 a 1995 (6,443 a 16,182), se redujeron en los dos años siguientes (14,352, 8,403) y volvieron a elevarse en 1999 (16,645).



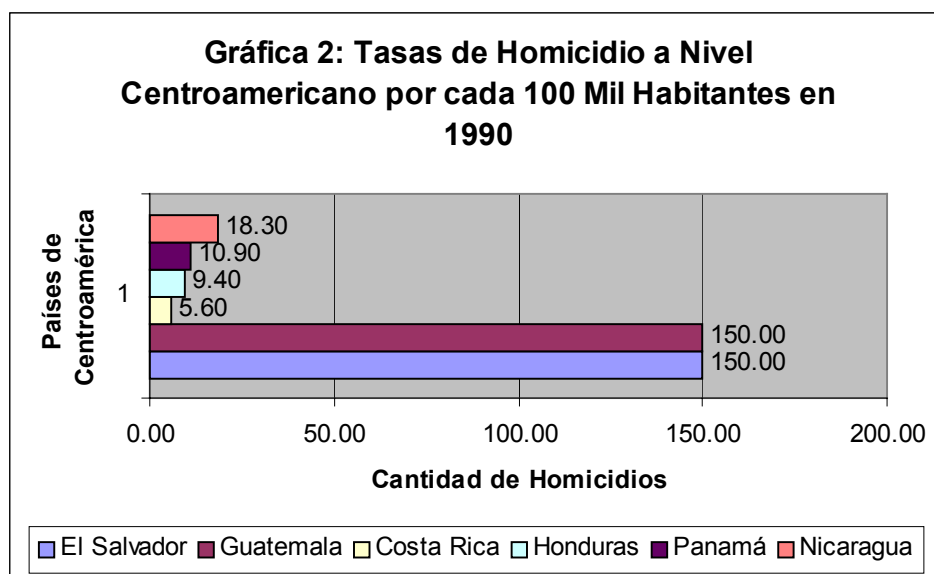
Fuente:

Proyecto de Investigación de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana en Centroamérica. CRIES. Mayo, 2000.

De acuerdo con datos del BID, Guatemala y El Salvador presentaron entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa, las más altas tasas de homicidios por cien mil habitantes (150 en cada uno de ellos), lo cual puede explicarse por la situación de guerra que se vivía en ambos países. Resulta interesante destacar que la misma fuente señala que muy lejos de estos dos países se encuentran Nicaragua (18.3), Panamá (10.9), Honduras (9.4) y Costa Rica (5.6).

En Panamá, según datos del Banco Mundial (2000), la tasa de homicidios que era de 2.1 por cada cien mil a comienzos de los setenta, se quintuplicó una década después alcanzando la tasa de 10.9 por cien mil habitantes, superando la de Estados Unidos que es de 10.1. De acuerdo con otra fuente, se plantea un ritmo ascendente en los delitos contra la propiedad

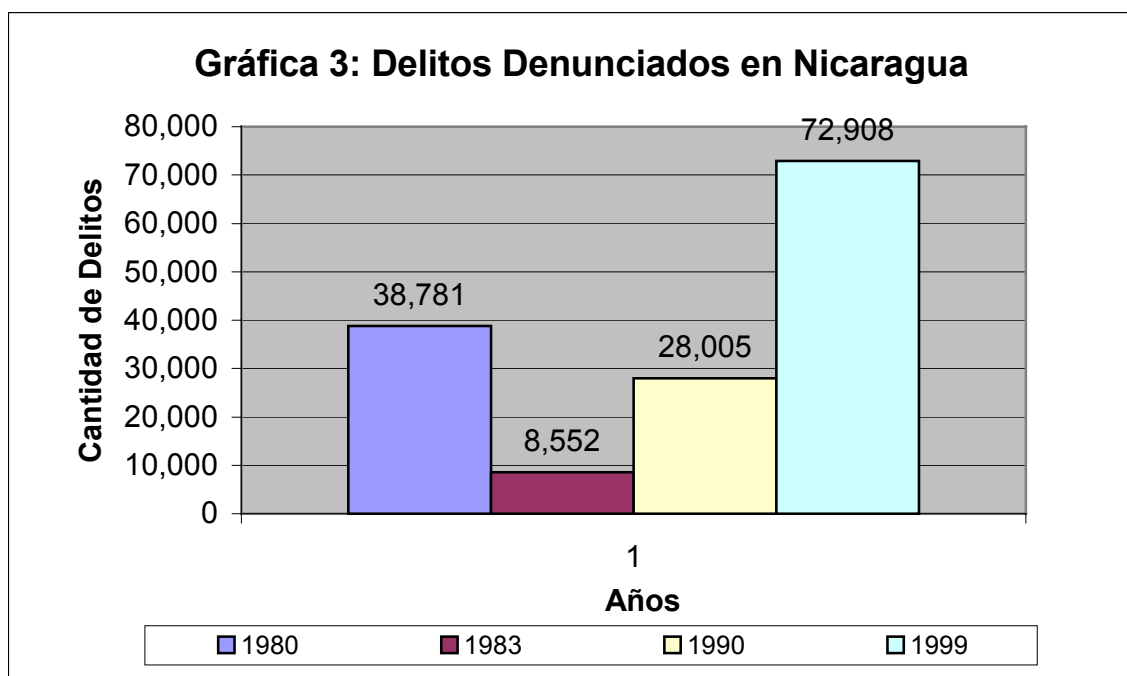
(de 681 por cada cien mil en 1990 a 1,113 en 1994), contra la vida y la integridad personal, y contra la libertad sexual²².



En Belice, las entrevistas realizadas por Shaun Finetti (2000) revelan que el 42 por ciento considera que la criminalidad se ha mantenido igual, en tanto los demás entrevistados señalan que se ha incrementado. Consideran que los delitos más comunes en Belice son: el asalto a mano armada, el asalto en la calle con intento de robo y el homicidio. Los encuestados consideran que apenas el 30 por ciento de los delitos son reportados a la policía. Además, proporciona el dato de que Belice tiene la tasa más alta de población encarcelada (490 por cien mil) con relación a Centroamérica y la segunda más alta en todo el Caribe, después de Gran Caimán que tiene 575 por cada cien mil.

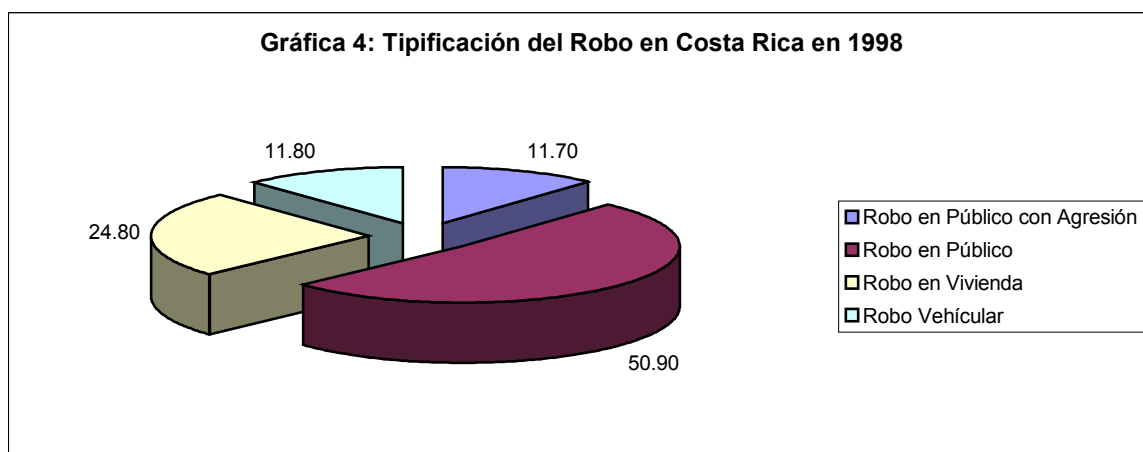
²² Ver Gráfico 2.

En Nicaragua, de acuerdo a los datos proporcionados a la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) por Roberto Cajina (2000), el total de delitos denunciados pasó de 38,781 en 1980 a 8,552 en 1983 (primera fase), de 8,552 en 1983 a 28,005 en 1990 (segunda fase) y de 28,005 en 1990 a 72,900 en 1999 (tercera fase). Cajina atribuye esa variación al impacto ideológico del triunfo de los sandinistas y a la difusión de una moral que, en ese entonces se diferenciaba sustancialmente de la del régimen anterior.



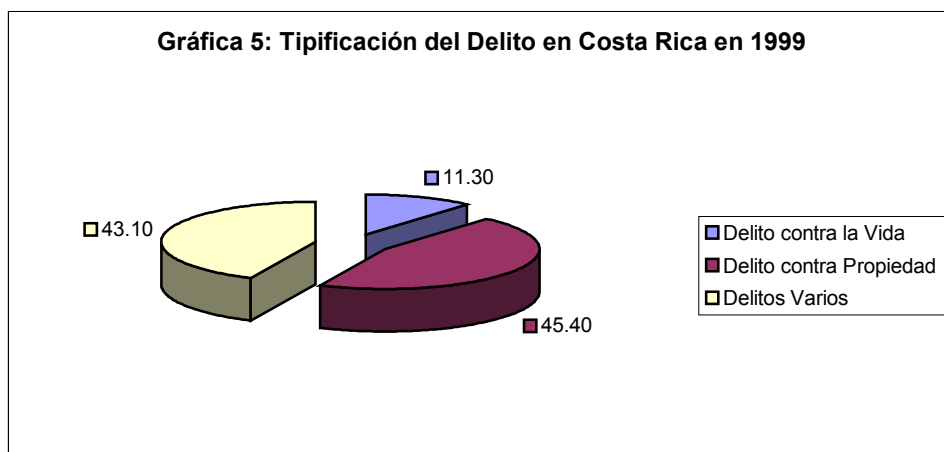
Pese a lo apropiada que parece ser esa afirmación, sería interesante analizar si tuvo algo que ver el hecho de que, en esa época, se acababa de crear una nueva institución policial. Lo que pudo influir en la capacidad de registro o en la confianza de las personas en la nueva institución.

Costa Rica, pese a tener una tasa menor de criminalidad, en comparación con el resto de Centroamérica, también experimenta un incremento de los delitos. El total de delitos se incrementa en una década (de 1988 a 1997) de la siguiente manera: el total, de 1,013.2 a 1,415.5 por cada cien mil habitantes y, dentro de él, los delitos contra la vida pasan de 112 a 195; los delitos contra la propiedad, de 856 a 1,185; y los delitos sexuales, de 45.2 a 74.6. Resulta interesante destacar que el total de delitos experimenta variaciones importantes, por ejemplo, de 1988 a 1992, asciende; en 1993, desciende; en 1994, asciende; en 1995 se reduce; y en 1996 reinicia un ciclo ascendente que se mantiene en 1997.



El más reciente estudio realizado en ese país, en febrero de 1999, determinó que el 26.9 por ciento de los costarricenses habían sido víctimas de un delito en los 12 meses anteriores al sondeo. Los delitos más frecuentes fueron los robos o asaltos en un lugar público (50.9 por ciento); el robo o asalto en la vivienda (24.8 por ciento); el asalto en lugar público con agresión (11.7 por ciento); y el robo del vehículo (11.8 por ciento). Al comparar los datos delictivos de la policía con los resultados de la encuesta de victimización, se descubre un

sustancial incremento de la criminalidad, lo que permite hablar de una “cifra oculta” de la criminalidad, la cual no es recogida por la policía por cualesquiera de las razones arriba apuntadas.



En 1997, de acuerdo con los datos de la Fuerza de Seguridad Pública, los delitos contra la vida y la integridad corporal representaban el 53.3 por ciento; los delitos contra la libertad, la seguridad y la salud representaban el 10.2 por ciento; los delitos contra la propiedad el 14.7 por ciento; y otros delitos representaban el 23.8 por ciento. En los primeros siete meses de 1999, de acuerdo con los datos de la Policía de Investigación (DGIC), los delitos contra la vida representan el 11.3 por ciento; los delitos contra la propiedad, el 45.4 por ciento, y los delitos varios, el 43.1 por ciento.

La radiografía de la inseguridad expresada anteriormente no es completa pero permite tener una idea acerca de lo que está pasando en la región centroamericana. Igualmente sirve para

advertir sobre la complejidad del fenómeno y, particularmente, del margen de desconfianza que provocan las estadísticas policiales.

Para el caso, véanse las tasas de homicidios de 150 por cien mil habitantes que plantean el BID y el Banco Mundial para Guatemala y El Salvador: ¿Los homicidios eran registrados como denuncias en la policía, una de las instituciones del Estado que generaba inseguridad y, por lo tanto, desconfianza? ¿Se registraron como homicidios pero utilizaban datos de medicina forense? ¿Qué pasó con las víctimas de la guerra que no se registraron en ninguna dependencia estatal?

Estos y otros problemas de complejidad variada se plantean al tratar de comparar la situación de los países centroamericanos. Sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones generales sobre la situación de la inseguridad que se vive en la región:

- Que los delitos producidos, denunciados o no en la policía, han experimentado un crecimiento ascendente en las dos últimas décadas pero con mayor énfasis en la última.
- Que los delitos que más crecen son los delitos contra la propiedad.
- Que a pesar de su crecimiento los delitos contra las personas no han alcanzado los niveles de la década de la crisis centroamericana.
- Que el delito más visible es el delito contra la propiedad aunque no se puede afirmar con seguridad si son delitos de menor, regular o mayor cuantía, porque ese tipo de registro no lo llevan las estadísticas policiales.

- Que existe una mayor disposición ciudadana a denunciar delitos relacionados con violencia doméstica, violaciones y acoso.
- Que las reformas policiales o el creciente fortalecimiento del Estado de Derecho está impulsando a las personas a denunciar delitos que antes no denunciaba.
- Que existe mayor capacidad policial para registrar los delitos aunque se ha avanzado muy poco en la unificación de criterios policiales para tipificar delitos cuya cuantía sea comparable.

2. Seguridad Democrática en Centroamérica

Como parte del proceso global vinculado al fin de la Guerra Fría, Centroamérica desde finales de la década de los ochenta y durante la década de los años noventa fue escenario de profundos cambios estructurales²³. Estos iniciaron con el proceso pacificador centroamericano que se cristalizó en Esquipulas y que ha sido continuado de manera sostenida por los Presidentes de los países de la región, a través de las Cumbres Centroamericanas de Presidentes²⁴. A raíz de aquí, los analistas centroamericanos visualizaron con mayor optimismo su futuro a través del desarrollo de acciones tendientes a consolidar la reconciliación, la democracia, el desarrollo y la paz, a partir de acuerdos nacionales y la concertación de propuestas regionales.²⁵

²³ Descritos a continuación en las cinco tendencias del actuar centroamericano.

²⁴ Usualmente se establecen dos cumbres al año, salvo que por razones especiales se convoque a una Cumbre Extraordinaria.

²⁵ Rojas Aravena, Francisco. Centroamérica: Una Nueva Agenda de Seguridad, 1996. Venezuela. Pág.01.

A finales del siglo XX, en Centroamérica se percibieron cinco tendencias:²⁶

1. Un creciente proceso de democratización. El proceso de Esquipulas, por medio del diálogo presidencial tendiente a alcanzar la paz, permitió abrir un espacio de reconciliación nacional en el cual la conformación de regímenes políticos abiertos de inspiración democrática jugó y juega un rol central. En Centroamérica actualmente, existen desde el punto de vista formal, democracias en todos sus estados nacionales. En la región, pese a las dificultades, la democracia continúa abriéndose paso. El mayor desafío en este campo es la profunda crisis institucional. Es fundamental producir un gran cambio en el Estado y en sus instituciones, consolidando las bases institucionales que posibiliten la democracia, tales como la educación, la cultura de la tolerancia y el respeto de las mayorías y minorías.
2. El retroceso del militarismo: Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, vivió bajo sistemas políticos regidos por el militarismo. Uno de los fundamentos de la crisis centroamericana estuvo radicado en el autoritarismo, la marginación política y el uso constante de la violencia como forma de dominación y organización política y social. La crisis centroamericana de la década de los años ochenta llevó a un acelerado crecimiento de los aparatos militares y al finalizar el siglo XX mostró un proceso consciente de desmovilización, reducción y reconversión de sus ejércitos. Las fuerzas armadas han perdido poder, pero no han dejado de ser poderosas en sus respectivos

²⁶ Rojas Aravena, Francisco. Centroamérica: Una Nueva Agenda de Seguridad, 1996. Venezuela. Págs. 03-05.

contextos desde una perspectiva política. No obstante, lo central es el cambio de orientación que han tenido, especialmente en la filosofía militar. El caso de Nicaragua es el ejemplo clásico, con el proceso de profesionalización del ejército que duró aproximadamente diez años. Hoy en día, las fuerzas armadas se ubican en una perspectiva de respeto y apoyo al Estado de Derecho y al político democrático; este cambio permite señalar que estamos en el inicio de una nueva era del desarrollo regional y nacional.

3. Una integración profunda: Concluida la primera etapa de construcción de la paz desde Esquipulas II a la Cumbre Presidencial de Antigua, Guatemala (1990), Centroamérica pudo fijarse nuevas metas que le permitieron pasar de la pacificación a objetivos claros a lo largo del quinquenio. La puesta en funcionamiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en 1991, por medio del Protocolo de Tegucigalpa, posibilitó un salto cualitativo en los procesos de integración entre los diversos actores y agentes socioeconómicos centroamericanos. El SICA proyectó una forma de integración moderna, ejecutada con una perspectiva de regionalismo abierto, es decir, un proceso integrador que permitió una mejor inserción nacional de cada país miembro.
4. Mantenimiento de condición de pobreza extrema: Los avances en el campo político, gobernabilidad, reconversión militar, así como los procesos de integración económica no opacan la realidad de pobreza extrema en que viven más del setenta por ciento de los centroamericanos. El analfabetismo y la carencia de programas efectivos de salud pública es parte del día a día de más de la mitad de los pobladores del istmo

centroamericano. Hay que agregar la iniquidad, que comparte los primeros lugares en términos comparativos. El proceso de transición centroamericano no solo planteó el objetivo de la paz, sino que marcó el objetivo de desarrollo como alternativa única para responder a las metas permanentes del bienestar de sus pueblos y de consolidación de la paz y la democracia. Resolver las demandas urgentes referidas a la pobreza, la equidad, las necesidades básicas del ser humano como el acceso a la salud, educación y generando oportunidades de trabajo resolverían temas cruciales de la seguridad ciudadana. El logro de esa meta ocupó y ocupa la primera prioridad regional.

5. Reaseguro internacional a la democracia: Todos y cada uno de los acuerdos centroamericanos buscaron y buscan establecer una red de solidaridad y apoyo que fomente la democracia y logre cambiar el peso de una cultura autoritaria, consecuente de un legado histórico. Desde esta perspectiva, Centroamérica buscó reaseguros internacionales para su democracia se expresara en armonía con las políticas regionales e internacionales. De este modo es que se enmarca la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES). Centroamérica en su ámbito subregional, buscó operacionalizar los acuerdos para afianzar el contexto democrático y generar medidas de alerta y acción temprana frente a los peligros que la amenacen.

Estas cinco tendencias fueron enfrentadas por Centroamérica sobre una base común, a partir de un proyecto elaborado conjuntamente lo que significó una alianza para la democracia, la paz y el desarrollo. Esta coalición de intereses se expresó en la suscripción

de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en la cumbre celebrada en Nicaragua en octubre de 1994.

La Alianza²⁷ estableció un plan de acción en seis áreas críticas: Inversión social; equilibrio macroeconómico; gobernabilidad; comercio; medio ambiente y respeto por la diversidad cultural y étnica.

La Alianza buscó otorgar a las autoridades una estrategia que pudiera resolver situaciones a corto plazo siempre con una perspectiva de desarrollo futuro. Lo anterior sobre la base de generar espacios de participación efectiva de las respectivas sociedades civiles en los procesos decisorios.

En síntesis, la Alianza es definida como una iniciativa política, programas y acciones a corto, mediano y largo plazo que delinean un cambio en el esquema y estrategia de desarrollo. La Alianza consolida los procesos de interrelación e integración en la región, su objetivo central – igual que el del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)– es hacer del istmo una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Es en el marco de la Alianza donde se inscriben los cambios en el ámbito de la seguridad. Un primer aspecto que resalta del proceso centroamericano es el reconocimiento de la responsabilidad compartida en la preservación de la estabilidad y la paz de la región centroamericana.

²⁷ Rojas Aravena, Francisco. Centroamérica: Una Nueva Agenda de Seguridad. Venezuela. 1996. Pág. 06.

Un segundo aspecto está referido a la comprensión de los distintos niveles en los que se expresa la seguridad de los individuos con la comprensión de la seguridad humana.

Aún cuando hay desacuerdos en materia de delimitación territorial y de fronteras, reclamos territoriales pendientes entre los Estados miembros, el objetivo fundamental es establecer a la región como una zona de paz y estabilidad.

Es bajo esta perspectiva que en Centroamérica surge una nueva agenda a mediados de los años noventa, la que tuvo énfasis y prioridades de acuerdo a los intereses de cada parte miembro, pero poseía una comunidad esencial que estaba constituida por: democracia, integración y la superación de la pobreza. Esta nueva agenda estableció una perspectiva amplia de la seguridad, en la cual los elementos de carácter militar fueron parte componente y no necesariamente el principal.²⁸

²⁸ Rojas Aravena, Francisco. Centroamérica: Una Nueva Agenda de Seguridad, 1996. Venezuela. Pág. 07.

Capítulo II : El Sistema de la Integración Centroamericana y el Tratado Marco de Seguridad Ciudadana

1. Antecedentes del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica

Como antecedente inmediato del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica citamos la suscripción de la nueva Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en Panamá el 12 de Diciembre de 1962, con la cual se creó el Consejo de Defensa Centroamericano el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), instancia nacida en la década de los sesenta para enfrentar a los movimientos rebeldes.

Dicho Consejo tenía como función principal actuar como órgano de consulta en materia de defensa regional y velar por la seguridad colectiva de los Estados miembros, así como informar de sus actividades a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.²⁹

La década de los setenta representó años de gran inestabilidad política para la región centroamericana, producto del descontento general por la actuación de los gobiernos de turno. En el caso de Nicaragua, ésta fue sacudida por una guerra insurreccional que perseguía la destitución inmediata del dictador Anastasio Somoza Debayle, quien finalmente sale del país en julio de 1979.

²⁹ Instituto Nicaragüense de Estudios Socio Políticos (INESP). Parlamento Centroamericano, Managua, Agosto de 1993, p. 36.

A pesar de que en su fase inicial el nuevo gobierno Sandinista recibió la aprobación internacional, pronto entró en grandes discrepancias con el Gobierno de los Estados Unidos y por consiguiente con los países del bloque occidental entero. Esto la llevó a afianzar sus alianzas con Cuba, la ex Unión de Soviéticas y el restante de los países integrantes del bloque oriental. Estas alianzas situaron a Nicaragua como el factor desestabilizador de la región centroamericana.

La década de los ochenta e inicios de los noventa fueron años de graves conflictos internos en Guatemala, El Salvador y por supuesto Nicaragua. Ante este panorama, se conforma en 1984 el Grupo de Contadora.

El Grupo de Contadora estaba conformado por los gobiernos de Colombia, Venezuela, Panamá y México, quienes se sintieron de algún modo cercanos a la región centroamericana. y profesaban una profunda preocupación por la situación política y económica de la región. El Grupo de Contadora intentó buscar una solución política del conflicto en la región e impedir lo que en aquel momento se veía como una inminente intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Nicaragua. Ya se habían instalado las bases militares en Honduras y así se explica uno de los capítulos del Tratado que hace referencia a ese problema de la existencia de bases, Estados Unidos estaban apoyando casi abiertamente al ex – revolucionario Sandinista Edén Pastora Gómez, “Comandante Cero”, desde Costa Rica, para realizar incursiones militares a partir de ese territorio sobre Nicaragua. Lo mismo ya comenzaba a ocurrir desde Honduras, con otra

fracción que se llamó Resistencia Nicaragüense, provocándose otra guerra civil en Nicaragua.

En ese sentido consideramos la actividad del Grupo Contadora como un factor decisivo, pues es a través de su gestión que la región centroamericana logra, gracias a la negociación promovida desde afuera, detener la temida intervención militar de Estados Unidos en territorio nicaragüense.

El Grupo Contadora no logró entonces su objetivo de que se firmara un acuerdo de paz y de operaciones en Centroamérica y que se detuvieran los conflictos como se había propuesto, pero sí logró detener la intervención directa de los Estados Unidos en aquella época. Sirve además de base para que en 1986, después de realizado un proceso de transición democrática exitoso en Guatemala que puso fin a casi 20 años de autoritarismo bajo la hegemonía de las fuerzas armadas, se realizaran elecciones de la Asamblea Constituyente en 1984. En 1985 hay elecciones democráticas, ganadas por el partido demócrata cristiano, y llega al poder el Señor Vinicio Cerezo.

Una de las virtudes del gobierno de Cerezo fue sostener la política de “neutralidad activa”, que separaba a Guatemala de las líneas de confrontación hacia Nicaragua. Esta línea política impulsa a Cerezo a convocar a sus homólogos centroamericanos a una reunión en la ciudad guatemalteca de Esquipulas, muy conocida por ser un lugar de peregrinación

religiosa, para tratar de encontrar soluciones reales al conflicto en la región centroamericana. Cerezo logra que a esa ciudad lleguen los cinco presidentes, incluyendo en aquel entonces al Presidente Daniel Ortega de Nicaragua.

En esta coyuntura, la presencia del Presidente Daniel Ortega marcó un hito, ya que por primera vez se le otorgaba el reconocimiento tácito de la legitimidad al gobierno sandinista que presidía.

Esta iniciativa desembocó en la firma de los Acuerdos de Paz -Esquipulas II- suscritos en el año de 1987 en la Ciudad de Guatemala, después de un año de arduas negociaciones.

Si bien este acuerdo recoge la mayoría de los elementos que ya estaban contenidos en el Acta de Paz y Cooperación en Centroamérica, propuesto por el “Grupo Contadora”, tiene como novedad el agregar los puntos principales que estaban contenidos en el Acta de Contadora, como la necesidad de que los gobiernos de la región dialogasen con sus respectivas oposiciones armadas. Es decir, que tanto los guatemaltecos, como los salvadoreños y los nicaragüenses se comprometieron entrar en negociaciones con las fuerzas armadas opositoras con el propósito de poner fin a los conflictos armados de la región, por la vía de la negociación y del diálogo.³⁰

En aquel momento esto constituyó un desafío a la política norteamericana en la región, pues éstos preferían optar por la vía militar como solución a estos conflictos. En el caso de

³⁰ Centroamérica: La Seguridad Democrática Regional; La Seguridad Regional. Seminario: “Hacia las Fuerzas Armadas del año 2000”, 28 de Noviembre de 1995. Pág. 04.

Nicaragua, el Gobierno Norteamericano estaba convencido, al menos en apariencia, que la resistencia nicaragüense (la Contra) derrocaría al Gobierno Sandinista.

La misma política se aplicaba en el caso salvadoreño, donde se pensaba que la ayuda militar norteamericana era lo suficientemente importante como para terminar con el desafío militar que representaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Estos temas nunca fueron abordados abiertamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes siempre afirmaron oficialmente su apoyo a la gestión de Contadora.

Las Naciones Unidas asumen en 1988, con su Grupo de Observación para Centroamérica, el seguimiento y control de los acuerdos a los que llega el gobierno de Nicaragua con la oposición armada de la Resistencia Nicaragüense.

Con el auspicio del Secretario General de las Naciones Unidas se inicia en 1989 el proceso de paz en El Salvador. Este se extiende por dos años y culmina en 1991 con la firma del Acuerdo de Chapultepec, suscrito en presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del mencionado Secretario General de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Chapultepec se trata de un acuerdo muy complejo, que fundamentalmente se puede resumir en el hecho de que ambas partes acuerdan la separación total de sus funciones en el tema de seguridad exterior. Esta queda a partir de entonces a cargo de las fuerzas armadas, y la seguridad interior queda a cargo de una nueva policía, que se reestructura y reorganiza.

Con una visión proactiva y renovadora del proceso de integración tras la firma de los acuerdos de paz de Nicaragua y El Salvador, dicho proceso vuelve su atención a los temas de integración política y económica. Al englobar todos los problemas económicos, sociales, políticos y militares, se acuerda la creación una serie de comisiones para abordar estos temas específicos. Entre éstas se crea la Comisión de Seguridad.

Esta comisión está integrada por los Vice Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de todos los países centroamericanos.³¹ Uno de los temas a abordar por la Comisión de Seguridad fue estudiar la composición de las fuerzas armadas de cada país miembro del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), así como establecer parámetros que garantizaran cierto nivel de equidad.

El tema fue abordado en 1989 por la Comisión de Seguridad y fue considerado tan importante para la región que los Presidentes centroamericanos ordenaron que se preparara una propuesta. Tras una pausa en las mesas de negociación por las elecciones presidenciales a efectuarse en Nicaragua a finales de ese mismo año. Concluidas éstas, se reactivan las rondas negociadoras y se decide que será el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua el encargado de la preparación del anteproyecto de Seguridad en la región centroamericana. Una vez elaborado, el anteproyecto fue presentado ante la Comisión de Seguridad, en donde fue discutido y mejorado al incluir las propuestas de cada país miembro.

³¹ Centroamérica: La Seguridad Democrática Regional; La Seguridad Regional. Seminario: “Hacia las Fuerzas Armadas del año 2000”, 28 de Noviembre de 1995. Pág. 06.

El resultado final fue un instrumento denominado ***Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática***, que tiene como marco jurídico al Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática. Con esto, el Tratado Marco de Seguridad Democrática pasa a ser un instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa. El eje fundamental del Modelo Centro Americano de Seguridad Democrática es el ser humano, y en el se desarrollan los nuevos conceptos de seguridad.

2. El Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, tiene como instrumento jurídico al Tratado Marco de Seguridad Democrática, que a su vez tiene como base un proceso anterior de integración que se iniciaron en el terreno comercial y económico. En nuestra opinión, gran parte de la responsabilidad del fracaso de los intentos integracionistas de los años anteriores tienen su raíz en la limitada visión de lo que deberían ser los lazos que unían a los estados centroamericanos (económicos y políticos).

Por otro lado, consideramos que el Tratado Marco de Seguridad Democrática responde en buena medida a la estrategia de desarrollo humano sostenible, basada en el gran paradigma de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano y concretizada en la conformación de la ALIDES, a Alianza para el Desarrollo Sostenible que es una iniciativa de políticas, programas y acciones a corto, mediano y largo plazo que propone un cambio de esquema de desarrollo, de nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y acciones

locales, nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad política, económica, social, cultural y ambiental de las sociedades.

La Alianza es una estrategia regional de coordinación y concertación de intereses, iniciativas de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos. Su implementación se apoya en la institucionalidad y no sustituye los mecanismos o instrumentos de integración regional existentes, sino que los complementa, apoya y fortalece, intrarregional y extrarregionalmente, en especial en su proceso de convertir el desarrollo sostenible en la estrategia y política central de los Estados y de la región en su conjunto. Mediante la Alianza se reiteran y amplían los compromisos ya contraídos por los Estados para el nuevo proceso de desarrollo sostenible en el istmo.

Es en base a lo anteriormente expuesto, que podemos decir que el Tratado Marco de Seguridad Democrática viene a ser uno de los primeros esfuerzos regionales por dejar formalmente sentadas estas bases. Esto se recoge en los Considerandos de dicho instrumento.

Creemos que es por ello que los líderes de la nueva visión integradora centroamericana reconocen la necesidad de incluir en el marco del proceso integrador todos los aspectos que tengan que ver con la vida de los ciudadanos de la región. Es así que en el instrumento jurídico del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, contenido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, ya se incluyen los nuevos focos de atención que prioriza la renovada iniciativa integracionista: una visión global de los componentes esenciales que integran la vida de todos los ciudadanos centroamericanos: respeto a la vida en todas sus manifestaciones, la mejora permanente de su calidad, el respeto a la vitalidad y diversidad

de nuestra tierra, la paz; la democracia participativa, el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, así como el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de nuestros pueblos, la integración económica de la región y con el resto del mundo, así como la responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenido.

También es importante recalcar la notable tendencia a no burocratizar de los ejes de acción en materia de garantías para la seguridad democrática y esto lo consideramos un punto muy importante, porque no se crean órganos especiales, sino que se dejan a los que ya están funcionando de hecho como resultado del proceso integrador, cuyas máximas instancias son la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, y los consejos sectoriales e intersectoriales, y que tienen ya que ver con cada uno de los campos específicos. Por ejemplo, si se trata de protección del patrimonio cultural hay órganos específicos designados por los Ministerios de Educación, en el caso de Guatemala del Instituto de Antropología e Historia por mencionar alguno.

Otro aspecto importante establecido en el Tratado Marco de Democrática es la importancia de establecer medidas de fomento de la confianza, gestión de crisis y solución de conflictos. Lo del fomento de la confianza por ejemplo, se aplica a los ejércitos, en cuanto éstos están en la obligación de rendir cuentas de sus acciones y adquisiciones de armamentos a sus homólogos en la región para que de esta manera mientras más informados estén unos sobre otros, sea más remota la posibilidad de discrepancias o enfrentamientos entre las naciones y se trabaje por una relación de cooperación entre los ejércitos para la defensa conjunta de la región centroamericana.

Si bien en párrafos anteriores se dio una visión generalizada de lo que abarca el Tratado Marco de Seguridad Democrática, es importante conocer sus contenidos por títulos y con un grado mayor de especificidad para apreciar la importancia de su contenido y las razones de ser de dicho instrumento, con esto nos referimos a que debemos conocer a que necesidades de la región responde la creación de este Tratado.

De acuerdo a los principios y propósitos enunciados en el tratado, creemos que aunque la iniciativa es admirable y la esperanza de que sean realidades, para que arranque el segundo paso –el primer paso fue la suscripción y ratificación del mismo- es fundamental y necesario un compromiso formal de todos y cada uno de los gobiernos de la región para trabajar en la misma línea.

Por otro lado, la participación ciudadana es casi nula: la mayoría de los 26 millones de centroamericanos que formamos el capital humano de la región desconoce los principios sobre los cuales se sustenta la integración, ya no mencionar conocimiento sobre el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Sin conocimiento de lo que somos y tenemos a disposición para ser, no hay forma de integrarnos en una verdadera participación para exigir nuestros derechos, ya sean particulares o comunes.

El proceso de integración debe pasar de ser un proceso a ser el modo de vida bajo el cual queremos vivir y crecer en Centroamérica.

2.1. Estado de Derecho

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática es parte del Sistema de Integración Centroamericana. El SICA es el órgano político que regula las relaciones entre los Estados; porque además de las relaciones económicas, que están reguladas por el Tratado de Integración Centroamericana, que data desde 1960, existe este organismo de integración política llamado SICA y cuyo contenido complementa las disposiciones del protocolo de Tegucigalpa, a las cuales está subordinado el Tratado Marco de Seguridad Democrática³².

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática está basado en la democracia y en el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de derecho en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.³³

El objetivo primordial del Tratado Marco de Seguridad Democrática es el garantizar la seguridad de todos los Estados Centroamericanos y por ende, la seguridad de las personas que habitan en la región. Esto nos lleva a afirmar que la razón de ser del Tratado sea el respeto, la promoción y tutela de los derechos humanos en los sistemas democráticos de la región.³⁴

³² Tratado Marco de Seguridad Democrático, Artículo 01.

³³ Tratado Marco de Seguridad Democrático, Artículo 02.

³⁴ Tratado Marco de Seguridad Democrático, Artículo 03.

En su introducción, el Tratado Marco de Seguridad Democrática enmarca los propósitos del mismo, estableciendo que la obtención del desarrollo sostenible en Centroamérica, solo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que asegure las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región³⁵.

Es importante recalcar que para los Estados parte son deplorables todas aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos pues éstas van en detrimento de todos los Estados de la región y sus habitantes.

Los Estados signatarios reconocen la importancia de que el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas. Asimismo, el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática orientará cada vez más, sus recursos a la inversión social.

Para los Estados signatarios, es primordial que se reconozca al Estado de Derecho como la forma bajo la cual se debe de regir un nación, y destacan que el Estado de Derecho tiene como pilares fundamentales: la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas. Para lograrlo, es

³⁵ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Introducción. Págs. 01 y 02.

necesario un proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones democráticas en cada uno de los Estados parte, por medio de un ejercicio continuo y sostenido de consolidación y fortalecimiento del poder civil, la limitación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad pública a sus competencias constitucionales y la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los valores democráticos que les son comunes³⁶.

El Título I también enfatiza la importancia del principio de la subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles, así como el mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración mutua sobre los aspectos de la seguridad en su sentido integral a fin de garantizar el carácter irreversible de la democracia en la región.³⁷

Como compromisos para hacer realidad las premisas anteriormente descritas, los Estados centroamericanos signatarios se comprometieron a establecer un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, velando que cumplan con sus responsabilidades bajo el marco constitucionalmente establecido.

Como mencionábamos en el Capítulo I, la idea de seguridad se basaba en la definición de los territorios y los estados establecidos. Partiendo de esta perspectiva, opinamos que es fundamental apreciar el cambio que se da de este concepto al nuevo contemplado en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en donde se incluye la seguridad de las

³⁶ Tratado Marco de Seguridad Jurídica, Título I, Artículo 02, Incisos a) y b).

³⁷ Tratado Marco de Seguridad Jurídica, Título I, Artículo 02, Incisos c) y d).

personas, mediante la creación de condiciones que permitan a los habitantes su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. Este cambio, como ya lo hemos abordado anteriormente, es producto de los cambios en la región a raíz del fin de la crisis de los años ochenta, donde la garantía de la seguridad era considerada sólo en términos de fronteras y acciones militares.

El nuevo modelo de seguridad está sustentado en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección al consumidor, al medio ambiente y al patrimonio cultural (que es un tema muy importante que fue introducido por Guatemala durante las negociaciones del Tratado Marco debido a la depredación de objetos arqueológicos de gran valor, sobre todo provenientes de la antigua cultura maya que se estaba dando en dicho país), la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas, el establecimiento de un balance razonable de fuerzas, que tomen en cuenta la situación interna de cada Estado, y la seguridad y defensa colectiva regional.

Uno de los puntos que aborda el Título I es el tema de la corrupción, declarando en su Artículo 05 que *la corrupción, pública o privada, constituye una amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes y de los Estados de la región centroamericana*³⁸.

³⁸ Tratado Marco de Seguridad Jurídica, Título I, Artículo 05.

Hecho reconocido es que la corrupción afecta gravemente las instituciones políticas, democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que la responsabilidad de la prevención y el control de este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales. En el capítulo IV de esta tesis monográfica se ampliará este tema.

Finalmente, el Título I concluye con el compromiso de abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o de cualquier otra índole, a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas, que atenten contra la unidad y el orden del Estado o propugnen el derrocamiento o la desestabilización del Gobierno democráticamente electos en las restantes naciones centroamericanas. Asimismo, reiteran su obligación de impedir el uso de su territorio para organizar o realizar acciones armadas, actos de sabotaje, secuestros o actividades delictivas en el territorio de otro Estado.

2.2. Seguridad de las Personas y sus Bienes

El respeto a la dignidad esencial de la calidad de vida de los seres humanos y el desarrollo pleno de sus potencialidades son prioridades establecidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, y especialmente en el segundo título del mismo.

Igualmente es considera la ayuda solidaria y humanitaria frente a emergencias, amenazas y desastres naturales. En este punto particular hemos visto una tímida cooperación, tomando

como ejemplos puntuales el paso del Huracán Mitch en 1998 con devastadores efectos en la región, particularmente en Honduras y Nicaragua, y luego con el terremoto que azotó a la hermana República de El Salvador en el 2001. En ambas ocasiones se dieron señales inmediatas de solidaridad y la extensión de las manos centroamericanas, que prestaron ayuda en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, aún no se ha conformado un modelo formal que sirva de canal para atender este tipo de situaciones.

El Título II también hace una fuerte mención al tema de la pobreza y de la pobreza extrema como amenazas a la seguridad de los habitantes, lesión a la dignidad humana y pone en riesgo la estabilidad democrática de nuestras sociedades. En este sentido hace un énfasis en la necesidad imperativa de procurar garantizar a todos los habitantes las condiciones de seguridad que les permitan participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible. El compromiso de los Estados signatarios en relación a este tema es el de readecuar los presupuestos nacionales, orientándolos al beneficio del sector social en las áreas de salud y educación.³⁹

El presente título propone el establecimiento y funcionamiento del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores, como medida para reforzar el nivel de profesionalización de los efectivos policiales, así como la interacción entre los oficiales de los distintos países miembros del presente tratado.

³⁹ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Título II, Artículos 10, 11 y 15.

A nuestro juicio, es interesante destacar que el Artículo 24 del Tratado Marco de Seguridad Democrática obliga y compromete a los gobiernos de la región centroamericana a que las fuerzas de seguridad de sus respectivos países se basen para la represión de la criminalidad en normas internacionales, como la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a toda forma de Detención o Prisión; las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Torturas y otras Penas Cruelles Inhumanas o Degradantes y el Código de Conducta; y se comprometen a elaborar códigos de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Hay obligaciones en materia de Seguridad Pública, de superación de la pobreza y de extrema pobreza, de erradicación de la corrupción, de la narcoactividad y del comercio ilícito de precursores y delitos conexos, del terrorismo y del crimen organizado. Aquí también hay un compromiso de los gobiernos a suscribir el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del año 1963; el convenio para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos sobre las personas y situación conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional de 1971, y el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil del mismo año; para la represión y castigo de delitos para las personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, de 1973; la convención internacional sobre la toma de rehenes, de 1979. Es decir, todos los instrumentos internacionales que existen sobre el tema de terrorismo.

Luego hay obligaciones para la erradicación del tráfico ilegal de armas, material y equipos militares; obligaciones en materia de erradicación de la impunidad; obligaciones en materia de protección a los consumidores, al medio ambiente, patrimonio cultural y delitos relacionados; limitación y control de armamentos; prohibición de apoyo a fuerzas irregulares; obligaciones en materia de asesores, bases, escuelas, e instalaciones militares y de seguridad pública extranjeras, con relación a la presencia de bases extranjeras norteamericanas en territorio hondureño, hasta el año 2000 por supuesto se incluyó el Canal de Panamá⁴⁰.

Luego se hacen tímidas referencias a tres temas de gran importancia para nuestras naciones:

- El tema del tráfico de personas, que ha tenido un auge en nuestros países en los últimos dos años, especialmente en materia de tráfico de menores. Recientemente⁴¹ se descubrió una banda organizada de tráfico de blancas, cuya especialidad era el tráfico de menores para centros nocturnos de prostitución. El rango geográfico de acción de dicha banda era de Nicaragua a Guatemala, en donde las menores eran llevadas de la primera nación a la segunda.
- El compromiso de desarrollar todos los esfuerzos necesarios y promover la cooperación para garantizar la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural centroamericano. Este inciso fue duramente negociado por

⁴⁰ Por la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quienes tuvieron sus bases militares en Panamá, hasta la entrega formal de las mismas en el año 2000, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado Torrijos-Carter.

⁴¹ A inicios del 2001.

Guatemala, ya que su patrimonio cultural ha ido disminuyendo en manos de “coleccionistas” privados. Por otro lado, es importantísimo que los gobiernos establezcan oficinas oficiales efectivas que protejan los derechos del consumidor. Tal es el caso de Nicaragua, que tras la privatización a manos de una multinacional del servicio de luz eléctrica, ha dejado desprotegido a los consumidores nacionales.

- También mencionan discretamente la voluntad de reinsertar apropiadamente a su población refugiada, desplazada y desarraigada que retorne voluntaria y pacíficamente a sus respectivos territorios, para que pueda disfrutar todos sus derechos y mejorar su calidad de vida en igualdad de oportunidades.

2.3. Seguridad Regional

El tercer título se enfatiza en los temas de seguridad regional, combate contra los crímenes y delitos internacionales, mecanismos de defensa colectiva y regulaciones hacia los distintos cuerpos policiales centroamericanos.

La premisa jurídica fundamental para establecer los puntos anteriores es el reconocimiento de la igualdad soberana entre los Estados y la seguridad jurídica en sus relaciones, así como el compromiso de optar por la solución pacífica de las controversias, renunciando a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver sus diferencias.

Aún cuando la autodeterminación de Centroamérica rige el actuar de cada Estado miembro, la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad

territorial y la independencia política de cualquier Estado de la región signatario del presente Tratado es una condición de buena fe aceptada por todos los países centroamericanos.

Reforzando el tema de las medidas de confianza y seguridad, también se encuentran especificaciones sobre limitación y control de armamentos, en el cual los Estados parte se comprometen a alcanzar mediante la negociación un balance razonable de fuerzas, por medio del establecimiento de un sistema de limitación y control de armamentos y un programa eventual de adecuación de presupuestos militares, tomando en cuenta la situación interna de cada Estado⁴².

Con la excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de países miembros han coincidido en que la Seguridad Democrática de cada uno de los Estados signatarios del Tratado Marco de Seguridad Democrática está estrechamente vinculada a la seguridad regional. Por tanto, ningún Estado fortalecerá su propia seguridad menoscabando la seguridad de los demás.

Igualmente, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua concuerdan en un actuar de defensa colectiva y solidaria en caso de agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de un estado centroamericano, de conformidad con las normas constitucionales respectivas y los tratados internacionales vigentes.⁴³

⁴² Tratado Marco de Seguridad Democrática, Artículo 45.

⁴³ Nuevamente se excluyen de estas cláusulas Costa Rica y Panamá.

También se propone establecer un mecanismo preventivo, de alerta temprana, ante las amenazas a la seguridad en cualquiera de sus categorías y un programa permanente de medidas de fomento de la confianza entre los Estados de la región centroamericana. También impulsan el establecimiento de un balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de acuerdo con la situación interna y externa de cada Estado Parte. Por último, para complementar este tema se propone la creación de un Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación de la Seguridad.

El Tercer Título luego describe con detalle el protocolo que deben de seguir los Estados signatarios en casos de maniobras o ejercicios militares, y de común acuerdo acceden a extender invitación a sus expertos homólogos para presenciar dichos ejercicios. Nuevamente, Costa Rica y Panamá admitieron reservas en este sentido.

En caso de operaciones militares imprevistas, frente a amenazas inmediatas a la seguridad, el Estado que las lleve a cabo deberá informar de tales actividades tan pronto como le sea posible.

Otro compromiso es el de proporcionar información en el seno de la Comisión de Seguridad, sobre sus respectivos gastos militares y de seguridad pública, aprobados por sus presupuestos para el año que está en ejercicio, tomando como marco de referencia para ello el instrumento para la presentación internacional normalizada de informes sobre gastos militares, adoptado por la Organización de Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1980.⁴⁴

⁴⁴ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Artículo 10.

El informe con carácter de secreto de Estado y regional será elaborado de conformidad con el formato y contenido de inventario que acuerde la Comisión de Seguridad y incluirá todos los datos navales, aéreos, terrestres y de seguridad pública necesarios para que la información proporcionada sea completa, transparente y verificable única y exclusivamente por las instancias del Modelo de Seguridad Democrática, establecido en el Artículo 05 del Tratado Marco de Seguridad Democrática.

Se establece un mecanismo centroamericano de información y comunicación para la seguridad y solución pacífica de controversias. Se ha dejado el sistema contemplado en el derecho internacional, referido a la obligación de los Estados miembros del Tratado Marco de Seguridad Democrática a recurrir a los mecanismos de negociación y de diálogo para resolver todos los conflictos que pudieran surgir entre ellos y a la mediación, que incluso puede ser propuesta por el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y también ante la Corte Centroamericana de Justicia.

La verificación y control está a cargo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, en cooperación solidaria ante desastres y amenazas, seguridad y defensa colectiva, en donde el Artículo 68 del tratado en mención dice con claridad que *cualquier agresión de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, soberanía o independencia de un Estado centroamericano será considerado como un acto de agresión contra los demás Estados centroamericanos.*

Lo que no está establecido, son los mecanismos para tomar una decisión sobre el actuar de las fuerzas armadas de los países donde están establecidas, o de las fuerzas de seguridad, para que la región se defienda de manera colectiva. A nuestro juicio, esta es una falta que le resta formalidad al tratado, pues aunque contempla las iniciativas, no establece los mecanismos reales que deben de ser ejecutados. Esto crea confusión en cuanto a la voluntad de cristalizar estas disposiciones en el caso de que tengan que ser ejecutadas.

Los Estados parte se obligan a su vez a no construir o permitir edificar en sus respectivos territorios, instalaciones para almacenar este tipo de armas; es decir, con contenidos de destrucción masiva o las que tienen que ver con armas químicas.

Además, reafirma las obligaciones asumidas en el Tratado de Tlatelolco para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina del 14 de febrero de 1967, y también se asume tener un efectivo control sobre los armamentos, para lo cual se comprometen a presentar con la periodicidad que establezca el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, un informe sobre la composición de sus instituciones armadas y de seguridad pública, su organización, instalaciones, armamentos, materiales y equipos, dejando a salvo aquellos aspectos que por su naturaleza se encuentren reservados en la constitución de cada Estado.

Igualmente importante es el hecho de que las Partes se comprometen a abstenerse de adquirir, mantener o permitir el estacionamiento o tránsito en sus territorios de armas de destrucción masiva e indiscriminada de cualquier índole.

Asimismo se comprometen a realizar el sistema de registro centroamericano de armamentos y sus transferencias, de acuerdo a las propuestas que elabore la Comisión de Seguridad.

También se obligan a combatir el tráfico ilegal de armas, material y equipos militares, así como armas ligeras de protección personal. Es importante señalar que los Estados partes están de acuerdo en que cuando una situación de tráfico ilegal de armas no pueda ser resuelta en el marco de los procedimientos jurídicos nacionales, el o los Estados involucrados procurarán resolver el problema por medio de la comunicación y de cooperación.

Las otras disposiciones del Tratado Marco de Seguridad Democrática tienen que ver con asuntos que tradicionalmente han estado reservados al campo de la seguridad pública, pero que no se han incluido dentro de tratados de seguridad en los que se establezcan obligaciones y derechos en materia de la seguridad militar y defensa. Se trata en estos casos de la seguridad entendida en un sentido amplio, que abarca todo lo que se refiere a amenazas provenientes de situaciones de pobreza, de situaciones que tienen que ver con los factores económicos y sociales, o bien amenazas provenientes del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción u otros.

El Artículo 39 del tercer título establece que *si se produjese un incidente de índole militar entre dos o más de Las Partes, los Ministros de Relaciones Exteriores deberán ponerse en contacto de inmediato para analizar la situación, evitar el aumento de la tensión, cesar*

*cualquier actividad militar y prevenir nuevos incidentes*⁴⁵. En caso de que no fuesen suficientes, las Partes podrá solicitar la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguridad o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En este último caso, la presidencia del Consejo de Ministros hará las consultas necesarias con los estados miembros y podrá convocar previamente a la Comisión de Seguridad para obtener sus recomendaciones.

Como ejemplo práctico de actualidad es el caso del conflicto entre Nicaragua y Honduras, en que se han puesto a prueba las disposiciones establecidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Este será abordado con detalle en el Capítulo IV de la presente tesis monográfica.

En cuanto a estas medidas, es interesante la especificación de, por ejemplo, el inciso g) del Artículo 18 del tratado en mención ser refiere a la obligación que asume cada Estado suscriptor del mismo de notificar por escrito a los demás Estados parte, por la vía diplomática, con 30 días de anticipación, cualquier maniobra, desplazamiento o ejercicio militar terrestre, aéreo o naval planificado, que se realice a menos de 30 kilómetros de la frontera con otro Estado parte, bajo determinadas condiciones que se enumeran, entre las cuales están: cada vez que participen más de 10.000 efectivos; que participen fuerzas pertenecientes a otros países distintos a aquel en el que se efectúan; que se efectúen más de 20 salidas de aeronaves, incluidos helicópteros artillados; en las que se prevé el

⁴⁵ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Título III, Artículo 39.

lanzamiento de más de 300 paracaidistas; en las que participen más de 100 efectivos de las fuerzas navales; en las que participen 10 o más carros de combate; por mencionar algunos.

El Artículo 46 del Tratado Marco de Seguridad Democrática establece que *las Partes reafirman las obligaciones asumidas en el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina, del 14 de febrero de 1967, así como la importancia de iniciar en caso de que no lo hubiesen hecho, los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los siguientes convenios internacionales:*

a) Protocolo Para la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes Tóxicos y Similares, de 1925;

b) Convenio sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas, Tóxicas y Sobre su Destrucción, de 1972

2.4. Organización e Institucionalidad

El Título IV se dedica a la descripción de las instancias del Modelo de Seguridad Democrática en Centroamérica. La descripción detallada de los órganos competentes encargados de la ejecución e implementación del Tratado Marco de Seguridad Democrática se dará en el Capítulo III del presente trabajo monográfico.

2.5. Disposiciones Finales, Disposición Final y Disposiciones Transitorias

- En las disposiciones finales del Tratado Marco de Seguridad Democrática se describen la naturaleza jurídica del tratado mismo. De ellos, podemos destacar los siguientes puntos:
- Es un tratado con carácter de ley, y no de contrato. Esto significa, que genera obligaciones comunes a los Estados signatarios.
- El Tratado Marco de Seguridad Democrática es un tratado de tipo cerrado, ya que es un tratado para y conformado por partes descritas en el mismo: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. La inclusión de otras partes al tratado no está contemplado, por tratarse de un tratado de carácter regional.
- Es un tratado de carácter multilateral multilateral, ya que lo suscriben más de dos países.
- Precisamente por tratarse de un tratado multilateral admite reservas. Aunque desde un punto formal la reserva es un incidente en el procedimiento de la celebración de un tratado, en su significado más profundo, se trata de una situación vinculada al problema de la participación –en el sentido más amplio- del tratado⁴⁶. Costa Rica y Panamá hicieron uso de esta prerrogativa para admitir reservas expresas de los

⁴⁶ Pastor Ridruejo, José Antonio. *Curso de Derecho Internacional*. Editorial Tecnos. 1986. Pág. 146.

siguientes artículos: 26 literales g) y h); 27 literales a), b), c);, 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38, 42 y 43.

- El presente Tratado tiene una duración indefinida y entró en vigencia una semana después de ser depositado el tercer instrumento de ratificación (1998), para los tres primeros, estados depositantes, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación para los demás estados.
- El presente Tratado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.
- Ninguna disposición del presente Tratado podrá ser interpretada de manera contraria a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el Protocolo de Tegucigalpa.

Nos es imperativo recordar que el Tratado Marco de Seguridad Democrática sustituye todas las normas que en materia de seguridad o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de los Estados Centro Americanos (ODECA) y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieren adoptado a nivel regional.

Finalmente, en el Artículo 71 del presente tratado se establece que *a los cinco años de haber entrado en vigor el presente Tratado, y antes o después, a solicitud de dos Estados*

Parte, la Comisión de Seguridad convocará una reunión de todas Las Partes con el propósito de evaluar y acordar las modificaciones que estimen necesarias.

Los primeros cinco años desde la suscripción del tratado ya han transcurrido, y ya las primeras recomendaciones elaboradas por un grupo de expertos regionales están en camino a ser presentadas para su discusión e inclusión en el tratado.⁴⁷ En este caso serían “enmiendas”, ya que se refiere a cambio de alguna o algunas disposiciones del tratado. Toda propuesta de enmienda debe ser consultada y notificada a todos los Estados contratantes⁴⁸.

⁴⁷ Fuente: Diego Ferreyra, Director General de Investigaciones de CRIES y Co-coordinador General del Proyecto de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana en Centroamérica.

⁴⁸ Pastor Ridruejo, José Antonio. *Curso de Derecho Internacional*. Editorial Tecnos. Pág. 131.

Capítulo III : Órganos Gestores de la Seguridad Democrática

1. Órganos del Sistema de Integración Centroamericana

Gestores de la Seguridad Democrática en Centroamérica

El Tratado Marco de Seguridad Democrática estipula que no se crearán nuevos órganos, ni organismos especiales para velar por la implementación y funcionamiento del Modelo de Seguridad Democrática Centroamericano, sino que se dejarían las nuevas responsabilidades en manos de los órganos ya existentes del Sistema de Integración Centroamericana.

Como se había mencionado anteriormente, los órganos del Modelo de Seguridad Democrática son los siguientes a nivel regional :

- Reunión de Presidentes
- Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
- Comisión de Seguridad

Además de estos órganos, existen los Consejos Sectoriales e Intersectoriales encargados de establecer las coordinaciones pertinentes con el consejo de Ministros de Relaciones

Exteriores al que informarán debidamente de todos sus acuerdos y resoluciones en materia de Seguridad.

Por tanto, los órganos del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que tienen responsabilidad en materia de Seguridad Democrática en la región centroamericana y sus competencias serán abordados en los próximos párrafos.

1.1. Reunión de Presidentes

1.1.1. Naturaleza

El cuerpo jurídico que sustenta la institucionalidad del SICA, deriva de los acuerdos de Esquipulas firmados en 1987, y adquiere sus manifestaciones más avanzada con la firma de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en 1994, y finalmente complementado con el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica suscrito en San Pedro Sula (Honduras) el 15 de diciembre de 1995.

La Reunión de Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana se encuentra prevista en el Protocolo de Tegucigalpa como el órgano supremo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y está integrada por los Presidentes constitucionales de los Estados Miembros⁴⁹.

⁴⁹ Protocolo de Tegucigalpa, 1991, Artículos 13 y 14.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 06 del Tratado Marco de Seguridad Democrática, la Reunión de Presidentes es la instancia suprema del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, y a ellos les corresponde conocer los asuntos de la región que requieren de sus decisiones en esta materia a nivel nacional y regional, de acuerdo con lo establecido por el Protocolo de Tegucigalpa.

1.1.2. Funcionamiento

En la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores prepara los temas a tratar y la Secretaría General del SICA, actúa como secretaria permanente de la Reunión de Presidentes, asegurando tanto los servicios de secretaría como los servicios técnicos y administrativos necesarios.

Conforme al Artículo 14 del Protocolo de Tegucigalpa, este órgano debería reunirse ordinariamente cada semestre y de forma extraordinaria cuando así lo decidan los Presidentes.

La Reunión de Presidentes es el órgano supremo del Sistema de Integración Centroamericana y centraliza las decisiones políticas del SICA, sin contrapeso alguno por parte del resto de órganos, quienes se integran para dar seguimiento a las decisiones de la Reunión de Presidentes y coordinar su ejecución. El protagonismo de la Reunión de Presidentes ha sido decisivo para la vida institucional del sistema y sus subsistemas. No obstante, se le critica por la abundancia de acuerdos que produce y la poca atención al desarrollo de la institucionalidad centroamericana.

1.1.3. Competencias

A la Reunión de Presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) corresponde el conocimiento de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad y de manera particular definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las directrices de la integración y la aprobación de las reformas al Tratado constitutivo del SICA y demás tratados del sistema de integración regional.

Asimismo, son competencias de la Reunión de Presidentes armonizar las políticas exteriores de sus Estados, fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una Centroamérica unida, asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo y en los demás instrumentos normativos del SICA y decidir sobre la admisión de nuevos miembros al sistema de la Integración Centroamericana.

Como podemos observar la Reunión de Presidentes está sobrecargada de una serie de atribuciones de gran envergadura que son prácticamente imposibles de cumplir, pues carece de los mecanismos jurídicos necesarios para asegurar su cumplimiento por los Estados signatarios, a pesar de que son sus propios mandatarios los integrantes de tal instancia. También, la Reunión de Presidentes, debe buscar mecanismos para fortalecer sus funciones políticas en el seno del Sistema de Integración Centroamericano, trasladando el centro de la adopción de actos normativos al Consejo de Ministros.

Además hay que considerar desde esta perspectiva, que las prioridades de la agenda regional resultan distintas y alejadas de los problemas y prioridades nacionales, lo que hace

que no se le de en el nivel nacional la importancia que se merece. Por lo cual debe darse una revisión y posterior redefinición de sus competencias para fortalecer el rol político que debe ejecutar en la región.

Los acuerdos de la XIX Reunión de Presidentes realizada en Panamá el doce de julio de mil novecientos noventa y siete, pretenden que la Reunión de Presidentes, centre su actividad en las principales decisiones políticas y estratégicas, limitando las reuniones ordinarias de este órgano a una por año y las extraordinarias se efectuarían cuando se estimase conveniente⁵⁰.

En la actualidad, ya se están dando cuestionamientos abiertos a la actuación del la Reunión de Presidentes como las declaraciones que hiciesen los ex Presidentes José Azcona Hoyo de Honduras y Armando Calderón Sol de El Salvador ⁵¹, los cuales cuestionan abierta y públicamente el actuar de la Reunión de Presidentes, catalogando de insólito que viviendo la región centroamericana bajo una misma bandera democrática, no sea éste un factor de unión. El ex Presidente Azcona remarcaba el hecho de que en los momentos –histórica y políticamente- más difíciles para Centroamérica como región, que fueron la década de los ochenta, los Presidentes mantenían una comunicación mucho más abierta y fluida que la actual, a pesar de que ideológicamente eran opositores!! Sin embargo el ánimo y la voluntad centroamericanista, y el profundo deseo de el bienestar para la región impulsaban la apertura de los canales de comunicación. Mencionaba con sorpresa el hecho de que los

⁵⁰ Protocolo de Tegucigalpa, 1994, Artículo 15.

⁵¹ Parte de las declaraciones brindadas por los ex Presidentes de Honduras José Azcona Hoyo y Armando Calderón Sol de El Salvador en el Programa Buenos Días. Canal 12, Jueves 28 de junio de 2001.

Presidentes Francisco Flores de Honduras y Arnoldo Alemán de Nicaragua, siendo ambos líderes de partidos liberales, evitan diálogos directos.

Asimismo, el ex Presidente Azcona Hoyo criticaba el hecho de que el proceso integracionista está a merced de la voluntad política del mandatario, casi a título personal, cuando debería de ser una voluntad superior a las aspiraciones y creencias personales, por tratarse de una moción que beneficia a todos los electores que los eligieron como dignos representantes del pueblo.

Por tanto creemos que la Reunión de Presidentes es un órgano, cuyos integrantes no han tomado conciencia de las responsabilidades que detentan como conjunto a cargo del diseño de las políticas de la región, el cual como decíamos anteriormente se ha dedicado a emitir un sinnúmero de recargados Acuerdos e Informes en donde la retórica es la característica más prominente, dejando en un segundo plano el diseño de políticas concretas y de corto plazo para el desarrollo de la región en el seno de la integración, esto se traslada igualmente a las políticas de seguridad. Atribuimos estos problemas a la falta de una verdadera voluntad política a la hora de establecer las directrices del proceso de integración, en donde cada Estado sigue guiándose por sus intereses individuales, bajo el pleno convencimiento que el ejercicio de la soberanía compartida implica la pérdida de poder nacional.

1.2 Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores

1.2.1. Naturaleza

Es el órgano principal de coordinación del Sistema de Integración Centroamericano y por tanto, la instancia competente en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, encargado de coordinar los esfuerzos de los Estados Centroamericanos en la lucha contra las amenazas a la seguridad democrática centroamericana, e incluso, mundial, como está establecido en el Artículo 63 del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Conoce de las propuestas de los distintos foros de Ministros, las que, con sus observaciones y recomendaciones son elevadas al conocimiento de la Reunión de Presidentes.

El Consejo de Ministros del SICA al igual que la Reunión de Presidentes es un órgano no permanente.

1.2.2. Composición

El Consejo de Ministros se integra con la participación de todos los Ministros respectivos y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado, correspondiendo la Presidencia de éste al Ministro del ramo del Estado miembro que sea el Vocero de Centroamérica, conforme al Artículo 14 del Protocolo de Tegucigalpa, es decir, al país sede de la última Reunión de Presidentes. La duración del período del Presidente es de un semestre.

1.2.3. Funcionamiento

La reunión del Consejo de Ministros, conforme al Protocolo, debe efectuarse con la frecuencia que fuera necesaria o a convocatoria de uno de sus miembros o de la Reunión de Presidentes. Por la naturaleza de los temas a tratar, los Ministros pueden celebrar reuniones intersectoriales. El quórum del Consejo de Ministros se integra con la participación de todos los Ministros respectivos y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado.

En el Consejo de Ministros cada Estado miembro tiene un voto y las decisiones sobre asuntos de fondo deben ser adoptadas por consenso. Si existiera duda si una decisión es de fondo o de procedimiento, se resuelve por mayoría de votos⁵².

1.2.4. Competencias

Las competencias otorgadas al Consejo son de carácter legislativo, presupuestario, de ejecución, de coordinación y en materia de relaciones exteriores.

En materia normativa, a pesar de que el Artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa establece que las decisiones del Consejo de Ministros del SICA son de carácter obligatorio en todos los estados miembros, esto no resulta plenamente cierto por los obstáculos constitucionales que se presentan en los países. El mismo artículo limita la eficacia de estos actos

⁵² Protocolo de Tegucigalpa, 1991, Artículo 21.

normativos al establecer de que sólo podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal.⁵³

Para reafirmar lo reducido del concepto de eficacia directa de los actos del Consejo, curiosamente se dispone en tal artículo, que las decisiones del Consejo que contravengan normas de los ordenamientos internos de los Estados miembros deben readecuarse al respectivo ordenamiento interno, no teniendo por tanto sus decisiones efecto directo pleno ni primacía sobre los ordenamientos de los Estados Miembros.

En los casos que no existan normas nacionales que puedan oponerse ala ejecución de las decisiones del consejo de Ministros, dicho artículo deja a la voluntad de los Estados su ejecución.

Significa entonces que una decisión del consejo de Ministros, sólo tendrá eficacia directa, en el supuesto que no contradiga normas internas y que exista la voluntad de los Estados para aplicarla.

La competencia presupuestaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores comprende la aprobación del presupuesto de la organización central del SICA.

En materia de Relaciones Exteriores comprende la aprobación del presupuesto de la organización central del SICA.

⁵³ Valle González, Alfonso. Derecho Comunitario: El Sistema de Integración Centroamericana, 2ª Editorial Nicaragua. 2001. Página 114

En materia de Relaciones Exteriores le corresponde representar a la región ante la comunidad internacional e implementar las decisiones de los presidentes en materia de política internacional e implementar las decisiones de los Presidentes en materia de política internacional regional, efectuando además, recomendaciones sobre el ingreso de nuevos miembros al SICA, así como decidir sobre la admisión de observadores a la Organización⁵⁴.

Asimismo, en materia de ejecución, corresponde al consejo de Ministros de Relaciones Exteriores implementar las decisiones de la Reunión de Presidentes y preparar los temas que pueden ser objeto de la mencionada reunión incorporando las propuestas de los distintos foros de Ministros⁵⁵.

En materia de coordinación, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores se erige como el órgano principal, de coordinación y de seguimiento, a las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales⁵⁶.

Dada la naturaleza del sistema, las competencias fundamentales del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, son las de ejecución y las de coordinación las cuales exigen mayores esfuerzos de los Cancilleres del área a fin de dar continuidad a las decisiones de las Reuniones de Presidentes.

⁵⁴ Protocolo de Tegucigalpa, 1991, Artículo 17 y 24

⁵⁵ *Ibíd.* Artículo 16.

⁵⁶ *Ibíd.*, Artículo 17.

El Artículo 18 del Protocolo de Tegucigalpa asigna al Consejo de Ministros de Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, la ejecución de las decisiones de las Reuniones de Presidentes en materia de integración económica e impulsar la política económica e impulsar la política económica integracionista en la región. En tanto, los Consejos de Ministros responsables de otros sectores tienen la responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia.

A la Reunión Intersectorial de los Ministros de Relaciones Exteriores y de los Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, le corresponde la competencia de analizar, discutir y proponer a los Presidentes, la estrategia de participación de la región en el sistema económico internacional y ejecutarla concertadamente⁵⁷.

La existencia de estas instancias intersectoriales, puede llegar a causar problemas de coherencia dado que posibilita la pérdida de la visión global de la marcha de la integración.

Conforme la Declaración de Panamá II, se pretende preservar el consejo de Ministros como el órgano principal de coordinación del SICA. Además, se le responsabiliza de la gestión de la cooperación internacional.

Puntualizando las funciones:

⁵⁷ Ibid. Artículo 20.

- a. Sugerencias pertinentes a la Reunión de Presidentes sobre el manejo de crisis, solución de conflictos o situaciones que constituyan una potencial amenaza a la seguridad de los Estados y de sus habitantes.
- b. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática.

Para esto, el Consejo de Ministros conocerá a través de informes de la Comisión de Seguridad, los siguientes aspectos:

- Cumplimiento por parte de los Estados centroamericanos de los actos materiales previstos en el tratado Marco como la entrega oportuna de los informes requeridos por un órgano superior.
 - Cumplimiento de obligaciones requeridas como la no introducción de armas prohibidas por dicho Tratado.
 - Resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión de Seguridad en relación a denuncias de violación a las disposiciones contenidas en el Tratado.
- c. Preparar posiciones y suscribir acuerdos o convenios de cooperación con los órganos encargados de mantener la paz y a seguridad internacional.
 - d. Conocer y resolver asuntos donde exista falta de consenso en la adopción de una decisión o en la conclusión de acuerdos⁵⁸.

⁵⁸ Ibid., Artículo 56.

Los Ministros de Relaciones Exteriores se pondrán en contacto cuando se susciten incidentes de índole militar entre dos ó más Estados que afecten la seguridad regional a fin de analizar y resolver la situación, evitar el aumento de tensiones, cesar cualquier actividad militar y prevenir nuevos incidentes. En caso de agresión armada, previo agotamiento de las instancias de conciliación y solución pacífica de los conflictos, los países centroamericanos de cara al pronto restablecimiento de la paz, asegurarán la defensa colectiva y solidaria mediante medidas y procedimientos acordados por el Consejo de Ministros, el cual establecerá una organización operativa encargada de planificar y coordinar las medidas necesarias para la obtención de la paz y la seguridad, así como para el apoyo operativo en materia de cooperación solidaria frente a emergencias, amenazas y desastres⁵⁹.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores informará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) así como también, a la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de las decisiones adoptadas en materia de paz y seguridad regional, y cuyo conocimiento consideren de relevancia para los órganos encargados de la seguridad a nivel nacional e internacional⁶⁰.

El Consejo de Ministros tiene competencias legislativas, presupuestarias, ejecutivas y de coordinación, es en este punto en donde consideramos que dicho órgano debe fortalecer y redefinir sus funciones a fin de tomar un papel beligerante como coordinador del Sistema a

⁵⁹ Ibid., Artículo 43.

⁶⁰ Ibid., Artículo 65.

fin de coadyuvar a la elaboración, implementación y ejecución de los lineamientos y objetivos resultantes de las Reuniones de Presidentes.

En cuanto a la Seguridad, trabajar por agilizar la implementación de los mecanismos en la materia garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Tratado Marco, esto se recoge en le Título IV Artículo 49 de dicho instrumento.

1.3. Comisión de Seguridad

1.3.1. Naturaleza

La Comisión de Seguridad existe de hecho, desde 1990, sin embargo se constituyó jurídicamente a partir de la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática en 1995. Es una instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, elaboración de propuestas, así como de recomendación de alerta temprana subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores⁶¹.

Está compuesta por las delegaciones de los Estados centroamericanos, integrada por los Vice-Ministros de Relaciones Exteriores y Vice-Ministros o autoridades competentes en los ramos de defensa y seguridad pública⁶², los cuales se reunirán ordinariamente con la

⁶¹ Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 50.

⁶² *Ibíd.*, Artículo 51.

periodicidad que establezcan sus miembros y extraordinariamente cuando lo decida la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros⁶³.

Además de las Cumbre de Presidentes y Reuniones Ministeriales, Nicaragua, como presidencia Pro Témpore, estuvo al frente de la Comisión de Seguridad.

La Presidencia Pro Témpore se trazó como objetivo reactivar, dinamizar y dotar de un contenido concreto los temas pendientes de seguridad regional a un corto, mediano y largo plazo, así como los Foros e Instituciones de la seguridad centroamericana, que por diversas razones se encontraban sin funcionamiento.

Por ejemplo, los representantes en la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP) realizó sus trabajos por mandatos de la Comisión de Seguridad.

Durante esta Presidencia Pro Témpore se celebró la XX Comisión de Seguridad de Centroamérica, el 23 de Abril de 1999 en Guatemala, se evaluaron los trabajos y propuestas elaboradas por los diferentes foros, instituciones y grupos de expertos dedicados a la temática de la seguridad regional. Se constataron los avances señalados, los que a su vez fueron adoptados por la Comisión, en particular, la adopción del Reglamento de la Comisión de Seguridad para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros de

⁶³ Ibid., Artículo 55.

Relaciones Exteriores, la aprobación de la Calendarización del Programa Anual de Medidas de Fomento de la Confianza, Seguridad Pública y Sociedad Civil de 1999, y las propuestas relacionadas a la lucha contra la narcoactividad, a la profesionalización policial y a la devolución de vehículos sustraídos a sus legítimos dueños.

La Comisión, analizó con detenimiento los problemas que enfrentan los diferentes mecanismos de coordinación, insistiendo en la necesidad de que cada uno continúe realizando los esfuerzos necesarios en la búsqueda de políticas y consensos que hagan posibles las aspiraciones de seguridad para la región.

Esta Presidencia Pro Témpore considera que se ha hecho un esfuerzo importante, y que se ha dado un primer paso ante los desafíos que nos plantea la Seguridad Democrática, definida en el Tratado Marco de Seguridad, que requiere de una actuación conjunta y decidida para alcanzar las metas trazadas, que de ser implementadas redundarán en beneficio de los pueblos centroamericanos.

1.3.2. Funciones

El Título IV del Tratado Marco de Seguridad Democrática establece cuales son las composiciones y funciones de la Comisión de Seguridad. Esencialmente son las siguientes:

- Ejecutar las decisiones que le encomienda la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros;

- Evaluar el cumplimiento de los acuerdos en materia de seguridad; examinar los problemas de seguridad;
- Fortalecer los mecanismos de coordinación operativa en la tarea de defensa, seguridad pública y cooperación solidaria frente a emergencias humanitarias, amenazas y desastres naturales;
- Coordinación de formato y contenido de inventario, así como recepción de un informe Comisión de Seguridad que incluirá todos los datos navales, aéreos, terrestres y de seguridad pública necesarios para que la información proporcionada sea completa, transparente y verificable única y exclusivamente por las instancias del Modelo de Seguridad Democrática, establecido en el Artículo 05 del Tratado Marco de Seguridad Democrática
- Recepción de información sobre los respectivos gastos militares y de seguridad pública de cada Estado miembro del Tratado Marco de Seguridad Democrática, aprobado por sus presupuestos .

Según entrevista sostenida con la Sub-Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Licenciada Miriam Vázquez, se nos dijo que es el MINREX la entidad gubernamental encargada de ejecutar el Tratado Marco de Seguridad Democrática en el sentido que es que es dicha entidad gubernamental quien coordina las acciones en la

misma materia realizadas por los otros dos órganos ejecutores de la Seguridad Democrática en Nicaragua como son el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa.

La Dirección Jurídica de Cancillería, tiene como principal objetivo el diseño de las políticas individuales o bien regionales de cara a la ejecución de las disposiciones de seguridad contenidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. No se nos pudo facilitar ningún documento al respecto, pues según se nos indicó son de uso estrictamente oficial, por tanto debimos avocarnos a los comunicados de prensa de dicha institución.

La Comisión de seguridad opera en base a una agenda de trabajo previamente estructurada y organizada, la cual se replanteó en meses pasados del año en curso. En dicha agenda se establecieron las funciones y gestiones de la Comisión de Seguridad en base a tres ejes centrales:

- Desastres Naturales (Coordinación con el Ministerio de Defensa, Ejército)
- Seguridad de las Personas y sus Bienes (Coordinación con Ministerio de Gobernación, Policía Nacional)
- Seguridad Regional

Se tienen también como prioridades la implementación y ejecución de planes operativos a fin de luchar contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, sobre el cual se suscribió un instrumento con Estados Unidos, tema que se abordará en el siguiente capítulo del presente trabajo.

Ahora bien, valoramos que si bien las políticas de Seguridad se diseñan teniendo expresamente a los individuos como destinatarios, no se menciona en ningún momento, o bien no encontramos evidencia alguna de la participación ciudadana en el diseño de las directrices en materia de seguridad.

Creemos que para la consecución de los objetivos de la Comisión de Seguridad, esta debe adquirir un nuevo y mayor dinamismo en el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores, sistematizando acciones concretas y puntualizadas que respondan a las necesidades de la sociedad y dirigidas a concluir temas prioritarios para la seguridad de Nicaragua, y por ende, de la región.

2. Órganos Encargados del Enlace y Ejecución de la Seguridad Democrática en Nicaragua: Instituciones y Competencias

Los Ministerios que se ocupan directamente de la Seguridad Ciudadana son:

- Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Ministerio de Defensa;
- Ministerio de Gobernación;

2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores

Básicamente, su objetivo es el de actuar como órgano de enlace de los diferentes Ministerios y Órganos Internacionales. Sus funciones son:

- Formular, proponer y ejecutar los lineamientos de política exterior del Estado en los diferentes temas que competen al mismo (temas económicos, migratorios, por ejemplo);
- Organizar y supervisar las misiones diplomáticas, oficinas consulares y misiones especiales ante Estados y Organizaciones Internacionales, siempre brindando y garantizando la debida protección de los nacionales en el extranjero;
- Enlace entre los entes estatales y misiones acreditadas en el exterior así como intermediario en las relaciones de los Estados mismos con el exterior;
- Suscripción de instrumentos jurídicos internacionales, con previa autorización del titular del Poder Ejecutivo. Estos deben de ser ratificados por el Poder Legislativo para adquirir validez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se subdivide en una serie de direcciones, que se ocupan de las distintas atribuciones encargadas a dicha entidad gubernamental.

De las distintas direcciones generales que conforman el Ministerio de Relaciones Exteriores, a **Dirección General de Soberanía Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales**, es la única Dirección encargada de manera directa de la Seguridad

Democrática en Nicaragua. Actúa directamente con la Comisión de Seguridad, señalada por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

Entre las competencias generales de dicha Dirección, pueden mencionarse:

- Formular y proponer políticas en defensa de la Soberanía Nacional, materia territorial, fronteriza e independencia nacional;
- Brindar asesoría jurídica y política al Proceso de Integración Centroamericano;
- Apoyar y asistir a los procesos de negociación, suscripción, ratificación y adhesión de Tratados Internacionales.

a. Dirección de Tratados

- Celebrar Tratados Internacionales de interés para el Estado;
- Dirigir el funcionamiento de las Comisiones Interinstitucionales en los procesos de negociación de los Tratados;
- Tramitar con el Presidente de la República la aprobación y entrada en vigor de los Tratados;
- Elaboración de los instrumentos pertinentes de adhesión o ratificación de los Tratados Internacionales;
- Mantener registro de la situación actual de los Tratados Internacionales suscritos por Nicaragua;

b. Dirección de Asuntos Territoriales

- Formular y Proponer políticas en defensa de la Soberanía Nacional;
- Ejecutar políticas en materia de Territorios y Fronteras;

c. Dirección de Derecho Internacional Privado y de Documentación

Le compete, entre otras funciones brindar asesoría en asuntos relacionados al Derecho Internacional Público y Privado.

Durante el año 2000, según el Informe de Gobierno del mismo año, las acciones que se realizaron en materia de Política Exterior estuvieron dirigidas a fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestro país, y a apoyar la gestión de recursos que la Comunidad Internacional brinda a través de la cooperación externa. Con relación a la política territorial, se ha continuado trabajando a fin de fortalecer la misma, pues una política bien definida y en constante revisión y seguimiento, permitirá defender la soberanía y proteger los intereses y derechos territoriales de nuestro país.

También en la Memoria Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores se afirma que parte de la actividad de la política exterior de Nicaragua se vio reforzada con la negociación y suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales. Para cada uno de ellos se crearon comités interinstitucionales integrados por las instituciones competentes de conformidad con la materia de los mismos. Esto se vincula al tema de la Seguridad Democrática, pues la suscripción de dichos instrumentos contribuirá al mejoramiento de los niveles de vida de

los nicaragüenses en el marco de la cooperación con naciones tanto a nivel regional como mundial.

Entre estos Acuerdos debemos destacar:

Acuerdo de Cooperación Técnica Científica en Materia de Protección Civil para la Prevención de Desastres con la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos de América.

Convenio para el Restablecimiento del Transbordador Internacional en el Golfo de Fonseca y el Océano Pacífico.

Convenio con la República de Honduras sobre el Proyecto de Reconstrucción del Puente sobre el río El Guasaule.

En materia electoral, como elemento esencial del funcionamiento de los sistemas democráticos, se suscribió con la Organización de Estados Americanos (OEA) un acuerdo que otorga inmunidades y privilegios a los observadores electorales de dicha organización que estarán presentes en Nicaragua durante las próximas elecciones.⁶⁴

También están en proceso de aprobación y ratificación y/o adhesión tratados internacionales suscritos en años anteriores como son:

⁶⁴ Memoria del Ministerio de relaciones Exteriores de 1999.

- Tratado sobre Prohibición Completa de Estados Nucleares (Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996).
- Convenio sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil en 1999, y la Acción Inmediata para su Eliminación adoptado por la 87 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 17 de junio del mismo año.
- Convención de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas que puedan considerarse Excesivamente Nocivas de Efectos Indiscriminados y sus protocolos I, II, III y IV, concluida en Ginebra, Suiza el 10 de octubre de 1980 y suscrita por Nicaragua el 20 de mayo de 1981.

En cuanto a la situación con Costa Rica, que constituye una grave amenaza a la Seguridad Democrática, la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores según consta en el mencionado Informe ⁶⁵, derechos soberanos de Nicaragua, a la Diplomacia y al Derecho Internacional. Se ha reiterado a Costa Rica que Nicaragua es un país amigo, dispuesto a colaborar con la necesidad que en algunas épocas tiene Costa Rica, de abastecer sus puestos fronterizos ubicados al sur de la margen derecha del Río San Juan por vía terrestre.

La posición de nuestro país fue claramente expuesta ante el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde se dejó claro que la navegación de la Guardia Civil costarricense en la parte inferior del Río San Juan, portando armas de

⁶⁵ Memoria Laboral MINREX 1999

reglamento es un asunto de derecho interno de Nicaragua. En el mes de junio del 2000 los Señores Presidentes de ambas naciones acordaron restablecer el *modus operandi* que las autoridades fronterizas de ambos países aplicaron de forma temporal durante 1995 y 1998, para lo cual las autoridades competentes están abocadas en la implementación de una mecánica que respete los derechos soberanos de Nicaragua.

En lo que respecta a Honduras; este país en flagrante violación al Derecho Internacional y al Derecho Comunitario de la Integración Centroamericana ratificó el Tratado Ramírez-López, con lo cual pretendía lesionar nuestros derechos soberanos en el Mar Caribe. Ante esta situación Nicaragua emprendió un intenso cabildeo ante países amigos, foros internacionales y Tribunales de Justicia Internacionales (Corte de Justicia Centroamericana y la Corte Internacional de Justicia).

Esta situación fue superada, según consta en la Memoria de la Cancillería de 1999, con una ofensiva diplomática, en el marco de la Organización de Estados Americanos, se nombró al Embajador Luigi Eunaudi como enviado especial del Secretario General. Se realizaron cuatro encuentros en Miami, Washington, El Salvador y Washington y se convino un régimen de exclusión militar que, hasta la fecha, está en funcionamiento.

A través de este régimen se hacen notificaciones de movimientos o ejercicios militares que se hagan cerca de la frontera y las fuerzas navales de ambos países, también se han realizado patrullajes combinados en el Mar Caribe.

Finalmente nuestro país acudió a la Corte Internacional de Justicia solicitando la delimitación jurídica de la frontera entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, para lo cual la Corte fijó los plazos para la presentación de la Memoria nicaragüense el 21 de marzo del año en curso y la Contra memoria hondureña el 21 de marzo de 2002.

Siempre en el ámbito de materia territorial, se ha estado trabajando en la demarcación y señalización de la frontera con Honduras en el Golfo de Fonseca que quedó definida en 1900 pero lo que se desea es demarcarla y señalizarla con boyas, lamentablemente estos trabajos se encuentran paralizados debido a decisión hondureña.

En lo relacionado a la política de Seguridad, enfocada, como dijimos anteriormente, hacia el ser humano como eje de la misma, las acciones exteriores de este Ministerio se han dirigido hacia el fortalecimiento de relaciones de cooperación con la comunidad internacional, de cara a hacer frente a las amenazas a la seguridad democrática propiamente dichas y establecidas en el Tratado Marco, como son el narcotráfico, el crimen organizado, el control de armas asimismo se han realizado acciones para el control de armas coadyuvando así con los esfuerzos interinstitucionales por la seguridad ciudadana.⁶⁶

En el contexto regional, las acciones han estado dirigidas en dos vías, en la definición de una política de seguridad ciudadana en el marco de la Trinacional, y a impulsar propositivamente el replanteamiento de los trabajos de la Comisión de Seguridad, a partir

⁶⁶ Ibid.

de las prioridades para la seguridad en la Región, tales como el enfrentamiento a los desastres naturales; la seguridad de las personas y sus bienes y la seguridad regional.

Estimamos que estas acciones descritas anteriormente están ampliamente inspiradas en el Tratado Marco, pero distan mucho de responder a las necesidades concretas de los ciudadanos, pues estimamos que son objetivos vagos que muchas veces tienden a quedarse en la retórica, creemos necesario que se puntualicen metas a corto plazo y acciones específicas.

Al constituir el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia transnacional una amenaza a la integridad de las personas, la integridad social, económica y política, haciendo válidos los deseos manifiestos de la Convención de Estupefacientes de 1988, en el ámbito bilateral se iniciaron negociaciones en 1997 alrededor de la cooperación para suprimir el tráfico ilícito por mar y aire con los Estados Unidos de América, esto se concretizó con la Firma del Tratado Anti-Drogas entre ambas naciones el 01 de junio del presente año. A través de este instrumento, se cooperará para la lucha contra la narcoactividad y el cumplimiento de las leyes de ambos países que sancionan ese delito, estas actividades estarán sujetas a las autoridades y jurisdicción de ambos países, por ende la operativización del instrumento no será lesiva para la soberanía nicaragüense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el objetivo de elevar este tipo de acciones aun plano internacional que vaya más allá de la Región Centroamericana.

También la Institución ha manifestado su anuencia a participar en la elaboración de una normativa internacional contra el Crimen Organizado, que se negocia en el marco de las Naciones Unidas, instrumento que posiblemente estará abierto a partir de diciembre del año en curso.

En materia de integración en el año 2000 se dieron eventos como por ejemplo:

- Lanzamiento del Quinquenio Centroamericano para la Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres para el período 2000 al 2004, decisión adoptada en el seno de la XX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guatemala el 19 de octubre de 1999.
- Declaración Trinacional Nicaragua, El Salvador, Guatemala: Integración para el Siglo XXI, donde estos gobiernos reiteran sus compromisos en el marco de la integración.

Otro elemento que consideramos necesario destacar son las fuertes críticas hechas al Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la sociedad civil en general, en cuanto a su labor fundamental como es el diseño de la política exterior de nuestro país.

El punto de convergencia de las críticas es el débil e inconsistente diseño e implementación de la política exterior nicaragüense en cuanto éste no corresponde a los objetivos trazados en base al interés nacional del país como la representación de la suma de los individuos que conforman las naciones centroamericanas.

2.2. Ministerio de Defensa

Entre las principales competencias de este Ministerio se encuentran:

- Elaboración de las políticas en el tema de la defensa de la Soberanía, Independencia e Integridad Territorial;
- Apoyo y coordinación del Ministerio de Gobernación con el resto de instituciones y entidades involucradas en Seguridad Ciudadana;
- Coordinación de las acciones de Defensa Civil de cara a la prevención o bien auxilio en caso de desastres naturales y catástrofes.

En cuanto a la organización del Ministerio de Defensa:

Direcciones Generales

a. Asuntos Militares

- Formular y proponer planes y políticas de la Defensa Nacional e implementar su ejecución;
- Dirigir trabajos técnicos;
- Formular y proponer los planes de apoyo a las acciones de la Policía Nacional y coordinar la participación del Ejército Nacional.

b. Política y Planes Militares

- Formulación, Diseño, Propuesta de los planes y políticas militares
- Aspectos Internacionales de la política de Defensa

Para abordar y valorar las acciones de esta entidad gubernamental, es necesario que puntualicemos cuales han sido los elementos determinantes en base a los que se han estructurado las políticas de Defensa en Nicaragua en la última década.

Elementos para la formulación de políticas de defensa y seguridad de los años 90.

- La drástica reducción del Ejército Popular Sandinista, como producto de la finalización de la guerra.
- La aprobación de la actual Legislación Militar en 1994 y las reformas constitucionales del año 1995, que establecen un nuevo marco jurídico, relativo a las misiones y roles de las FFAA.
- Los conflictos armados que se dan después de la guerra, principalmente con el grupo recontra Frente Norte 380 y el Frente Unido Andrés Castro;
- Las huelgas y asonadas ;
- Problemas de la propiedad ;
- Los tratados internacionales suscritos por nuestro país principalmente el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y Panamá que provee un nuevo

modelo de seguridad regional en base al cual se hace necesario el diseño de planes para la garantía de la misma;

- Los conflictos territoriales existentes.;
- Las amenazas de carácter natural y las amenazas internas.

El contenido del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica tiene una incidencia fundamental en las políticas de defensa de la nación. Este Tratado Marco tiene como propósito concretar un modelo de seguridad regional, y que está inspirado en el proceso de pacificación e integración centroamericana. Vamos a citar unos de sus artículos más relevantes, para dar una idea de cómo afecta las políticas de defensa de nuestro país.

El artículo 4 menciona: *"Cada uno de los países firmantes establecerá y mantendrá en todo momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares de seguridad pública por las autoridades civiles constitucionalmente establecidas y velará porque dichas autoridades cumplan con sus responsabilidades en ese marco y definirá claramente sus doctrinas, misiones, funciones de estas fuerzas y su obligación de actuar únicamente en este concepto".*

En su artículo 8, menciona literalmente: *"Para el fortalecimiento de la democracia, los países firmantes reafirman su obligación de abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o cualquier otra índole a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas que atenten contra la unidad y orden, del estado o propugnen el derrocamiento o desestabilización del gobierno democráticamente electo de otro país firmante".* Asimismo,

reitera impedir el uso de su territorio para organizar o realizar acciones armadas, actos de sabotaje, secuestros o actividades delictivas en el territorio de otro Estado.

El modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, desde la perspectiva de la seguridad regional, se rige por los siguientes principios.⁶⁷

- El principio de la solución pacífica a las controversias, renunciando a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para sanar sus diferencias.
- Los estados se abstendrán de cualquier acción que pueda agravar los conflictos u obstaculizar el arreglo de varias controversias por medio pacífico.
- Se renuncia la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia jurídica de cualquier estado de la región consignatario del Tratado.
- La seguridad democrática de cada uno de los Estados signatarios del tratado está estrechamente vinculada a la seguridad regional. Por tanto ningún Estado fortalecerá su propia seguridad menoscabando la de los demás. Esto implica que en la región haya un determinado *balance de fuerzas*, para que ninguno de nuestros países se sienta amenazado.
- La *defensa colectiva y solidaria* en caso de agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de un Estado Centroamericano de conformidad con las normas constitucionales respectivas y los tratados internacionales.

⁶⁷ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Arto. 26

Estos, entre otros, son aspectos importantes del Tratado Marco que inciden en la formulación de políticas de defensa y la formación de las doctrinas de defensa y seguridad nacional. Este Tratado fue firmado por los presidentes centroamericanos en diciembre de 1995 y disminuye considerablemente las posibilidades de confrontación entre los estados centroamericanos.

Dado que a nivel regional -en teoría- existe un tratado que se encarga de la seguridad del ámbito centroamericano, es nuestra opinión que en el caso específico de Nicaragua los elementos para la formulación de políticas de defensa y seguridad deberían de ser prioritariamente las causas estrictamente naturales, como huracanes, terremotos, sequías, epidemias, y en general las calamidades que pueden afectar la estabilidad de una nación.

Esto, a nuestro criterio, es en realidad lo que tiene que introducirse como elemento prioritario para mejorar los planes de defensa porque si bien hay una Dirección de Defensa Civil que se ocupa de resolver las posibles consecuencias de los desastres naturales, se ha evidenciado al momento de éstos la incapacidad de abarcar las necesidades de los afectados, sobretudo en las regiones de más difícil acceso en el país, para lo cual deberían de reforzarse los mecanismos de prevención en caso de desastres.

En el caso de las amenazas externas de carácter militar a la soberanía, a la independencia, como la posibilidad del despliegue de acciones que impliquen enfrentamientos bélicos directos entre las naciones centroamericanas, no creemos que en las actuales

circunstancias, sobretudo con el fin de la guerra fría y de los períodos álgidos de la crisis de los ochenta, puedan darse en la región.

El mismo Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, desde el punto de vista jurídico, inhibe a los países centroamericanos de tomar cualquier acción que amenace las buenas relaciones entre ellos, así como la agresión a soberanía nacional por parte de un miembro de la comunidad centroamericana en contra de otro.

Además, otro factor decisivo es el hecho de que en aún en ausencia del Tratado Marco, ningún país centroamericano está en la capacidad militar ni económica para enfrentar los costos que implicaría un enfrentamiento armado entre ellas.

La otra amenaza externa que ya se ha mencionado aquí es el narcotráfico y el tráfico de armas. El narcotráfico ha proliferado vertiginosamente en nuestro país sobretudo desde 1990, es un problema con el cual vamos a tener que lidiar, dado que Nicaragua es un país de paso obligado y propicio para los traficantes de droga para los EE.UU.

En nuestra entrevista con el Licenciado Félix Maradiaga, Director de Protección y Defensa Civil del Ministerio de Defensa de la República, abordamos el tema de las acciones concretas y prioritarias de dicha institución en materia de seguridad democrática.

Las acciones del MIDEF como órgano gestor para garantizar la seguridad democrática en Nicaragua, según el Licenciado Maradiaga las acciones de la Institución han estado

encaminadas a la aplicación del concepto de seguridad democrática en las relaciones con nuestros vecinos y nivel interno.

En cuanto a las relaciones con nuestros vecinos y dentro del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, propuesto en el Título III Artículo 26, numeral b) del Tratado Marco de Seguridad Democrática, se ha propugnado la primacía de los métodos pacíficos de resolución de controversias. Esto ha sido llevado a cabo a través de un replanteamiento conjunto entre Cancillería, Ejército y Ministerio de Defensa de la renegociación de disputas pendientes con nuestros países vecinos. Con este fin fue por ejemplo, que se dio la implantación de boyas como primer paso de distensionamiento en el caso del conflicto entre Nicaragua y Honduras por la demarcación territorial en el Golfo de Fonseca.

Otra acción concreta ejecutada por el Ministerio de Defensa y que a nuestro juicio, fue un desacierto, fue la renegociación de relaciones bilaterales en 1997 con la República de Costa Rica, referente al diferendo por el Río San Juan. De lo cual resultó el Acuerdo Cuadra Lizano el 30 de julio de 1998, inmediatamente criticado en su momento de manera contundente por los miembros del Poder Legislativo, el entonces Vicepresidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer y las organizaciones de la sociedad civil, alegando que la navegación por el río San Juan por parte de oficiales costarricense atentaba en contra de nuestra soberanía nacional. La acción de rectificación por parte de Nicaragua fue la clave para la anulación de dicho tratado el 13 de agosto del mismo año.

Así también, según informes del Ministerio de Defensa (MINDEF) durante el año 2000, se realizaron tareas de coordinación interinstitucional para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas, la continuidad y el fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, desarrollados en conjunto con la Policía Nacional, todo esto a fin de reducir el sentimiento de inseguridad en la población de las zonas afectadas por las bandas delictivas, así como alcanzar un clima de estabilidad en los territorios al permitir la libre circulación ciudadana, del transporte, las actividades agrícolas, comerciales, ganaderas y cafetaleras mediante la vigilancia de las principales vías de comunicación y núcleos poblacionales.

En el marco de la cooperación, se crearon nuevas Agregadurías Militares en España, Guatemala y Estados Unidos de Norteamérica, para el intercambio académico, logístico y diplomático con los Ejércitos de estos países. Aquí consideramos importante el intercambio con Guatemala, pues esta es parte de la región y éste tipo de intercambio está contemplado en el Tratado Marco en los Títulos I y III.

Otra acción llevada a cabo por el Ministerio de Defensa es el establecimiento de mecanismos para la regulación y control de automóviles robados.

También se nos informó que la institución participa en las comisiones de discusión para la elaboración de leyes conjuntas centroamericanas que regulan el tráfico y compras de armas ligeras no bélicas.

Desminado

Haciendo referencia al Artículo 34 del Tratado Marco de Seguridad Democrática, éste prohíbe la compra o estacionamiento o tránsito de armas de destrucción masiva e indiscriminada por cualquiera de los países de la región (que luego es reforzado en el Artículo 46 del mismo tratado).

El Ministerio de Defensa en conjunción con el Ejército Nacional, han jugado un rol preponderante con la implementación del Plan Nacional de Desminado con la destrucción de 2,597 minas antipersonales para julio del 2000. Así también se certificó la no existencia de 1,425 de estos artefactos que fueron instalados en diferentes minados del país.

El gobierno de Nicaragua creó la Comisión Nacional de Desminado a través del Decreto Ejecutivo No. 84-98, publicado en la Gaceta 236 del 5 de diciembre de 1998. Dicha Comisión es presidida por el Ministerio de Defensa, e integrada por otras instituciones y Organismos No Gubernamentales.

El objetivo fundamental de la Comisión Nacional de Desminado es dar fiel cumplimiento a los propósitos y compromisos adquiridos por Nicaragua en la firma y ratificación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal, y la Destrucción de dichas Minas (Tratado de Ottawa).

De igual forma tiene el propósito de coadyuvar e impulsar acciones destinadas a apoyar el programa de Desminado en Nicaragua, dirigido por el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Nicaragua.

La Comisión Nacional de Desminado tiene el objetivo de conciliar las relaciones de coordinación entre las Instituciones Gubernamentales, los Organismos No Gubernamentales y los Organismos Internacionales, en lo conducente, sobre la base de la Legislación Nacional, los principios del Derecho Internacional Público y la Costumbre, ya que existe una correlación en general de actividades por jerarquía, en los que cada uno de ellos tienen singulares facultades.

La Comisión está integrada (según Decreto 84-98) por el Ministerio de Defensa, que la preside y formula la política nacional del Desminado. Igualmente, por los Viceministros de Defensa, de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud, Educación, Cultura y Deportes, Agropecuario y Forestal y Transporte e Infraestructura. Asimismo, estará integrada por el Presidente del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el Presidente del Instituto de Seguridad Social, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Se invitan a la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, a la Organización de Estados Americanos (OEA), Cruz Roja Nicaragüense, al Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua y a la Comisión Conjunta de Discapacitados por la Paz y la Reconciliación.

Las funciones de la Comisión Nacional de Desminado son esencialmente:

- Promover el desminado como una de las prioridades humanitarias nacionales;
- Apoyar y darle seguimiento a las políticas del Programa Nacional de Desminado y supervisar el desarrollo de sus actividades;
- Gestionar la inclusión de Programas Sociales de Rehabilitación e Inserción de las Víctimas de las Minas Antipersonales;
- Gestionar la consecución de fondos del exterior e interior del país para las actividades de Desminado y canalizar los mismos para el Programa Nacional del Desminado a las diferentes entidades ejecutoras y darle seguimiento a la administración de dichos fondos. Asimismo, canalizar la contribución recibida en materiales y equipos.

A nivel centroamericano al respecto de la lucha contra las minas antipersonales como amenaza exógena a la seguridad democrática, esto se lleva a cabo a través del Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica.

Si bien, hemos hablado de las funciones y acciones del MIDEF en materia de seguridad, esto ha sido en base a informes y datos proporcionados por la misma institución y otros datos contenidos en el Informe de Gobierno de 2000, por tanto estimamos que todas estas acciones han sido estructuradas en base a lo establecido en el Tratado Marco, pero sólo en teoría, pues en la práctica creemos como ciudadanos que dichos lineamientos distan mucho de ser una realidad tangible.

Notamos también, que existe un atraso en la implementación a nivel de las instituciones civiles, pues no tenemos conocimientos de ninguna instancia o agencia centroamericana que aglutine a los Ministerios de Defensa, solo la CEFAC que aglutina a las Fuerzas Armadas Regionales.

Otra inconsistencia en las labores de la institución en cuanto a la elaboración de políticas de defensa es la falta de participación e involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, ya que como hemos mencionado la seguridad democrática tiene como eje central al individuo en los sistemas democráticos, por tanto los ciudadanos deberían estar directamente implicados en la elaboración de mecanismos encaminados a la protección y garantía de su seguridad y derechos.

Sin embargo, debemos mencionar lo que consideramos como algunos logros concretos alcanzados en las gestiones de dicha institución, nos referimos a los mecanismos de implementación y difusión del Tratado Marco, llevados a cabo por el Ministerio de Defensa como uno de los órganos ejecutores de la seguridad democrática en Nicaragua.

En primer lugar, la realización del Primer Curso sobre Defensa y Seguridad Democrática, realizado en los meses de febrero a marzo del 2000 en Nicaragua, primera actividad en la materia organizada en la región centroamericana. Así también el estudio del Tratado Marco de Seguridad Democrática se ha convertido en una condición esencial que debe formar parte del currículum de la Escuela del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua.

También en cuanto al Proyecto de Desminado aunque aún quede una gran labor por realizar, se han cumplido metas concretas, como la declaración de la frontera sur como territorio libre minas en el mes de abril del presente año.

2.3. Ministerio de Gobernación

Es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de garantizar la estabilidad interna, el orden público y la protección de las personas. Este Ministerio actúa, para el eficaz ejercicio de sus funciones bajo un marco de colaboración con los otros poderes del Estado y resto de Ministerios.

Los Programas adscritos al Ministerio de Gobernación son: Dirección General de la Policía Nacional, Dirección General de Migración y extranjería, Dirección General de Bomberos de Nicaragua, División de Salud, Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano y Centro de Amigos.

Según versa la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación (Decreto No 6490), su principales funciones son:

- Dirigir, organizar y supervisar la Policía Nacional a través de la Dirección General de la misma;
- Coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional;
- Coordinar la Dirección General de Migración y Extranjería;

- Realizar, a través de la Policía Nacional, las gestiones necesarias para la *garantía* acción del orden público, la seguridad de los ciudadanos así como proponer proyectos dirigidos a la prevención y persecución del delito;
- Coordinar con el Ministerio de Defensa las acciones conjuntas que desarrolle la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional;
- Capacitar y formar profesionalmente a los integrantes de la Policía Nacional.

Direcciones Generales

a. Sistema Penitenciario

En Nicaragua el Sistema Penitenciario presenta diversas experiencias acumuladas durante los últimos veinte años, ya que se produjo un cambio radical de su filosofía, orientándose hacia la reeducación y readaptación social de los reclusos, recurriéndose para ello a numerosas experiencias de régimen abierto y del trabajo socialmente útil.

El Sistema Penitenciario Nacional tiene como objetivo primordial la readaptación y rehabilitación de los internos. El Artículo 39 de la Constitución Política vigente, establece que en Nicaragua el Sistema Penitenciario es de carácter humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación de los internos para su posterior reinserción en la vida social.

El tratamiento educativo en los centros penitenciarios se ha realizado a través de:

- incorporación al trabajo socialmente útil;
- cumplimiento del régimen penitenciario y disciplinario;
- instrucción escolar;
- capacitación técnica y actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas;
- atención médica y atención social a los familiares.

El Sistema Penitenciario consta de ocho centros penales, que en la práctica no son suficientes para atender y albergar debidamente a los ciudadanos bajo prisión preventiva o definitiva basándose en sentencia judicial. Esto ha ocasionado la agudización de los problemas de sobrepoblación penal que se evidencian actualmente.

Consideramos que en Nicaragua no existe un verdadero Sistema Penitenciario que tenga como objetivo central la adecuada reinserción social de los reclusos una vez completada su condena.. Hacinamiento, corrupción, violación de los derechos humanos, incapacidad para resguardar a los reclusos, por mencionar algunos, son problemas comunes a los países de la región y que en el caso de Nicaragua representan una realidad alarmante. En este sentido, una buena medida sería seguir el ejemplo de Costa Rica, único país centroamericano en donde se admiten recursos de *habeas corpus* y de amparo contra las autoridades penitenciarias, lo que les permite a los ciudadanos una esperanza de adquirir su libertad.

c. Migración y Extranjería

Tiene como función primordial la de controlar los ingresos y egresos de personas al y del territorio Nacional. Esta institución desarrolla una serie de actividades en estrecha relación con la sección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se instruye a las delegaciones diplomáticas y consulares sobre los requisitos para el ingreso de extranjeros al país, así como de las medidas de prevención relativas a personas determinadas. Esto para prevenir el ingreso de personas no recomendables por sus actividades no apegadas a la ley que puedan actuar en detrimento de las arcas del Estado y por ende de la seguridad democrática de los habitantes de la nación.

La Dirección General de Migración y Extranjería según el IV Informe de Gobierno del 2000, está trabajando en mejorar sustancialmente la atención a los usuarios, así como en el fortalecimiento organizativo e institucional que pretende alcanzar los objetivos principales planteados anteriormente.

En tal sentido, se han puesto en práctica medidas de apertura y facilitación migratoria, así como la homogenización de instrumentos migratorios, lo que ha permitido alcanzar logros tales como la modernización de los despachos migratorios en los puestos fronterizos.

Se está trabajando en la revisión y readecuación del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, lo que creemos que permitirá contar con una base legal que sustente el quehacer de esta División.

Valoramos que si bien la formulación de los Planes de Acción de esta dirección tienen congruencia y están elaborados en base a las necesidades del país, en la práctica existe un alto grado de corrupción a lo interno de la mismas, según una serie de noticias de los diarios del país como La Prensa y El Nuevo Diario sobre la compra de pasaportes y de residencias por parte de ciudadanos extranjeros. En este incidente se vieron implicados altos funcionarios de Migración que fueron removidos de sus cargos.

d. Policía Nacional

Es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítico, apartidista y no deliberante sujeta a la autoridad civil del Presidente de la República. Por tanto, aún cuando su órgano rector, del cual depende, es el Ministerio de Gobernación el Jefe de la Policía Nacional es nombrado por el Presidente de la República. Esta estructurada de la siguiente manera:

1. Jefatura Nacional
2. Órganos de Especialidades Nacionales
3. Delegaciones de Policía
4. Estructuras Consultativas

El mando de la Policía Nacional, dirección y administración, corresponde al Director General de la Policía Nacional.

La Policía Nacional tiene por misión principal proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas, y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Asimismo, es responsable de la prevención y persecución del delito, velar por el respeto y preservación de los bienes propiedad del Estado y de los particulares, brindar el auxilio necesario al poder judicial y a otras autoridades que lo requieran.

Para esto, la Policía Nacional debe cumplir con los siguientes funciones:

- Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones;
- Investigar las faltas o delitos perseguibles de oficio;
- Garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales;
- Proteger y asegurar la conservación y custodia de las personas y de sus bienes que se encuentren en situación de peligro;
- Garantizar la seguridad y protección de los entes gubernamentales;
- Mantener el orden público y la seguridad ciudadana con el apoyo del Ejército Nacional;
- Recopilar y analizar información de cara a la prevención de delitos o amenazas que puedan alterar el orden público;
- Cooperación con la Policía de otros Estados de acuerdo a los tratados internacionales;
- Otras funciones que le otorguen las leyes nacionales.

Para el cumplimiento adecuado de estas funciones, los miembros de la Policía en su condición de servidores públicos, actuarán de acuerdo a los siguientes principios fundamentales establecidos en el Código de Conducta de la Policía Nacional promulgado por las Naciones Unidas:

- i. Legalidad;
- ii. Profesionalismo;
- iii. Tratamiento adecuado a los detenidos;
- iv. Relaciones con la comunidad;
- v. Uso racional y proporcional de la fuerza y armas de fuego.

La Policía Nacional de Nicaragua ha venido desarrollando diversos proyectos en los últimos años, entre los que podemos mencionar como exitosos el Proyecto de la Modernización del Laboratorio de Criminalística en su primera etapa, y la Modernización y Capacitación de la Policía Nacional y la Academia de Policía que se estableció en el año de 1994, lo cual evidencia que no había anteriormente una adecuada preparación del órgano policial.

Ambos proyectos han contribuido al proceso de modernización de la Policía Nacional, el que contempla otros proyectos tales como: Remodelación y acondicionamiento de Instalaciones de Seguridad Pública, Técnica Policial para enfrentar el Narcotráfico, Técnica Policial de Seguridad Personal, Modernización del Archivo Central, Cambio de Armamentos, Infraestructura de Comunicaciones, Unidades Móviles Operativas,

Suministro de Técnica en General, Renovación de Técnica Automotriz, Construcción y Rehabilitación de Bienes Inmuebles (entre los cuales destacan la Policía de San Carlos y la Policía de Jinotepe, con un monto de inversión pública por el orden de los tres y medio millones de córdobas), Capacitación en la Academia de Policía, y Cambio de Licencias de Portación de Armas de Fuego.

A nuestro parecer la consecución de estos proyectos se hace prácticamente imposible sino se lleva a cabo la asignación de recursos humanos, materiales y técnicos de gran magnitud, y por supuesto, recursos económicos.

A nivel del Estado el circuito institucional existente, que responde a los problemas de la seguridad ciudadana, incluye a la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. La situación de estas instituciones es muy precaria: presenta graves deficiencias que impiden enfrentar de manera coordinada las acciones que se realizan en sus respectivas competencias.

En el caso de la Policía Nacional, la situación es sumamente compleja porque los cambios que trajo la pacificación de la región y la transición democrática, implican una revisión total de su misión, estructura y funciones, sobre todo, en momentos de realización de importantes reformas que esperan conducir a la existencia de una policía civil desmilitarizada, profesional, eficiente y apolítica.

También es importante destacar que existe una tensión creciente entre los integrantes de la Policía Nacional y el sistema de justicia penal (Poder judicial) y muy débil conexión con

los integrantes del sistema penitenciario. Los policías acusan a los tribunales y a la fiscalía de ser demasiado deferentes en el tratamiento de los delincuentes y los menores infractores; inclusive, han llegado a plantear que los acusados salen libres por un sistema excesivamente garantista y por la intervención de los organismos defensores de los derechos humanos.

En cambio, los fiscales y los jueces plantean que la policía en algunos casos realiza detenciones arbitrarias y poco fundamentadas que impiden la constitución de un verdadero caso, lo cual dificulta el desempeño de los órganos judiciales. A su vez, ambas instancias se quejan de la incapacidad del sistema penitenciario para combinar adecuadamente el castigo por el delito cometido con la rehabilitación necesaria para reinsertarse en la sociedad.

En encuestas realizadas en la materia por la empresa internacional CID-GALUP en enero del año en curso y difundidas a través de los distintos medios de comunicación, se evidencia claramente la percepción negativa de los ciudadanos en cuanto al sistema judicial, como un sistema corrupto y politizado; ello ha propiciado la formulación de propuestas y, en algunos casos, la aprobación de leyes y reglamentos sobre código penal, código de procedimientos penales, entre otras.

Sin embargo, la reforma judicial sigue siendo una tarea pendiente en Nicaragua. El punto central de la reforma radica a nuestro juicio, en la forma independiente y despolitizada en que deben ser nombrados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, su duración en

los cargos, la separación entre la parte administrativa y la parte judicial, y la capacitación de sus integrantes. Este punto es sumamente sensible ya que existe una tradición de peligrosa cercanía entre los integrantes del poder judicial y los diversos partidos o movimientos dentro de esos partidos, lo que contribuye a deformar la justicia y a minar la confianza ciudadana.

Actualmente, la densidad poblacional y la ampliación del cuerpo policial, no sólo en cuanto a sus funciones sino también al número de efectivos, son factores que demandan una mayor asignación presupuestaria para el pleno y eficaz desarrollo de sus actividades⁶⁸. Es importante recalcar los graves problemas enfrentados por la institución en relación con el mantenimiento de las unidades de la policía, lo que se refleja en las condiciones de las celdas donde se encuentran los detenidos, que desde el punto de vista de los Derechos Humanos están en condiciones inhumanas. De igual manera, es preciso mejorar las condiciones de trabajo para el personal que labora en la misma⁶⁹.

En consecuencia, señalamos que:

- a) *En tanto no exista una verdadera coordinación entre las instituciones que conforman el circuito del sistema de seguridad, las posibilidades de tener un sistema altamente eficiente y confiable, se reducen cada día más. De ahí que se repita constantemente el mismo círculo de personas que son detenidas, remitidas*

⁶⁸ Gadea Castillo, Jedry. *Órgano Policial y Derechos Humanos en Nicaragua*. Pág. 37.

⁶⁹ *Ibíd.* Pág. 38.

a los centros penales y regresados a la sociedad por cualquier artificio legal o reclusas en los mismos por delitos que en otros países ni siquiera llegarían a los tribunales.

Esta es otra deficiencia del sistema de justicia: la inexistencia de mecanismos alternativos de solución prejudicial que evite la afluencia masiva de casos de poca monta a los tribunales, lo que impide el tratamiento de casos verdaderamente importantes para la justicia. Los mecanismos alternativos buscan evitar que los conflictos, faltas y hasta los delitos pequeños lleguen al ámbito judicial y que los mismos se resuelvan en el ámbito de la sociedad civil o en una instancia intermedia entre ésta y los gobiernos locales.

Un elemento común a los países centroamericanos es *la inexistencia de una política integral de seguridad que incluya aspectos estatales y comunitarios de prevención y que trate de ir a las causas de los problemas para prevenirlos y no a las consecuencias para combatirlas.*

El elemento que puede contribuir notablemente al establecimiento de esa visión integral y de conjunto, y sobre todo, de la precisión de los límites de la acción militar y policial lo constituye la correcta implementación del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Este tratado provee el sustento político-jurídico para una visión regional en materia de seguridad, sobre todo al precisar un ámbito de acción militar en lo relacionado con delitos que trascienden las fronteras nacionales como el crimen organizado, el tráfico de vehículos robados y el narcotráfico.

Capítulo IV: Principales Amenazas a la Seguridad Democrática en Centroamérica y Nicaragua

En este capítulo abordaremos las principales amenazas a la Seguridad Democrática en Centroamérica y Nicaragua, indicando para este fin los tipos de amenazas a ésta, contempladas y reguladas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica así como las acciones llevadas a cabo en este contexto para combatir dichas amenazas sobretodo en el caso de Nicaragua.

Las Amenazas a la Seguridad Democrática se dividen en Amenazas Externas o Exógenas y Amenazas Internas o Endógenas. En el Tratado Marco de Seguridad Democrática se regulan estas amenazas a través de las disposiciones de Seguridad Regional y de Seguridad de las Personas y sus Bienes, respectivamente.

1. Amenazas Externas a la Seguridad Democrática

Las amenazas externas a la Seguridad Democrática, como se expuso anteriormente, están reguladas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática como Seguridad Regional.⁷⁰ Estas Amenazas están referidas sobretodo al Territorio y a la Soberanía de los Estados.

⁷⁰ Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Artículos 26 al 56.

Dentro de este tipo de Amenazas pueden mencionarse como las más importantes el Narcotráfico, la Inmigración, el Terrorismo, la Destrucción del Ecosistema, entre otras.

1.1. Narcotráfico

El inevitable desmantelamiento de las bases militares estadounidenses en Panamá y el imparable tráfico de drogas que atraviesa territorio centroamericano en ruta hacia el mercado estadounidense, ha llevado a Washington a tratar de asegurar su presencia en la región por medio de convenios conjuntos antidrogas, el primero de ellos ya suscrito con Costa Rica y sólo espera la ratificación legislativa.

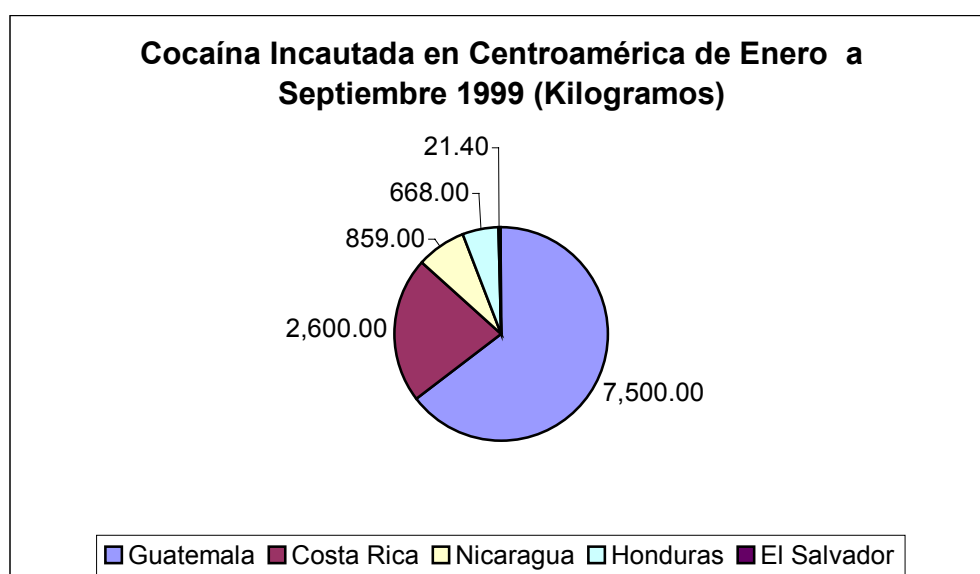
Durante el primer semestre de 1999, las policías antidrogas centroamericanas incautaron de 11.648 kilos de cocaína, de las 592 toneladas que anualmente buscan ingresar al mercado de consumidores estadounidenses.

La producción de cocaína es de 850 toneladas anuales, de las cuales, 592 van hacia Estados Unidos, 180 toneladas hacia Europa, y 78 toneladas se capturan en América Latina.

Por Centroamérica, cada año atraviesan en ruta hacia Estados Unidos entre 50 y 70 toneladas, aunque los narcotraficantes también usan las vías terrestres y marítimas. De acuerdo con un informe del Servicio de Guardacostas de EEUU, divulgado por el servicio informativo estadounidense, para el año fiscal de 1999, las incautaciones de droga se incrementaron en un 35 por ciento, en relación con el año anterior. Detalló que las cifras "sin precedentes" ascendieron a 50.980 kilos de cocaína, un 35 por ciento más que la

decomisada en 1998, de 36.980 kilos y ligeramente inferior a los 46.350 kilos que se incautaron en 1997.⁷¹

El año pasado, las autoridades antidrogas de la región se incautaron de 31 toneladas de cocaína. Guatemala fue la nación con mayores decomisos, 9.000 kilos. Le siguió Panamá con 7.400 kilos, Costa Rica con 7.381, Nicaragua con 4.749 kilos, Honduras con 4.000 kilos y El Salvador con 40.8 kilos.



De acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades antidrogas de la región, Guatemala continúa como la nación con mayores decomisos durante 1999: 7.500 kilos De enero a septiembre, seguida por Costa Rica, 2.600 kilos, Nicaragua con 859; Honduras con 668 kilos (de ellos 425 kilos encontrados en un helicóptero que aterrizó de emergencia en el norte de Honduras a mediados de septiembre) y El Salvador con kilogramos.

⁷¹ Cnnespanol.com

Centroamérica ha sido utilizada como puente para el Narcotráfico Internacional. Tal actividad se remonta probablemente a unos 18 años atrás, años en que la inestabilidad política y los conflictos locales disminuyeron la capacidad de los Estados para controlar adecuadamente su espacio aéreo y sus aguas territoriales. Por ello, se favoreció el trasiego de sustancias narcóticas provenientes de Sudamérica, las cuales han tenido como destino principal los Estados Unidos.

El narcotráfico y la política antinarcóticos han golpeado directamente áreas de gran vulnerabilidad, en las esferas social, económica y política de Centroamérica. Es un atractivo negocio para la mafia, pero también un recurso de sobrevivencia para grupos y comunidades enteras. Su generalización y extensión a lo largo del istmo, así como sus causas, rebasan el manejo restringido a los procedimientos policiales y exigen un enfoque adecuado a su naturaleza.

De acuerdo a nuestras investigaciones, en la crisis de Centroamérica durante la década de los ochenta, debido a la fuerte presencia militar en básicamente toda la región centroamericana los narcotraficantes veían como zona de “alto riesgo” a los países centroamericanos para sus actividades delictivas, por lo que su presencia en estos países era muy baja. Con el cambio de la situación política a raíz de la culminación de la citada crisis, el narcotráfico expandió su radio de actividades y de penetración en la región, agregando elementos de conflicto y tensión internacional a los estados centroamericanos.

En cuanto a esta proliferación de la narcoactividad en la región, el tema de las drogas ha pasado a formar parte central de la política de los Estados Unidos hacia el hemisferio, dando origen a tres fenómenos:

A. Internacionalización de la estrategia antinarcóticos como elemento clave de los programas dirigidos a los países del Caribe y el Área Andina;

B. Énfasis en los medios militares dentro de los mecanismos orientados al control de la producción y el tráfico;

C. Supeditación de las políticas de seguridad de los países del istmo respecto de la estrategia antinarcóticos respecto de la estrategia antinarcóticos de los Estados Unidos.

Esos tres fenómenos reducen el planteamiento de las políticas de seguridad según las prioridades nacionales, que deberían de estar completamente centradas en atender la depresión económica y la pobreza como causas fundamentales del atraso y del conflicto social.

Así, el tráfico ilegal de drogas, en sus diferentes fases (narcoproducción, narcotráfico, consumo local e inversiones de capital), es una de las amenazas externas más serias y complejas que enfrenta Centroamérica, en virtud del increíble poder económico, e incluso militar que las organizaciones dedicadas a ésta actividad detentan. Su efecto socava la transparencia y estabilidad de los gobiernos y de la sociedad en general; por este motivo,

en la mayoría de los casos es imposible que la fuerza pública controle y neutralice el narcotráfico.

La mayoría de los países de la región centroamericana poseen sistemas económicos incipientes en donde la pobreza, el desempleo y el atraso son las realidades con las que hay que lidiar día con día . Dadas estas condiciones, es fácil asimilar las razones por las cuales Centroamérica se ha convertido en el lugar idóneo y propicio para el tráfico indiscriminado de drogas, sino que además de ello se han fomentado otras actividades que complementan este trasiego ilegal⁷².

La lucha contra el narcotráfico es uno de los temas medulares de la agenda internacional, en este sentido Nicaragua ha sentado las bases para la lucha contra la narcoactividad en el país, esto se concretó con la Firma del Tratado Antidrogas con la DEA (Drug Enforcement Agency) de Estados Unidos el 01 de junio del año en curso.

El Convenio de lucha contra las drogas ilícitas tenía más de tres años de estarse trabajando. La primera vez que se planteó el asunto fue a comienzos del año 1998 a iniciativa del entonces embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, el señor Lino Gutiérrez, con quien se suscribió el instrumento.

Durante los tres años en que la Cancillería, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía, trabajaron conjuntamente en negociar este

⁷² Narcoproducción, narcotráfico, consumo local e inversiones de capital, básicamente.

Acuerdo con los Estados Unidos, la preocupación principal fue asegurarse de que el convenio preservase absolutamente la soberanía de nuestra nación.

El Acuerdo contempla la autorización previa de Nicaragua para cualquier patrullaje que llevaría a cabo la guardacostas norteamericana en nuestros mares territoriales y espacios aéreos. Se afirma que, salvo en casos excepcionales, los representantes de las fuerzas del orden nicaragüenses estarán a bordo de los barcos o aeronaves norteamericanas autorizando, supervisando y dirigiendo ellos toda operación de interdicción de estupefacientes en nuestro territorio nacional.

Otra faceta del Convenio es que cualquier arresto que pudiera hacerse en nuestro territorio lo efectuarán autoridades nicaragüenses y los narcotraficantes detenidos serán juzgados por jueces nicaragüenses y conforme a nuestras leyes. En el caso de que fuesen condenados, cumplirían su sentencia en nuestras cárceles.

Bajo ningún punto, según palabras del Señor Canciller de la República Francisco Aguirre Sacasa en su Declaración del 01 de junio del presente año , podría ser llevado un nicaragüense a los Estados Unidos o cualquier otro país, bajo los términos de este convenio, en el caso de que fuese detenido.

En cuanto a los activos que pudieran ser capturados bajo este acuerdo -- lanchas, aviones y a cargamentos de drogas— serán entregados para su disposición apropiada a nuestras autoridades.

A través de provisiones como las anteriormente citadas, el equipo negociador nicaragüense manifestó sentirse seguro de que se ha salvaguardado a nuestra soberanía de una manera total.

Hay otros aspectos de este tratado que vale la pena destacar, pues nos parecen muy difíciles y poco probables de aplicar a la realidad, sobretudo si analizamos las desigualdades abismales en las relaciones de poder y capacidad económica, política y militar entre Nicaragua y estados Unidos .

Uno de ellos es la afirmación de parte de nuestro Gobierno referente a la reciprocidad gobierno de este Tratado Antidrogas, pues el Canciller reiteró⁷³ que todas las facultades que el Gobierno le brindará a los Estados Unidos de América en territorio nicaragüense, las autoridades norteamericanas las proporcionarán igualmente en su territorio. No creemos que nuestro país esté en la capacidad de afrontar los costes de este compromiso en el remoto caso en que estados Unidos llegase a solicitar cooperación nicaragüense.

La entidad estadounidense que cooperará con las instancias nicaragüenses en la lucha contra las drogas ilícitas, será el servicio de guardacostas, una fuerza policial que depende del Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, que es civil, y no del Pentágono. En este sentido el tratado no violenta al Artículo Número 92 de nuestra Constitución Política que limita el acceso a nuestro territorio a fuerzas militares_de potencias extranjeras.

⁷³ Declaración Ministerial del 01 de junio del presente año posterior a la suscripción del Tratado Antidrogas.

Este convenio también prevé que cualquiera de las dos partes puede terminarlo con un preaviso a la otra parte de seis meses. Esta cláusula da gran flexibilidad y a nuestro parecer es uno de los puntos positivos del acuerdo.

Tomó tiempo negociar el acuerdo, pero el equipo nicaragüense manifestó su satisfacción ya que este tratado, según afirmaron, es más favorable que los otros que ha firmado los Estados Unidos de América con países del hemisferio.⁷⁴

El narcotráfico se ha convertido después del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en quizás la más grande amenaza que enfrentan los países de nuestro hemisferio. Los lores del narco cuentan con inmensos recursos y toda una red de organización. Se estima que el valor de las ventas de estupefacientes en tan solo los Estados Unidos en el año 2000, sobrepasaron los US\$ 60 mil millones de dólares, una cifra aproximadamente igual al producto interno bruto de todos los países de Centroamérica y la República Dominicana combinados. Con esta robusta base económica, los lores del narco tienen la capacidad de adquirir los equipos más sofisticados y poderosos para transportar a su nefasto producto.

Otra realidad es que cada vez más, Centroamérica y sus aguas territoriales se están convirtiendo en un puente entre las zonas productoras de cocaína en Sur América y su mercado principal en el Norte. Las estadísticas de la policía nacional que se incluyen en nuestro trabajo documentan esto ampliamente.

Otra triste realidad es que nuestro país, Nicaragua—al igual que otras naciones que se encuentran en la ruta de los narcos-- es vulnerable a la pesadilla del conjunto de malestares

⁷⁴ Ibid

vinculados con el narcotráfico como lo son la adicción, la desintegración de familias, el lavado de dinero, la corrupción, y la violencia, incluyendo los homicidios.

Sabemos que el Narcotráfico se está convirtiendo en un flagelo para Nicaragua. Y creemos que ningún país – y eso incluye a los Estados Unidos de América—tiene la capacidad de defenderse individualmente contra esta epidemia.

La única salida es aunar esfuerzos, a través de Convenios como el que nos ocupa en este apartado. Por tanto, consideramos que el Convenio Anti-Drogas suscrito con Estados Unidos, si bien, como ya mencionamos, tiene algunas disposiciones alejadas de la realidad en cuanto a su implementación, representa un despegue en la dirección de lucha colectiva contra el tráfico ilícito de estupefacientes y representa a la vez, un mensaje claro al mundo de que Nicaragua tiene cero tolerancia para el tráfico ilegal de drogas y que tiene el firme propósito de proteger a su pueblo del desmoronamiento institucional, social y nacional que el narcotráfico trae consigo.

Dada la importancia de este acuerdo, las dos naciones deberán ejecutar rápidamente los trámites necesarios para su entrada en vigencia en un futuro próximo.

Sin embargo, apreciamos que en el ordenamiento interno de Nicaragua no están tipificados delitos conexos al Narcotráfico como es el lavado de dinero, el tráfico internacional de vehículos robados, los delitos electrónicos, entre otros. Por tanto, mientras la justicia en Nicaragua y el resto de Centroamérica sea frágil, los narcotraficantes estarán viendo la región centroamericana como el lugar idóneo para sus actuaciones.

En Nicaragua, no existe tampoco una legislación que establezca que los implicados en la narcoactividad deban ser despojados de sus bienes al provenir éstos de sus actividades delictivas en contra de la sociedad.

El narcotráfico es un fenómeno de carácter internacional que afecta a todos los sectores de la sociedad. Enfrentamos una realidad alarmante, ya no somos simples países de tránsito y depósito de las drogas ajenas que cruzaban nuestros territorios hacia mercados tradicionales. Ahora las drogas también se consumen crecientemente aquí, en nuestra región, cada vez en mayor medida y afectando a adultos e incluso menores de edad.

El narcotráfico se ha convertido en un grave desafío a la humanidad entera, que pone en peligro no sólo la salud, la seguridad ciudadana y la de los gobiernos y los procesos de transición, construcción y consolidación democráticas.

Por tanto, la lucha contra el narcotráfico debe enfrentarse en todos los niveles y a través de todas las fronteras, respetando la soberanía y el marco jurídico de cada país. Ante la amenaza mundial se debe elaborar una armónica estrategia internacional. Esta estrategia está contenida en la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en las líneas prioritarias de acción de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y en diversos instrumentos jurídicos de carácter regional que han sido la base para crear la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP).

Los parlamentos de nuestros países deben reafirmar su determinación y compromiso de continuar luchando frontalmente contra el narcotráfico, desarrollando, entre otras, acciones tales como:

- a) Promulgando o reformando la legislación necesaria para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero, activos y otros bienes, así como la formulación de un proyecto marco centroamericano que contemple las regulaciones que sobre esta materia ha recomendado la Organización de Estados Americanos (O.E.A.);
- b) Velando por el estricto cumplimiento de las leyes y convenios que ya existen;
- c) Uniformando, dentro de los márgenes posibles, toda la legislación que sobre este tema existe actualmente en nuestra región;
- d) Impulsando mecanismos ágiles de cooperación que permitan robustecer la acción común y eficaz contra este delito de lesa humanidad;
- e) Desarrollando las figuras jurídicas de cumplimiento obligatorio que cada Estado considere necesarias para el adecuado control sobre el comercio y tráfico ilegal de divisas con el propósito de combatir el lavado de dinero. Estas medidas legislativas deberán ser conocidas por los bancos centrales de cada país o las juntas monetarias respectivas, y

f) Emitiendo, cuando corresponda, legislación que garantice la investigación, administración de justicia, protección de testigos y demás personas que participan en los procesos relacionados con el combate de la narcoactividad.

1.2. Destrucción del Medio Ambiente

En el Título III artículo 21 y 22 del Tratado Marco de Seguridad Democrática se dispone la voluntad de los gobiernos centroamericanos a efectuar los esfuerzos necesarios y promover la cooperación para garantizar la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural centroamericano.

Asimismo, en el artículo 22 las partes establecen que para una cooperación efectiva es imprescindible iniciar los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los convenios internacionales o regionales sobre la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

La reducción de los márgenes de decisión en la conducción del desarrollo tiende a convertirse en un problema de seguridad en otros ámbitos. Uno es el medio ambiente. En la medida en que se produce un agotamiento y deterioro de los recursos propios de la región aumenta la vulnerabilidad y la dependencia. Esa escasez es agravada por el agotamiento de las fronteras para expandir la base económica y productiva.

La explotación unilateral de recursos compartidos geográficamente como las cuencas hidrográficas, los bosques y los mares, puede constituir a mediano, si no a corto plazo, una fuente de tensión interestatal. Sobre todo cuando las instituciones regionales, nacionales y locales, no han logrado desarrollar la capacidad necesaria de imaginación para hacerle frente a los desafíos de esa potencial crisis político ambiental.

En la actual agenda internacional el tema del Medio Ambiente ha adquirido una importancia primordial, hecho que ha incentivado a que las naciones lo incluyan como un tema esencial a tratar a nivel interno, el medio ambiente es considerado como un patrimonio nacional de los estados que debe ser conservado, incluso se encuentra entre los principios para optar a la cooperación internacional, de la índole que ésta sea (comercial, financiera, técnica).

En 1996 se registró un índice de deforestación en Nicaragua de 100 000 hectáreas cada año, lo cual redujo el bosque en un 2,77%, y un índice de incendios forestales de 25 000 hectáreas por año. La deforestación y la contaminación tienen una profunda influencia en el deterioro de la calidad de las fuentes de agua. Actualmente, en Nicaragua sólo un 60% de los habitantes tiene acceso a agua "segura". Existe un grave descontrol sobre la emisión de gases tóxicos en la ciudad y sobre la contaminación indiscriminada de desechos sólidos (basura), problema que se extiende en todos los centros poblacionales. La pobreza tiene gran incidencia en la despreocupación por el medio, pues las comunidades tienen problemas mucho más inmediatos por resolver.

Esto demuestra que se han incrementado las actividades de depredación, degradación y explotación ilegal de los recursos que proporciona el entorno ecológico. Los países de la región centroamericana aún cuentan con pequeñas reservas forestales que representan no solo el patrimonio de nuestros pueblos sino también un legado para la humanidad⁷⁵.

La destrucción del medio ambiente se da a nivel interno cuando los habitantes del mismo estado explotan los recursos no renovables indiscriminadamente sin una cultura de preservarlos o reponerlos para el futuro, pero este problema se agudiza y se agrava de sobremanera al estar presentes empresas extranjeras que obtienen licencias y que no son examinadas debidamente antes de iniciar sus operaciones en el país ni son observadas de cerca una vez iniciadas las mismas.

Todo esto evidencia claramente la ausencia de leyes que regulen debidamente la explotación de los recursos naturales, sobretudo en cuanto a las empresas extranjeras. Si bien es cierto que el tema del medio ambiente está en agenda, no existe una cultura difundida a nivel nacional acerca del medio ambiente. Nicaragua está dirigiendo, en este sentido sus acciones de lucha contra la destrucción del medio ambiente en el marco del Protocolo de Kyoto que se adoptó en la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, celebrada en Japón en diciembre de 1997.

⁷⁵ Ibíd. Pág. 136.

1.3. Conflictos Territoriales

Aunque todavía existe el potencial para enfrentamientos armados a escala mundial basados no tanto en dogmas políticos, sino más bien en conflictos a lo interno de los estados que forman el conjunto de la Comunidad Internacional como: dogmas civilizacionales, ideológicos o religiosos, con el fin de la Guerra Fría la posibilidad de enfrentamientos directos entre los estados centroamericanos a raíz de conflictos territoriales se ha tornado realmente remota sobre todo a la luz del actual Proceso de Consolidación de las Democracias Centroamericanas y de la Integración Regional.

Con relación a la política territorial, debe trabajarse incansablemente a fin de fortalecer la misma. La defensa de la soberanía nicaragüense, a través de la diplomacia y el derecho internacional debe ser una de las funciones fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que la política territorial es y debe ser un componente constitucional esencial de la Política Exterior de Nicaragua, aquí es necesario mencionar la especial configuración de nuestro país que cuenta con casi 1,200 kilómetros lineales de costa bañados por el Océano Pacífico y el Mar Caribe, siendo el país centroamericano con mayor extensión de costas.

Las dos fronteras terrestres de Nicaragua (con Honduras y Costa Rica) se encuentran jurídicamente delimitadas, así como la frontera de Nicaragua y Honduras en el Golfo de Fonseca. No siendo así, en el caso de nuestras fronteras marítimas en el Caribe y el

Océano Pacífico. A excepción de la frontera jurídicamente definida con la República de Honduras en el Golfo de Fonseca a través de las llamadas Actas de 1900.

Coincidimos con las manifestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que se refieren a que la política territorial nicaragüense debe partir del concepto que las zonas de las fronteras y los espacios marítimos deben servir para brindar seguridad ciudadana; estrechar los lazos de cooperación de dos o más estados; incrementar la cooperación y el entendimiento; producir un espacio de mayor complementación vecinal y de integración; generar un orden y una forma de relacionarse entre las personas para vivir en comunidad; permitir el desarrollo de la Nación y del Derecho Internacional, y proporcionar a la población mejores niveles de desarrollo económico.⁷⁶

Consideramos la construcción de la confianza interestatal como un factor vital a fin de lograr acuerdos jurídicos vinculantes, sobre los cuales puedan establecerse garantías efectivas de cumplimiento. Estos pasos deben darse en estricto apego a los intereses de la Nación y los principios del Derecho Internacional moderno.

Así también deben contemplarse mecanismos de prevención de conflictos y de alerta temprana, que eviten y prevengan eventuales choques y antagonismos en torno a las zonas fronterizas, así como cualquier otro tipo de enfrentamiento.

⁷⁶ Memoria Laboral del MINREX de 1999

Estas propuestas deberían ponerse en marcha ante los diferendos que Nicaragua enfrenta actualmente como son:

- Nicaragua-Honduras
- Nicaragua- Colombia
- Nicaragua-Costa Rica

En este sentido, se ha optado por los medios de solución pacífica de las controversias previstos en la Diplomacia, el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario de la Integración Centroamericana. Se han realizado una serie de acciones políticas y diplomáticas encaminadas a persuadir a Honduras a la no ratificación del Tratado, estableciendo contacto con Presidentes y Cancilleres de la Región, el Parlamento Centroamericano y la Secretaría General del sistema de Integración Centroamericano, entre otros.

Paralelamente, Nicaragua hizo uso del Derecho de la Integración Centroamericana, presentando denuncia, el 29 de noviembre de 1999 contra Honduras por considerar que dicho Tratado representa una violación al artículo 6 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)⁷⁷ y el inciso F del artículo 27 del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica que obliga a los Estados Miembros a promover la seguridad jurídica de las fronteras por medio de las

⁷⁷ Artículo 6: “Los Estados miembros se obligan a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que pongan en peligro la consecución de los propósitos y el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema de Integración Centroamericana”.

delimitaciones, demarcaciones y solución de diferendos territoriales pendientes, en los casos que corresponda, y garantizar la defensa común del patrimonio territorial de Centroamérica. Así también solicitó a la Corte, dictar medidas cautelares a fin de que Honduras no ratificase dicho tratado.

La Corte admitió la demanda y dio curso a la solicitud nicaragüense, ordenando a la República de Honduras suspender el trámite de ratificación y entrada en vigor del Tratado Ramírez-López. La decisión del 30 de noviembre de 1999 del más alto Tribunal de Justicia de la región centroamericana, en su parte resolutive manifiesta:

“RESUELVE I) Admítase la demanda interpuesta por el Estado de Nicaragua en contra del estado de honduras, al que deberá entregarse copia de la misma con las inserciones pertinentes, para que comparezca a manifestar su defensa en el plazo de sesenta días a partir del emplazamiento. II) A fin de resguardar los derechos de las partes, dictase la medida cautelar consistente en que el Estado de Honduras suspenda el procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor del Tratado de Delimitación Marítima entre las Repúblicas de Honduras y Colombia, suscrito el dos de agosto de mil novecientos ochenta y seis, hasta que se pronuncie el fallo definitivo; providencia cautelar que se comunicará inmediatamente por la vía más rápida a las partes interesadas, así como a los demás Estados Miembros. III) Instase muy respetuosamente a los responsables políticos de los Estados de Honduras y Nicaragua, así como de los Órganos Fundamentales de la Integración y de los demás Estados del Sistema de Integración, a

agotar todos los medios que conduzcan a la integración plena de Centroamérica y a preservar la Comunidad Centroamericana y su patrimonio. Notifíquese.

Lamentablemente, los esfuerzos, resoluciones e incluso resoluciones judiciales emanadas del sistema de Integración Centroamericana no han podido poner fin a estos conflictos, lo cual, lejos de abonar a la unidad centroamericana impone un panorama más que desalentador a la región.

En el caso de Honduras-Nicaragua, a través de la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, se recurrió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el cual atendió la solicitud nicaragüense y encomendó al Secretario General que: “con la mayor urgencia y de acuerdo con los gobiernos de Honduras y Nicaragua designara un representante especial exclusivamente para evaluar la situación, facilitar el diálogo y formular recomendaciones conducentes a eliminar tensiones y a prevenir actos que pudiesen afectar la paz hemisférica”.⁷⁸

Con base a la misma, fue nombrado el Secretario Embajador Luigi Eunaudi, como representante del Secretario General, quien después de visitar Nicaragua y Honduras, convocó a una primera reunión para los días 29 y 30 de diciembre de 1999, en ella, los Cancilleres de ambas Repúblicas alcanzaron los acuerdos siguientes:

- Definir y establecer una zona de exclusión militar en el Mar Caribe;

⁷⁸ Idem

- Congelar en el borde fronterizo la presencia de efectivos militares y de puestos fronterizos a las cantidades existentes al 1 de septiembre de 1999;
- Reanudar el proceso de señalización en el Golfo de Fonseca;
- Implementar medidas de fomento a la confianza;
- Reafirmaron la conveniencia de resolver sus diferencias por medios pacíficos.

2. Amenazas Internas a la Seguridad Democrática

Las Amenazas a la Seguridad interna de los países de la Región Centroamericana se identifican como aquéllas que van en detrimento de las instituciones que aseguran el orden y la justicia de una sociedad⁷⁹, y que incluso atentan contra la supervivencia del Estado mismo.

Sin embargo, cuando se hace referencia a las Amenazas Internas a la Seguridad Democrática, éstas no deben entenderse como una situación que únicamente obedece a factores endógenos en un país, ya que por lo general las amenazas que en primera instancia se denominan internas son el producto de factores exógenos que actúan como estimulantes, y que aunados a factores internos ya existentes, provocan la situación de amenaza como tal.

Este tipo de amenazas, en el contexto del Tratado Marco de Seguridad Democrática, se regulan como Seguridad de las Personas y de sus Bienes. Entre las amenazas más

⁷⁹ Ibíd. Pág. 17.

importantes en cuanto atañen directamente a la realidad nicaragüense, hablaremos de: la pobreza y la pobreza extrema, la corrupción y la inestabilidad política, la situación socioeconómica, la inseguridad ciudadana y

2.1. Pobreza

La joven democracia centroamericana está indisolublemente unida a valores como la Paz, Libertad y Desarrollo en la región. Estos valores constituyen los pilares fundamentales para el impulso, surgimiento y desempeño de las instituciones democráticas. Por ende, la importancia de este tipo de amenazas radica en que en el caso de no hacerles frente de manera rápida y eficaz, ello significaría en un mediano plazo el desplome de las instituciones democráticas, ya que se estarían transgrediendo sus orígenes y principios creadores.

Consideramos que en la región persisten factores que sumados a la ausencia de las garantías de Derechos Civiles y Políticos, fueron detonantes principales de conflictos en épocas pasadas. Entre estos factores se destacan: la pobreza, falta de oportunidades y el abandono de los sectores más desposeídos de la sociedad.

Es por ello que la pobreza dentro del Tratado Marco de Seguridad Democrática está contemplada y considerada como una de las principales Amenazas a la Seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas⁸⁰, en cuanto los

⁸⁰ Tratado Marco de Seguridad Democrática, Título I, Artículo 10, Numeral d).

altos índices de pobreza son indicadores claros de la falta de garantías de la seguridad de los habitantes y por consiguiente de los estados mismos, la superación de la pobreza y la pobreza extrema forman parte esencial de la base para el desarrollo sostenible en la región centroamericana, esto se encuentra recogido en el Título I, art. 1 del Tratado Marco de Seguridad Democrática.

En el caso de Nicaragua, en el Capítulo III de la Constitución de la República de Nicaragua, sobre los Derechos Sociales de los nicaragüenses del Art. 56 al 65 se establecen las condiciones de vida que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos y sectores por igual, entre estos derechos se encuentran los más esenciales como son: seguridad, alimentación, salud, vivienda, trabajo, preservación del medio ambiente, entre otros, derechos de los cuales la mayoría de los nicaragüenses no está en pleno disfrute o incluso no tienen acceso a los mismos, lo cual ha generado índices alarmantes de descomposición social alarmantes, en cuanto consideramos que la pobreza es la causa próxima de la criminalidad en el país, convirtiéndose en un círculo vicioso en donde la pobreza genera más violencia.

En Nicaragua, el problema de la pobreza se ha agudizado, llegando a dividirse incluso, en pobreza y pobreza extrema. Los sectores que viven bajo ésta última, sobreviven en condiciones infrahumanas, pues carecen de las condiciones básicas para su supervivencia, según estudios del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Esto conduce a que cuestionemos los programas de lucha contra la pobreza del Gobierno, pues creemos que realmente no se han diseñado estrategias concretas para obtener resultados a corto

plazo, no se ha partido de lo particular a lo general, sino que más bien se han elaborado políticas vagas y poco viables para su posterior implementación.

El programa diseñado por el Gobierno de Nicaragua para combatir la pobreza carece del 48% del financiamiento, que en total es de 519 millones de dólares. Esto es un ejemplo de los factores que podría retrasar la meta propuesta para el año 2015 de reducir a la mitad la pobreza extrema que hoy afecta a más de 800 mil ciudadanos conforme a las estadísticas oficiales. En base a esto, la economía tendría que crecer 5.5% durante los próximos 15 años de manera continua e ininterrumpida, siempre con el objetivo único de sacar de la extrema pobreza a 400 mil ciudadanos de 800 mil que hay actualmente⁸¹.

En el ámbito internacional, la pobreza es un tema suma importancia en la agenda y foros internacionales, pero sucede lo mismo que a nivel regional o incluso el caso nicaragüense: no se han diseñado estrategias concretas para obtener resultados moderados, pero sostenidos a corto plazo.

2.2. Pobreza y Corrupción

Otro hecho que cabe mencionar en este apartado es la relación directa entre el tema de la pobreza y el de la corrupción, que será abordado más adelante. Los programas contra la pobreza también podrían ser afectados por la percepción de corrupción en el Gobierno. Cuando los gobiernos son corruptos y no tienen el deber de presentar informes detallados y

⁸¹ Datos brindados en entrevista por el Señor Enrique Bolaños Geyer, candidato a la Presidencia de la República de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista.

específicos sobre el manejo y utilización de los fondos de las arcas públicas, los programas de reducción de la pobreza difícilmente pueden hacer llegar los beneficios a los destinatarios previstos.

La corrupción distorsiona la asignación de los recursos, desviándolos de su uso primario e idóneo, con lo cual se retrasa el crecimiento económico.

Existe incluso, una tergiversación en los enfoques en cuanto el problema de la pobreza ha sido abordado como un problema económico, elaborándose, en consecuencia, políticas económicas cuando en realidad si bien es un problema de distribución de recursos, debe tratarse o más bien debe estructurarse como una política social no de mitigación, sino de erradicación de dicha amenaza.

Para este fin, como ya mencionamos anteriormente deben trazarse metas basadas en objetivos concretos y a corto plazo, pues la pobreza es un mal que obstaculiza los procesos democráticos, para el desarrollo de los mismos es necesario garantizar la seguridad de las personas que habitan en los estados, entendidos como espacios en los cuales los individuos estén provistos de las condiciones necesarias para su supervivencia ,desarrollo y la garantía de sus derechos humanos fundamentales.

Debe promoverse la participación ciudadana en el diseño de las acciones y los planes de gobierno para establecer las áreas prioritarias de actuación.

2.3. Grupos Armados

Una serie de Grupos Armados, amparados bajo el argumento de que su actuación se producía ante el incumplimiento gubernamental de promesas sociales y económicas; se dedicó a inicios de la década pasada, a la comisión de acciones delictivas que dichos grupos adoptaron como políticas y más que todo como un modus vivendi.

La actuación de estas bandas ha continuado de manera ininterrumpida, y en los últimos días del mes de junio del corriente año se recrudecieron fuertemente. La primera emboscada ocurrió el 23 de junio y fue ejecutada por remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC). En esta emboscada murió el capitán Juan Torres, oficial de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, mientras que trece oficiales más, entre ellos el jefe de la Policía del Triángulo Minero, subcomisionado José David Jarquín, resultaron heridos. Esta emboscada fue en la comunidad de Rosa Grande, a 30 kilómetros al suroeste de Siuna.

En la segunda emboscada, ocurrida el martes 26 de junio del corriente, los delincuentes atacaron a una patrulla policial, y resultaron tres policías heridos, entre ellos al capitán Francisco Orozco Guido, jefe de la Policía de Bonanza, en la comarca Yaoya, 12 kilómetros al este de Siuna.

El capitán Carlos Malespín, jefe de la Policía en Rosita y sobrevivientes de la emboscada del 23 de junio dijo que el grupo de armados está compuesto por unos 18 a 20 elementos. La Policía Nacional asegura que “la persecución está dando resultado, no le daremos tregua

a las bandas criminales, disponemos de suficientes recursos y capacidad para neutralizarlos definitivamente.⁸²

En los últimos años ex-integrantes de esos grupos, conformados por desmovilizados de la Resistencia y el Ejército Nacional degeneraron su actuación y se convirtieron en bandas delictivas que atentan no solo contra la Seguridad de las Personas, sino también contra el desarrollo agropecuario del país, operando principalmente a los departamentos de Boaco, Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y Zelaya Central.

Para enfrentar esta situación y hacer prevalecer la autoridad en las zonas rurales, se han implementado diversos planes policiales tales como⁸³ Plan de Seguridad en el Campo y la Ciudad, El Plan del Restablecimiento de la Autoridad en el Campo y varios más de orden público. Hasta la fecha se han establecido 192 Delegaciones de la Policía Voluntaria en sectores alejados de las cabeceras municipales pero que por las condiciones económicas y geográficas no han permitido establecer una presencia policial permanente.

Factor presupuestario y actividad delictiva, son elementos estrechamente relacionados, el primero es uno de los factores que incide en el incremento del segundo. En tal sentido, el bajo porcentaje de recursos económicos con que cuenta la Policía no permiten la total efectividad en el esclarecimiento de los delitos que llegan a su conocimiento.

⁸² Declaraciones del Coronel Elías Largaespada, jefe del destacamento militar del Norte, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, en el diario nacional La Prensa. Sección A. Pág. 1A.

⁸³ *Ibíd.* Pág. 145.

Pese a las alarmantes estadísticas, el órgano policial no cuenta con el equipo adecuado que garantice condiciones mínimas de seguridad para sus miembros en el desempeño de sus funciones, lo cual representa una violación a preceptos constitucionales esenciales como son:

- el derecho que tiene toda persona a su seguridad, de acuerdo al Artículo 25 de la Constitución
- la obligación del Estado de procurar la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos de las personas de acuerdo al Artículo 81 de la Constitución de Nicaragua⁸⁴.

2.4. Corrupción y seguridad de los habitantes

Los procesos de reducción del Estado pueden traer consigo, la debilidad de la capacidad de cumplimiento normativo de las instituciones y personas. En este contexto, corrupción y violencia son manifestaciones normales o consecuentes de un ambiente de ilegalidad o de devaluación de la normatividad establecida. Esta circunstancia debe ser objeto de especial análisis ya que la ilegalidad y la impunidad han sido patrones comunes del ejercicio del poder que atentan contra la consolidación de los sistemas democráticos en nuestros países.

La corrupción afecta la esencia de la función pública en tanto privatiza el uso de los bienes y servicios públicos en función de quienes mediante ventajas económicas o de cualquier

⁸⁴ Ibid. Pág. 39.

otro tipo, pueden lograr para sí o para terceros el beneficio de la administración pública e incluso, de la administración de justicia.

Ciertamente, los niveles de corrupción en la esfera pública es algo prácticamente imposible de medir salvo por estudios más científicos, perceptivos y estimativos. En nuestro medio no contamos con estudios al respecto, así como tampoco existen estrategias planificadas anti-corrupción a nivel nacional. La reacción frente al fenómeno es por lo general reactiva e inconsistente, la mayor parte de casos, ineficaz. Los cuestionamientos sobre el indebido uso de fondos públicos, sobre licitaciones viciadas y clientelismos políticos se dirigen hacia la capacidad de las instancias contraloras de estos aspectos y a la ausente voluntad política para hacerlas funcionar.

La corrupción es un mal endémico de cualquier burocracia, pero que puede ser minimizada si se cuenta con mecanismos adecuados y eficientes de control. Cuando no existe un control sobre este problema, este se reproduce casi en un efecto "contagio", es decir, las instituciones y personas corruptas llevan el problema a las otras instituciones con las que entra en contacto es entonces cuando el mal pasa a ser epidemia.

La corrupción es un atentado a la democracia y un obstáculo para el desarrollo, en tanto desvanece la imagen de Estado al servicio de todos y limita las capacidades de éste para llevar recursos a las áreas de atención social. Cada vez más se difunde la idea que la corrupción es un problema que afecta en gran medida la seguridad de los habitantes de un país.

Esto se recoge en el artículo 5 del Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática que dice textualmente “ La corrupción, pública o privada, constituye una amenaza a la democracia y seguridad de los habitantes y de los Estados de la región centroamericana.”, es así que en dicho Tratado se resalta como uno de sus principales objetivos la erradicación de la corrupción y establece la necesidad de coordinar los esfuerzos en este sentido por medio del trabajo conjunto de las contralorías de la región.

Es un hecho amenazante para la sociedad y el sistema democrático cuando la corrupción logra penetrar e instalarse en los sistema de seguridad y justicia, síntomas que en nuestro país ya están manifestándose con la gran cantidad de escándalos en las instituciones que han salido a la luz sobretodo a partir de 1999 hasta la fecha, donde las malversaciones y los malos manejos de los fondos públicos siguen ocupando los titulares de los diarios.

De no lograr depurarse ni controlar los agentes corruptos en la administración de justicia e incluso, en las instituciones de seguridad, es mucho más difícil, estructurar estrategias de tratamiento del crimen, en tanto, la presencia de este tipo de prácticas ilegales adormece a las mismas instancias encargadas de combatirlas. Además, limita la capacidad de elaboración de políticas y estrategias de seguridad, así como su ejecución. En nuestra opinión, una institución policial transparente necesitará menos personal para el desarrollo de sus funciones que una corrupta .

Ausencia de control, burocracia y debilidad institucional son tres de los principales viveros de corrupción. Por lo anterior, debe insistirse en el ejercicio de la transparencia como presupuesto de iniciativas de fortalecimiento institucional, dadas las graves consecuencias que su ausencia puede acarrear en términos sociales y políticos para la población.

La falta de ética y probidad en la función pública y en el comportamiento social en general, representan una grave amenaza a la democracia. Su vigencia socava los valores y las prácticas democráticas y le sustrae credibilidad y legitimidad a las instituciones democráticas. Es un fenómeno persistente y corrosivo de la cultura política en sistemas democráticos incipientes como el nicaragüense.

Bien expresa el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria⁸⁵, la corrupción es un fenómeno que ha salido a la luz por el aumento de las libertades públicas, la mayor transparencia en la gestión pública y la reducción de la tolerancia nacional e internacional frente a actos de corrupción.

Según el último informe presentado en Francia por el organismo Transparencia Internacional, Nicaragua se ubica en el tercer lugar de los países en los que se percibe hay mayor corrupción en América Latina, después de Bolivia y Ecuador. A nivel mundial, según el informe, Nicaragua se encuentra en el lugar número catorce de los países percibidos como los más corruptos del mundo.

El tema de la integridad moral de los funcionarios es una vieja preocupación de la humanidad.

La Corrupción ha estado regulada desde 1899 a través de los denominados Tribunales Supremos de Cuenta de Nicaragua, posteriormente en la Constitución Política vigente hasta

⁸⁵ Gaviria, César. *Senderos hacia el nuevo milenio. El Camino Recorrido: 1994-1999*. Washington D.C., OEA. Junio 1999. Págs. 09 y 10.

el 19 de Julio de 1979 se establecieron disposiciones acerca de los bienes públicos, los órganos, los órganos de control, funcionarios y empleados públicos.

En el año de 1979 se promulgó la Ley de la Integridad Moral de Funcionarios Públicos, por primera vez en la historia nacional se imponía la obligación a toda persona en ejercicio de funciones de autoridad y manejo de fondos públicos y recursos destinados para el bien de la comunidad a rendir declaración de su patrimonio personal con el propósito de evitar la confusión del patrimonio individual que por razón del cargo le correspondía administrar.

Esta obligación se extendía al patrimonio del cónyuge e hijos que estuvieran bajo la patria potestad del sujeto en cuestión⁸⁶. Esta ley se materializa con la promulgación de la ley creadora de la Contraloría General de la República (Decreto 86), en la que se establece su competencia para aplicar la Ley de Integridad Moral de Funcionarios Públicos (arto.3). Esta Ley de Integridad Moral de Funcionarios Públicos fue reformada, únicamente en sus artículos 2 y 3, pero se encuentra aún vigente.

En 1999, la Ley de la Contraloría General de la República fue objeto de reforma, se estableció lo que hoy se conoce como Contraloría Colegiada, dicha reforma fue realizada con el objetivo expreso de reforzar la lucha contra la corrupción en la administración pública. Sin embargo, en el último trimestre de este año se realizó una consulta nacional sobre la percepción de integridad y corrupción en la Administración Pública. Esta consulta

⁸⁶ Ibid. Pág. 57.

reveló la percepción sumamente negativa que tiene la ciudadanía nicaragüense sobre la honestidad y transparencia de los funcionarios institucionales estatales⁸⁷.

El rol de la Contraloría General de la República en la lucha contra la Corrupción, ha estado sujeto a toda una serie de cuestionamientos, en cuanto se afirma que este órgano desempeña una función meramente decorativa, ya que ante el gran número de escándalos de corrupción en el gobierno actual salidos a la luz recientemente se ha evidenciado que no existen mecanismos coercitivos para resolver los delitos cometidos en detrimento de las arcas públicas, delitos que atentan contra todos los ciudadanos nicaragüenses.

Al respecto, el Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CSCGR), Doctor Guillermo Argüello Poessy, dijo refiriéndose al último informe de Transparencia Internacional, que aunque desconoce los criterios que utiliza el organismo para medir la percepción de corrupción a nivel mundial, pero que sus resultados son preocupantes, *“sobre todo porque las percepciones pueden más que la realidad. No sé los parámetros que se ocupa en ese organismo para medir, pero si usan como el criterio las investigaciones periodísticas, creo que hay algo de razón. Hay que reconocer que en el país la percepción de corrupción es muy alta. Incluso, según algunas encuesta – lamentablemente- hasta la Contraloría aparece como una institución con alto índice de corrupción, lo cual es preocupante.”*

⁸⁷ Ibid. Pág. 60.

Agregó que “es por eso que nuestro trabajo va a ir enfocado en el sentido de ir superando esa percepción, aunque debo aclarar que nuestro trabajo es emitir resoluciones y lo que pasa en los tribunales ya no es nuestra responsabilidad. Creo que hay que trabajar para que esa percepción disminuya, sobre todo por la imagen que vendemos a los inversionistas que quieren apoyar el desarrollo del país.”

De igual forma se expresó el diputado Víctor Manuel Talavera, ex miembro de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, quien dijo sentirse preocupado por el lugar que ocupa Nicaragua “en el ranking” de países percibidos como los más corruptos en América Latina y el mundo.

La corrupción –dijo- definitivamente es un flagelo que nos está haciendo mucho daño y el gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen que luchar contra esto. Yo siempre he dicho en la Asamblea Nacional que hay que legislar fuerte para combatir ese mal, pero siempre hay personas a las que les importa muy poco este aspecto y dejan que las propuestas se las lleve el río”.

Nicaragua como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de sus principios y propósitos asumió compromisos de combatir el flagelo de la corrupción mediante la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado que sirve de marco jurídico general, y para cuya implementación se requiere el desarrollo de proyectos y acciones integrales en los diferentes ámbitos para así abarcar la compleja interrelación de factores que dicho proceso supone.

2.5. Inseguridad Ciudadana

Otra Amenaza a la Seguridad Democrática y que a la vez va íntimamente ligada al tema de la pobreza es la Inseguridad Ciudadana. Esta amenaza constituye un problema de grandes magnitudes para las autoridades y población nicaragüenses. En el Artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua se establece que *“Toda persona tiene derecho :*

A la libertad individual

A su seguridad

Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica”

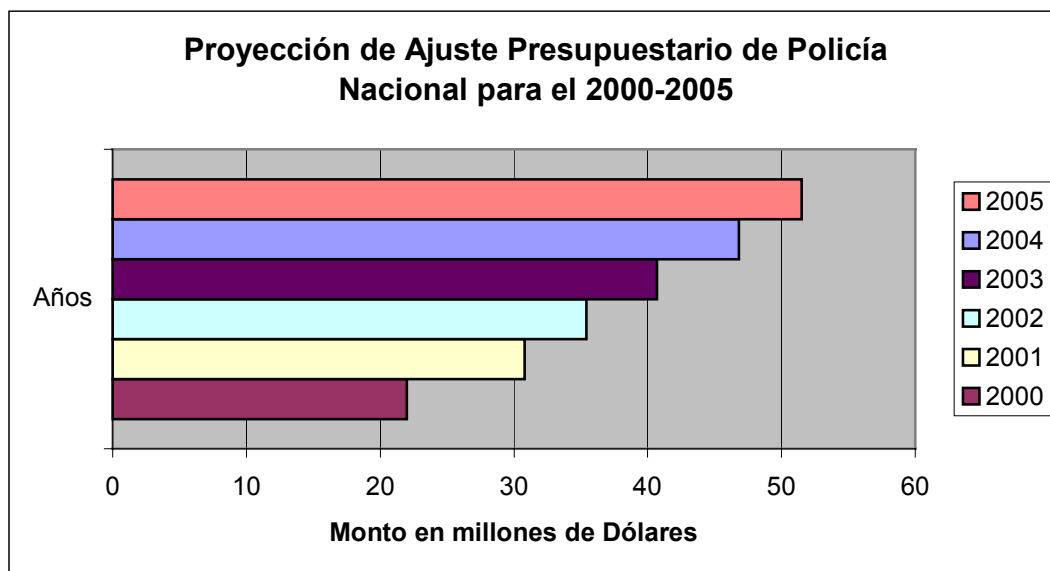
Nicaragua es uno de los países que tienen uno de los más bajos índices de seguridad humana, según el último informe sobre Desarrollo Humano del año 2000, divulgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .

El Estado tiene la obligación de brindarle protección física y jurídica a la ciudadanía. Para cumplir con esa responsabilidad, los Estados civilizados se apoyan, en parte, en un cuerpo policial que tiene a su cargo la salvaguarda de la integridad de las personas, así como la preservación del orden y la paz públicos. La sociedad reclama, con justa razón, un entorno tranquilo y seguro donde se pueda vivir, trabajar y progresar en paz.

A mediados y finales del año 2000 la ciudad de Managua se vio afectada y conmovida por una ola de asaltos a bancos y a otras empresas. Por el grado de sofisticación observado en la ejecución de algunos de esos atracos, se sospecha que en la comisión de los mismos

pueden haber intervenido individuos con preparación militar o bandas de delincuentes de otros países del área. En el campo también existe un alto índice de violencia e inseguridad.

La policía Nacional que tiene bajo su responsabilidad la prevención del crimen y el combate a la delincuencia, siente que ha sido rebasada en su capacidad de respuesta. El jefe de la Policía Nacional Franco Montealegre, durante una comparecencia televisiva, señalaba que en los últimos diez años las denuncias de delitos se han incrementado en un 255%. Ese crecimiento es preocupante, pues a pesar de que no se hayan alcanzado todavía los niveles de inseguridad ciudadana de otros países de Centroamérica, los niveles delictivos no dejan incrementarse, tal como lo mencionamos en el Capítulo III de este trabajo.



La seguridad ciudadana requiere de un cuerpo policial profesional, capacitado y eficiente. Ello se puede alcanzar con un adecuado entrenamiento y equipamiento así como con una buena selección, pero asimismo estamos de acuerdo de que debe de hacerse realidad un incremento en el salario de los oficiales, básicamente por los riesgos que conlleva dicha profesión.

Directamente relacionada a todo lo referente a Inseguridad Ciudadana es la situación socioeconómica es la creciente explosión demográfica en los países de la región, que supera por amplio margen la capacidad de cada Estado de hacer una distribución equitativa de los recursos existentes para satisfacer las necesidades básicas de la población y sobretodo para la generación fuentes de trabajo. En Nicaragua el desempleo ha alcanzado un porcentaje de más de la mitad de la población económicamente activa.

La agudización de los problemas socioeconómicos en las naciones, trae como consecuencia la degradación de los niveles de vida y la creación de nuevos focos de tensión social que lógicamente afectan la paz, estabilidad y el desarrollo de las sociedades.

En cuanto a la actividad delictiva en Nicaragua, esta ha tenido un repunte considerable, sobretodo en los últimos cinco años. Las estadísticas anuales que se publican en el Anuario de la Policía Nacional son la mayor evidencia al respecto.

En 1998, se registraron 66,064 delitos reflejando un incremento de 3,436 delitos más que en 1997, significando un aumento del 5.5%, lo que es relativamente bajo.

Esto implica que la Policía Nacional atiende cada año mayor cantidad de delitos, de los cuales un buen número permanece en la total impunidad. En el año 1999 los delitos ocurridos sumaron 72,908, de los cuales 53,640 fueron esclarecidos. Esto significa que el 26.43% de los delitos quedaron sin esclarecerse⁸⁸.

Entre los principales delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos nicaraguenses pueden mencionarse:

A. Delitos contra la Propiedad: Hurto, Robo con Fuerzas y Violencia, Abigeato, Robo por Intimidación.

Los delitos **CONTRA LA PROPIEDAD** son los que representan mayor nivel de incidencia, de 1994 a 1997 se incrementó hasta un 59%, los de mayor frecuencia en este período fueron: hurtos, robos con fuerza, abigeato, y los robos con violencia, los delitos contra las personas están en segundo nivel de incidencia, ya que se incrementan hasta un 36%, ambos delitos representan por lo general cerca de un 85% de los delitos ocurridos a nivel nacional.

B. Delitos contra las Personas: Lesiones, Violaciones, Homicidios, Asesinatos.

Los delitos **CONTRA LAS PERSONAS** en 1998 representaron el 40.57% del total de delitos ocurridos, presentando un incremento del 8.3% en relación con el año 1997, lo que

⁸⁸ Anuario Estadístico de la Policía Nacional para 1999. Pág. 33.

significó 196 delitos más, el delito de lesiones ocupó el primer lugar con 15,820, seguido de violaciones con 1,253 hechos, siendo los delitos que causaron más impacto los homicidios, asesinatos, parricidios y las tentativas de homicidios, hechos sangrientos que han provocado conmoción social en la comunidad, dada la saña y atrocidad con que se han cometido.

Los hechos de mayor violencia afectan el desarrollo normal de la sociedad en general, el quebrantamiento de la ley y el orden así como otros tipos de conductas anexas al delito alteran la Seguridad Ciudadana, la paz social, la estabilidad política y económica de la nación.

En 1999, según el Informe Anual de la Policía Nacional, los índices de delincuencia aumentaron hasta un 10.6% en relación a 1998, podría decirse que se da un revés en cuanto a delitos, en ese año se reportó que el 40% fueron delitos contra las personas, al contrario que en los años pasados, los delitos en su mayoría, eran delitos contra la propiedad.

CONCLUSIONES

En menos de una década, las sociedades centroamericanas pasaron de un período caracterizado por el desgarramiento político, económico y social a un momento donde la paz y el progreso y el desarrollo humano sostenible son anhelos compartidos. Esto implica un proceso de reorientación de las formas mediante las cuales los gobiernos, las fuerzas sociales – representada por la sociedad civil organizada-, manejen sus propios asuntos de interés nacional, y los asuntos de interés común para Centroamérica como región emergente en el nuevo contexto global.

Si bien estos objetivos parecen congruentes y adecuados al nuevo contexto internacional, el Sistema de Integración no ha conseguido concretarse en la región como un conjunto cohesionado que aglutine a las naciones centroamericanas y en donde se implementen acciones concretas para el desarrollo y progreso colectivo de los países de la región. Es más, aún en las nuevas circunstancias políticas centroamericanas, en donde al menos en teoría se cuenta con sistemas de gobiernos democráticos producto del pluralismo político e ideológico a raíz de la desaparición de las dictaduras que hicieron tristemente célebre a Centroamérica en las décadas anteriores, en la actualidad nuestra región tiene más entidades e instancias de integración que en toda su historia de esfuerzos integracionistas desde 1821, cuando se conformó la Confederación Centroamericana.

La existencia de tal cantidad de entidades e instancias a la que hacemos referencia, nos pone a pensar si en realidad este conjunto de instancias se encuentran verdaderamente

coordinadas y unidas realizando esfuerzos concretos para integrar a las naciones e implementar a cabalidad los objetivos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa.

La única alternativa a nuestro juicio es replantear el actual proceso a fondo. Hasta hoy ha prevalecido un enfoque del proceso como el establecimiento y funcionamiento de un área de libre comercio, restándole fuerza a temas tan importantes como temas esenciales como la integración económica, la libre circulación de los ciudadanos centroamericanos por la región y el pasaporte único, entre otros. Por tanto, primero deben definirse y respetar los pasos a tomar no sólo en el ámbito económico, sino también en la esfera social y política para cada estado miembro.

Creemos que, Centroamérica debe definir los objetivos que guíen y rijan el proceso de integración. Hasta la fecha, este proceso integrador es un conjunto teorizado en tratados, de los cuales los miembros parte escogen cuales puntos desean cumplir y cuales no, restándole valor a los principios que impulsaron dicho proceso.

Las carencias identificadas en el proceso actual deben de subsanarse, de tal forma que el siguiente paso se base en una fundación de mayor solidez. Por ejemplo, urge consolidar las instituciones regionales tales como la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), integrada únicamente por tres de los cinco Estados de la región. Igualmente, fortalecer al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a través del otorgamiento de las potestades necesarias para marcar las pautas en la región en cuanto a legislación se refiere.

Si bien hemos mencionado lo que consideramos las debilidades del Proceso de Integración, debemos hacer referencia en nuestro trabajo investigativo, a otros aspectos en los cuales se han logrado avances sustanciales.

En el nuevo contexto internacional, al que hemos hecho referencia en párrafos anteriores también está marcado por un proceso de creciente interdependencia global que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida: la sociedad, la cultura, la economía, la política, etcétera, esto se aplica a nuestra realidad regional, donde ya la mayoría de los problemas, desafíos y amenazas que enfrentan nuestras sociedades no pueden ser manejados ni solucionados unilateralmente, o sólo dentro de las fronteras de un país.

Desafíos como el medio ambiente, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la seguridad, la democracia, el comercio, los derechos humanos, la salud, entre otros, no sólo son interdependientes entre sí, sino que acercan y vinculan a los gobiernos y sociedades de la región en una red de interdependencia cada vez más compleja y profunda.

Es en este entorno en donde se ubica, como ya mencionamos, el tema de la Seguridad como un punto medular del Proceso de Integración Centroamericano, ahora que la región centroamericana está libre de guerras civiles fratricidas, el tema de la seguridad se ha redimensionado, se ha replanteado el concepto de la misma y se ha pasado de la mera seguridad territorial de los Estados y sus nacionales garantizada a través de la vía militar a la seguridad que tiene a los individuos como eje central en el marco de una cultura de paz, en la cual prevalecen el respeto y la garantía de los derechos humanos, sociales,

económicos, políticos, sociales de las personas a través de la utilización de medios pacíficos para la solución de controversias. La seguridad Democrática se erige así como la Seguridad Humana enmarcada en los sistemas democráticos.

En esta coyuntura, los verdaderos enemigos de la seguridad democrática regional radican en problemas y males como la pobreza extrema, altos índices de mortalidad infantil, analfabetismo, intolerancia política, confrontación armada, violencia endémica, ausencia de una equidad económica, manipulación ideológica de las masas y destrucción, depredación, degradación y explotación ilegal de los recursos naturales y culturales. Incluido se encuentra el narcotráfico internacional, con su secuela de corrupción.

Esta amalgama de amenazas internas ha ocasionado una profundización de la Inseguridad Democrática, tanto desde el punto de vista interno como externo.

Surge así el Tratado Marco de Seguridad Democrática como un instrumento suscrito por las naciones del istmo centroamericano que reconociendo las particularidades de cada Estado, constituye un esfuerzo para la consolidación democrática a través de la normativización y regulación de aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados Centroamericanos.

Se propone un Modelo de Seguridad Democrática que se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la

promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas y la promoción de la inversión social.

Sin embargo, con esto no queremos decir que la Seguridad Democrática, tanto en Nicaragua como en Centroamérica sea totalmente ineficaz, por el hecho de no haber resuelto todos estos problemas o paralizado las amenazas a la Seguridad, por medio de sus leyes o de sus órganos nacionales y regionales.

Pensamos que Centroamérica, y en especial Nicaragua ha alcanzado valiosos logros, iniciando por la búsqueda de la paz, la consolidación de la Democracia, el inicio de programas encaminados al lograr un desarrollo sostenible, entre otros. A nivel Centroamericano se dio, por ejemplo, un paso muy importante en materia de Seguridad con la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el que era más bien un paso necesario en vista de los procesos de paz que se estaban gestando en Centroamérica producto de la despolarización del sistema internacional.

En el ámbito nacional, a pesar de que hay cierta desconfianza en las instituciones, se ha ido poco a poco iniciando la modernización del Ordenamiento Jurídico, básico para toda sociedad y sus instituciones. Sin embargo, el principal problema que atraviesa nuestro país es la falta de presupuesto a las instituciones encargadas de la Seguridad Democrática, especialmente a los de Seguridad Pública.

Los órganos de Seguridad, deben estar preparados y equipados para dar una respuesta oportuna, eficiente, con vocación de servicio y con preparación técnica. Dependiendo de la respuesta que estos órganos den, permitirían que el ciudadano tenga o no tenga confianza en las instituciones.

También hay que agregar que al establecer intercambios y colaboración entre las distintas organizaciones de la sociedad civil con el fin de implementar conjuntamente soluciones a problemas de las comunidades, es algo que debe tomarse muy en cuenta con el objetivo de prevenir actos o situaciones que atentan contra la Seguridad Democrática, sin menoscabar por supuesto que la responsabilidad primaria corresponde al Estado.

No obstante, la consolidación de una verdadera Seguridad Democrática en Nicaragua, a través de la búsqueda de la Paz, Estado de Derecho, Democracia, Derechos Humanos, es inútil si no se resuelve el problema fundamental de la violencia y la falta de seguridad. La no conclusión de lo anterior atenta contra cualquier inversión o ayuda en los aspectos económicos y productivos. Las perspectivas económicas de cada país están íntimamente ligadas a su situación político-social. Sin la solución de los principales problemas económicos, sociales y políticos, no habrá Paz, Democracia o Desarrollo Económico en nuestro país y en Centroamérica como región.

RECOMENDACIONES

Para finalizar hemos querido presentar algunas recomendaciones, que esperamos sirvan como indicativos de acción en el tema:

Fomentar una campaña educativa en pro de la Paz y la Seguridad: Mientras no tengamos una verdadera cultura de paz, entendiéndose ésta como la enseñanza de la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, no tendremos ni podremos hablar en términos de una real Seguridad Democrática.

Con relación a la corrupción en el marco institucional, es necesario hacer reformas en cuanto al control del patrimonio estatal. También es importante desarrollar campañas contra la corrupción. En la medida que se adopten decisiones firmes, se logrará aumentar la credibilidad ciudadana.

Diseñar y Promover la promulgación de normas complementarias que fortalezcan el marco legal en el tema de Seguridad Democrática como la tipificación de nuevos delitos, tales como el tráfico de influencia, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, entre otras.

Crear una Comisión mixta integrada tanto por representantes del Gobierno como de la Sociedad Civil dedicada al tema de Seguridad Ciudadana, con el objetivo primordial de llevar a cabo una revisión de la legislación existente para su modernización y adecuación a

los cambios democráticos ocurridos en los últimos años. Estas acciones deberán de estar acompañadas por su partida presupuestaria necesaria y correspondiente.

Fomentar y apoyar el Programa de Modernización de la Policía Nacional, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los oficiales de línea, los salarios, las condiciones de retiro, entre otros. Lo anterior con el fin único de generar un sentimiento de satisfacción que les impulse a ejecutar mejor sus funciones, elevando la percepción de seguridad ciudadana y disminuyendo el índice de criminalidad.

Emprender campañas de concientización sobre Seguridad Ciudadana y divulgarlas ampliamente en todos los medios de comunicación social.

Establecer programas que enriquezcan los planes de educación formal que realiza el Estado a través del sistema educativo en materia de divulgación de los principios éticos y morales.

Fortalecer las instituciones y la institucionalidad del país a través de la plena vigencia y ejercicio del Estado de Derecho, desarrollando un sistema democrático basado en la participación ciudadana establecida en el ordenamiento jurídico nicaragüense, necesaria para estimular la plena participación de la sociedad civil.

Compartir a nivel regional e internacional los mecanismos y experiencias que han permitido crear, mantener y fortalecer la participación de los pueblos la implementación y constante mejoramiento de las estrategias en los foros como el SICA, OEA y ONU.

Por último queremos agregar la recomendación que a nuestro juicio constituye el actuar más importante de todos: la voluntad política, ya sea a nivel centroamericano como a nivel interno. Es vital que los tomadores de decisiones reafirmen la voluntad de comprometerse con el tema de seguridad democrática en todos sus ámbitos teóricos, con la firme decisión de implementar programas viables de ejecución en la realidad.

Por inverosímil que parezca, la voluntad política constituye mayor freno que aletarga la eficaz implementación del modelo, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y éste hecho es absorbido por los países cooperantes, por lo que nuestra falta de voluntad a su vez merma directamente la voluntad de los amigos cooperantes.

Reiteramos la visión optimista del proceso integrador, y la confianza de que a largo plazo nuestra región sea ejemplo de modelos de seguridad democrática.

BIBLIOGRAFIA

1. Aguilar Urbina, Francisco. Desmovilización, Desmilitarización y Democratización en Centroamérica. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Primera Edición. Costa Rica. 1994.
2. Buitrago Buitrago, Edgardo. Seguridad Democrática y Derechos Humanos en Centroamérica. Primera Edición. Costa Rica. 1998.
3. Cuadra Lira, Elvira; Pérez Baltodano, Andrés y Saldomando, Ángel. Orden Social y Gobernabilidad en Nicaragua 1990-1996. Centro Editorial de la Mujer. 1990.
4. Gadea Castillo, Jedry. Órgano Policial y Derechos Humanos en Nicaragua. 1997.
5. Gaviria, César. Senderos hacia el nuevo milenio. El Camino Recorrido: 1994-1999. Washington D.C., OEA. Junio 1999.
6. Instituto Nicaragüense de Estudios Socio Políticos (INESP). Parlamento Centroamericano, Managua. 1996.
7. Leticia Salomón, Proyecto de Investigación Gobernabilidad Democrática y la Seguridad Ciudadana en Centroamérica, CRIES, Mayo 2001.
8. Morales, Abelardo. Oficios de Paz y Post Guerra en Centroamérica. FLACSO. Costa Rica. 1995.
9. Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 21^a, Buenos Aires. Heliasta, 1994.
10. Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional. Editorial Tecnos.
11. Pérez Luño, Antonio Enrique. La Seguridad Jurídica. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 1994, Pág. 11 (Segunda Edición revisada y puesta al día).

12. Perina, Rubén. El Régimen Democrático Interamericano: Papel de la OEA. Nicaragua. 1999.
13. Serbin, Andrés y Ferreyra, Diego. Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana en Centroamérica: El Caso Nicaragua. CRIES. Imprimatur. 2000.
14. Valle González, Alfonso. Derecho Comunitario: El Sistema de Integración Centroamericana. Segunda Edición. Impresiones Toruño. 2001.

PUBLICACIONES

1. Anuario Estadístico de la Policía Nacional. 1999.
2. CEPAL: Estrategias y Opciones para el Fortalecimiento y Racionalización de la Institucionalidad Centroamericana. 1997.
3. Informe de la Comisión Nacional de Desminado. Ministerio de Defensa. 2001.
4. Informe del Instituto de Investigaciones y Asistencia Legislativa.
5. *Informe sobre el desarrollo humano*. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). México: Fondo de Cultura Económica. 1994.
6. Memoria Anual del Gobierno de la República de Nicaragua. 2000.
7. Memoria Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nicaragua. 1999.

NORMATIVA NICARAGÜENSE

1. Constitución Política de la República de Nicaragua. 1996.
2. Gaceta, Diario Oficial no. 162, Ley No. 228: Ley de la Policía Nacional. Managua, 28 de Agosto de 1996.
3. Gaceta, Diario Oficial no. 241, Decreto No. 64-90: Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación. Managua, 04 de Diciembre de 1990.

TRATADOS INTERNACIONALES

1. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Americanos. Panamá. Diciembre, 1992.
2. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. San Pedro Sula. Diciembre, 1995.

DIRECCIONES DE INTERNET

1. www.oas.org/CSH/spanish/c&ttratadocentroamerica.htm
2. www.grupoese.com.ni/2001/bn/02/23/rv2MN0223.htm
3. www.us.net/cip/dialogue/9808es07.htm
4. www.cries.org
5. www.cancilleria.gob.ni
6. www.elnuevodiario.com.ni/archivo/2001/marzo/31-marzo-2001/
7. www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-9/padipm.htm
8. www.elnuevodiario.com.ni/archivo/1999/febrero/04-febrero-1999/ estasemana
9. www.arias.or.cr/fundarias/cpr/armasliv/deleon.htm
10. www.sicanet.org.sv/cumbres/contenido.html
11. www.rree.gob.sv/sitio/sitio.nsf/a7a0a69e0e34f6f806256621005a2427/e87fd2e30c8b1106256a23

ENTREVISTAS

1. Maradiaga, Félix. Director General de Defensa Civil. Ministerio de Defensa. 25 de Junio de 2001.
2. Rivera, Juan Capitán. Encargado ad interim de la Secretaría Ejecutiva. Policía Nacional. 06 de Junio de 2001.
3. Vásquez González, Miriam. Subdirectora de Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. 18 de Junio de 2001.

ANEXOS

TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICA

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en adelante denominados 'Las Partes',

CONSIDERANDO

Que el objetivo fundamental del Sistema de la integración Centroamericana y de la Alianza para el Desarrollo Sostenible es la realización de la integración de Centroamérica para consolidarla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo;

Que entre los propósitos del Sistema de la Integración Centroamericana, establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, se encuentra la obtención del desarrollo sostenible de Centroamérica, que presupone concretar un Nuevo Modelo de Seguridad Regional Único, Integral e Indivisible, inspirado en los logros alcanzados en su intenso proceso de pacificación e integración;

Que los países Centroamericanos han reafirmado su compromiso con la democracia, basada en el Estado de Derecho y en la garantía de las libertades fundamentales, la libertad económica, la justicia social; afianzando una comunidad de valores democráticos entre los Estados, vinculados por lazos históricos, geográficos, de hermandad y de cooperación;

Que el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los Derechos Humanos y garantice la seguridad jurídica, y que asegure las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región;

Que aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes;

Que la coincidencia en los objetivos de consolidación democrática no es incompatible con el reconocimiento de las particularidades de cada país de la región, lo cual incluye la situación especial de aquellos que han decidido la eliminación o permanencia constitucional de sus respectivos ejércitos;

Que durante los últimos años, a medida que se ha consolidado la paz y la democracia, los países Centroamericanos han realizado importantes avances en la consecución de estos objetivos mediante la desmovilización y reducción de efectivos y presupuestos militares, la separación de las funciones policíacas de aquellas propias de la defensa nacional, la eliminación del servicio militar forzoso o, en su caso, la adopción de uno, impunidad, el terrorismo y la narcoactividad, así como la creciente profesionalización de las instituciones de seguridad pública, entre otros aspectos;

Que el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas. Asimismo el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática orientará cada vez más, sus recursos a la inversión social.

Que es indispensable para la realización de los objetivos y principios enunciados, la continuación de los esfuerzos mencionados y la adopción de un instrumento jurídico marco que permita desarrollar en forma integral todos los aspectos contenidos en el Nuevo Modelo de Seguridad, Democrática que garanticen la vigencia de los logros alcanzados;

Convienen en suscribir el presente Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, como instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa.

TITULO I: ESTADO DE DERECHO

Artículo 1. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática tiene su razón de ser en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo Sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad.

Artículo 2. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios relacionados con este Título:

- a) el Estado de Derecho, que comprende la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas;
- b) el fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones democráticas en cada uno de los Estados, para su consolidación mutua dentro de su propia esfera de acción y responsabilidad, por medio de un proceso continuo y sostenido de consolidación y fortalecimiento del poder civil, la limitación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad pública a sus competencias constitucionales y la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los valores democráticos que les son comunes;
- c) el principio de la subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, surgidas de procesos electorales, libres, honestos y pluralistas; y

d) el mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración mutua sobre los aspectos de la seguridad en su sentido integral a fin de garantizar el carácter irreversible de la democracia en la región.

Artículo 3. Para garantizar la seguridad del individuo, las Partes se comprometen a que toda acción realizada por las autoridades públicas, se enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico y el pleno respeto a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

Artículo 4. Cada una de Las Partes establecerá y mantendrá en todo momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, por las autoridades civiles constitucionalmente establecidas; velará porque dichas autoridades cumplan con sus responsabilidades en ese marco y definirá claramente la doctrina, misiones, y funciones de esas fuerzas y su obligación de actuar únicamente en ese contexto.

Artículo 5. La corrupción, pública o privada, constituye una amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes y de los Estados de la región centroamericana. Las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos para su erradicación en todos los niveles y modalidades.

En este sentido, la reunión de los entes contralores del Estado de cada una de Las Partes, asesorará a la Comisión de Seguridad en el diseño, establecimiento e instrumentación de programas y proyectos regionales de modernización y armonización legislativa, investigación, educación y prevención de la corrupción.

Artículo 6. Las Partes realizarán todos los esfuerzos para erradicar la impunidad. La Comisión de Seguridad establecerá contactos con las instituciones y autoridades relacionadas con la materia, a fin de contribuir a la elaboración de los programas conducentes a la armonización y modernización de los sistemas de justicia penal centroamericanos.

Artículo 7. Las Partes, reconocen la importancia de que sus autoridades públicas, fuerzas militares y de seguridad pública, orienten su actuación bajo los principios y recomendaciones contenidas en las siguientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

40/34 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

43/173 Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.

45/113 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

3452 (XXX) Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otras Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes.

34/169 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

Asimismo, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Artículo 8. Para el fortalecimiento de la democracia, Las Partes reafirman su obligación de abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o de cualquier otra índole, a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas, que atenten contra la unidad y el orden del Estado o propugnen el derrocamiento o la desestabilización del Gobierno democráticamente electo de otra de Las Partes.

Asimismo, reiteran su obligación de impedir el uso de su territorio para organizar o realizar acciones armadas, actos de sabotaje, secuestros o actividades delictivas en el territorio de otro Estado.

Artículo 9. Las Partes reconocen la importancia del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, firmado en Guatemala, República de Guatemala, el 29 de octubre de 1993 y la naturaleza especial de las disposiciones constitucionales y los tratados y convenciones que consagran el derecho de asilo y refugio.

TITULO II: SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

Artículo 10. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios en lo relacionado con el presente Título:

- a) la seguridad democrática es integral e indivisible. La solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá, por tanto, a una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible de Centroamérica, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas;
- b) la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus órdenes;
- c) la ayuda solidaria y humanitaria frente a las emergencias, amenazas y desastres naturales; y,
- d) la consideración de la pobreza y de la extrema pobreza, como amenazas a la seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas;

Artículo 11. Con el propósito de contribuir a la consolidación de Centroamérica como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, se establecen los siguientes objetivos en esta materia garantizar a todos los habitantes las condiciones de seguridad que les permitan participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible, mediante el impulso de una economía de mercado que posibilite el crecimiento económico con equidad; establecer o fortalecer los mecanismos de coordinación operativa de las instituciones competentes, para hacer más efectiva la lucha, a nivel nacional y regional, contra la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad democrática que requieran el uso de fuerzas militares, de seguridad o de policía civil, tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen organizado; fortalecer la cooperación, coordinación, armonización y convergencia de las políticas de seguridad de las personas, así como la cooperación fronteriza y la profundización de los vínculos sociales y culturales entre sus poblaciones; y, promover la cooperación entre los Estados para garantizar la seguridad jurídica de los bienes de las personas.

Artículo 12. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, tendrá, a su cargo la organización y la administración de un índice Centroamericano de Seguridad e informará periódicamente sobre su estado a los respectivos gobiernos, por medio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

Artículo 13. Las Partes se comprometen a:

- a) contribuir a impulsar la promoción regional de todos los derechos humanos y de la cultura de paz, democracia e integración entre los habitantes de Centroamérica;

- b) promover la contribución de los medios de comunicación de Las Partes para los fines contemplados en el literal anterior; y,
- c) impulsar proyectos integracionistas de desarrollo fronterizo, en el espíritu de la solidaridad centroamericana y de la participación democrática de los habitantes.

Artículo 14. Las Partes se comprometen a promover la profesionalización y modernización permanente de sus cuerpos de seguridad pública con el objeto de propiciar la más amplia y eficaz lucha contra la actividad delictiva y la protección de los derechos consagrados en la legislación interna de cada país.

Asimismo, se comprometen a poner en funcionamiento el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales.

Artículo 15. Las Partes reconocen que la pobreza y la extrema pobreza lesionan la dignidad humana y constituyen una amenaza a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas y, en este sentido, se comprometen a dar prioridad a los esfuerzos por superar sus causas estructurales y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones.

Artículo 16. La adecuación de los presupuestos nacionales, de acuerdo a la realidad de cada país, estará orientada al beneficio del sector social en salud, educación y en aquellos otros ámbitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida del ser humano, así como de las clases más desprotegidas de la sociedad.

Artículo 17. Las Partes promoverán la cooperación para la erradicación de la narcoactividad, el comercio ilícito de los precursores y delitos conexos, de conformidad con los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean Parte o aquellos que puedan suscribirse sobre esta materia, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana. Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Con este propósito, establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia.

Artículo 18. Las Partes se comprometen a prevenir y combatir, todo tipo de actividades delictivas con repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, e impedir por todos los medios dentro de su territorio, la planificación, preparación y realización de las mismas.

Con tal propósito, fortalecerán la cooperación y propiciarán el intercambio de información entre las dependencias responsables en materia migratoria, policial y demás autoridades competentes.

Artículo 19. Las Partes procurarán en caso que no lo hubieren hecho, iniciar los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los siguientes convenios internacionales:

- a) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, de 1963;
 - b) Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, de 1971;
 - c) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, de 1971;
 - d) Convención sobre la Represión y Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973;
- y,
- e) Convención internacional contra la Toma de Rehenes, de 1979.

Artículo 20. Las Partes se comprometen a tomar medidas para combatir la acción de bandas organizadas, que se dedican al tráfico de personas con trascendencia internacional en la región, a fin de encontrar soluciones integrales a este problema.

Artículo 21. Las Partes se comprometen a desarrollar todos los esfuerzos necesarios y promover la cooperación para garantizar la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural centroamericano, de conformidad con los acuerdos internacionales y regionales de que sean Parte o aquellos que puedan suscribirse sobre estas materias, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Con este propósito establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia.

Artículo 22. Las Partes reconocen que para una efectiva cooperación en estas áreas, es imprescindible, en caso de que no hubiesen hecho, iniciar los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los convenios internacionales y regionales sobre la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural.

Artículo 23. Las Partes reafirman su voluntad de reinsertar apropiadamente a su población refugiada, desplazada y desarraigada que retorne voluntaria y pacíficamente a sus respectivos territorios, para que pueda disfrutar todos sus derechos y mejorar su calidad de vida en igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la situación interna de cada Estado.

Artículo 24. Las Partes se comprometen a adoptar posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales en el exterior, frente a medidas tendientes a la repatriación o expulsión de sus connacionales emigrantes.

Artículo 25. La Comisión de Seguridad, en base a las propuestas que reciba de los órganos regionales competentes y en coordinación con éstos, formulará y trasladará a los Consejos sectoriales o intersectoriales respectivos, recomendaciones sobre las siguientes materias, entre otras:

- a) reforzamiento de los controles internos en las respectivas fronteras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y mar territorial que permitan la detección del tráfico ilegal de bienes culturales y faciliten su recuperación; del comercio ilícito de madera, de especies de flora y fauna, del tráfico y manipulación de desechos tóxicos y sustancias peligrosas; de la narcoactividad y delitos conexos, en particular el comercio ilícito de precursores, lavado de dinero y otros activos; el robo de vehículos, naves y aeronaves, sin perjuicio de aquellos mecanismos regionales que se acuerden para la prevención y sanción de dichos delitos;
- b) creación de figuras delictivas y la armonización y modernización de la legislación sobre la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural y demás materias que así lo requieran, con miras a lograr un estándar común de seguridad;
- c) celebración de acuerdos sobre las materias comprendidas en este título; y,
- d) propiciar la cooperación y coordinación entre los órganos jurisdiccionales y los ministerios públicos de Las Partes con miras a agilizar sus acciones encaminadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia.

ARTICULO III: SEGURIDAD REGIONAL

Artículo 26. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios, en lo relacionado con el presente título:

- a) la igualdad soberana entre los Estados y la seguridad jurídica en sus relaciones;

- b) la solución pacífica de las controversias, renunciando a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver sus diferencias. Los Estados se abstendrán de cualquier acción que pueda agravar los conflictos u obstaculizar el arreglo de eventuales controversias por medios pacíficos;
- c) la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado de la región signatario del presente Tratado;
- d) la autodeterminación de Centroamérica, por la cual los Estados signatarios del presente Tratado, definen su propia estrategia regional de desarrollo sostenible y de concertación internacional;
- e) la solidaridad y seguridad de los pueblos y gobiernos centroamericanos en la prevención y solución conjunta de los problemas comunes en esta materia;
- f) la prohibición del uso del territorio para agredir a otros Estados, como refugio de fuerzas irregulares o para el establecimiento del crimen organizado;
- g) la seguridad democrática de cada uno de los Estados signatarios del presente Tratado está estrechamente vinculada a la seguridad regional. Por tanto, ningún Estado fortalecerá su propia seguridad menoscabando la seguridad de los demás;
- h) la defensa colectiva y solidaria en caso de agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de un estado centroamericano, de conformidad con las normas constitucionales respectivas y los tratados internacionales vigentes;
- i) la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados en el marco de la integración centroamericana; y,

el respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Artículo 27. Son objetivos complementarios del Modelo en esta materia:

- a) establecer un mecanismo preventivo, de alerta temprana, ante las amenazas a la seguridad en cualquiera de sus categorías y un programa permanente de medidas de fomento de la confianza entre los Estados de la región centroamericana;
- b) continuar los esfuerzos para el establecimiento de un balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de acuerdo con la situación interna y externa de cada Estado Parte, las condiciones de Centroamérica y lo que decidan las autoridades civiles de los Gobiernos democráticamente electos de Las Partes;
- c) establecer un Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación de la Seguridad;
- d) establecer o fortalecer los mecanismos centroamericanos de solución pacífica de las controversias, de conformidad con lo previsto en el presente Tratado;
- e) coordinar regionalmente las formas de cooperación con los esfuerzos de carácter internacional en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales; y,
- f) promover la seguridad jurídica de las fronteras de los Estados signatarios del presente Tratado, por medio de las delimitaciones, demarcaciones y solución de diferendos territoriales pendientes, en los casos que corresponda, y garantizar la defensa común del patrimonio territorial, cultural y ecológico de Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos del Derecho Internacional.

Artículo 28. Sin perjuicio del Programa Anual de actividades de Fomento de la Confianza, que deberá preparar y ejecutar la Comisión de Seguridad, Las Partes, de conformidad con los tratados de que sean Parte, se comprometen a:

- a) notificar por escrito a las demás Partes, por la vía diplomática, con no menos de treinta días de antelación, cualquier maniobra, desplazamiento o ejercicio militar, terrestre, aéreo o naval planificado, que se realice bajo las condiciones que determine la Comisión de Seguridad en cuanto a: número de efectivos, ubicación respecto a la frontera, naturaleza y cantidad de equipo que se utilizará, entre otros; y,
- b) invitar a las otras Partes para que presencien el desarrollo de las actividades antes mencionadas. Las Partes reconocerán a dichos observadores las inmunidades de jurisdicción civil y penal

acordadas para los agentes diplomáticos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, durante el tiempo que dure su misión y para aquellos actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 29. Si se tratare de operaciones militares imprevistas, frente a amenazas inmediatas a la seguridad, el Estado que las lleve a cabo deberá informar de tales actividades tan pronto como le sea posible, dentro de las condiciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 30. Las Partes se obligan a combatir el tráfico ilegal de armas, material y equipos militares, así como de armas ligeras de protección personal. Con este propósito se comprometen asimismo, a establecer en el ámbito de sus ordenamientos jurídicos nacionales, regulaciones específicas, modernas y armonizadas.

Artículo 31. Cuando una situación de tráfico ilegal de armas no pueda ser resuelta en el marco de los procedimientos jurídicos nacionales, el o los Estados involucrados procurarán resolver el problema por medio de la comunicación y la cooperación entre sus autoridades competentes.

Artículo 32. Las Partes se comprometen a continuar los esfuerzos para la limitación y control de armamentos, por medio de un balance razonable de fuerzas, de acuerdo a la situación interna y externa de cada Estado.

Artículo 33. El balance razonable y la correspondiente adecuación de las fuerzas militares y presupuestos, tomarán en cuenta lo establecido en la Constitución de cada una de Las Partes, y sus necesidades de defensa, teniendo como base factores tales como condiciones geográficas y fronteras relevantes, y la presencia de fuerza o asesores militares extranjeros, entre otros.

Artículo 34. Las Partes se comprometen a abstenerse de adquirir, mantener o permitir el estacionamiento o tránsito en sus territorios de armas de destrucción masiva e indiscriminada, incluyendo las armas químicas, radiológicas y bacteriológicas. Las Partes se obligan, igualmente, a no construir o permitir la edificación en sus respectivos territorios, instalaciones que sirvan para fabricar o almacenar este tipo de armas.

Las Partes reconocen la vigencia del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, como Estados adherentes al Protocolo del Tratado, el cual garantiza en todo tiempo el tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones por el Canal de Panamá.

Artículo 35. Las Partes a, fin de tener un efectivo control sobre los armamentos, se comprometen a lo siguiente:

a) presentar, en el seno de la Comisión de Seguridad, con la periodicidad que establezca el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, un informe sobre la composición de sus instituciones armadas y de seguridad pública, su organización, instalaciones, armamentos, materiales y equipo, dejando a salvo aquellos aspectos que por su naturaleza se encuentren reservados en la Constitución de cada Estado;

El informe con carácter de secreto de Estado y regional será elaborado de conformidad con el formato y contenido de inventario que acuerde la Comisión de Seguridad e incluirá todos los datos navales, aéreos, terrestres y de seguridad pública, necesarios para que la información proporcionada sea completa, transparente y verificable, única y exclusivamente por las instancias del modelo establecido en el Artículo 47 del presente Tratado o por quienes éstas designen;

b) proporcionar información, en el seno de la Comisión de Seguridad, sobre sus respectivos gastos militares y de seguridad pública aprobados en sus presupuestos para el año fiscal en ejercicio,

tomando como marco de referencia para ello el "Instrumento para la Presentación Internacional Normalizada de Informes sobre Gastos Militares" adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 1990, de conformidad con lo establecido en el literal k) del Artículo 52 del presente Tratado; y,

c) organizar el sistema de registro centroamericano de los armamentos y sus transferencias, de acuerdo con la propuesta que elabore la Comisión de Seguridad.

Artículo 36. Respecto a toda la información proporcionada conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, cada Parte podrá solicitar, en el seno de la Comisión de Seguridad, a cualquier otra de Las Partes, las aclaraciones que estime necesarias, durante el curso de los sesenta días posteriores a su entrega. Las Partes se obligan a hacer las aclaraciones pertinentes dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de solicitud de aclaración.

Artículo 37. La Comisión de Seguridad organizará un registro uniforme para el armamento, explosivos y equipo que es de uso exclusivo de las fuerzas armadas o de seguridad pública; este registro deberá estar actualizado con información que las Partes se comprometen a proveer constantemente.

Artículo 38. Las Partes se comprometen a presentar, en forma recíproca y de conformidad con los Tratados de que sean Parte, en el seno de la Comisión de Seguridad, en el primer semestre de cada año, un informe sobre asesores y personal militar extranjero y otros elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad pública en su territorio. Asimismo, llevará un registro de dichos asesores que desempeñen funciones de carácter técnico relacionadas con entrenamiento o con la instalación y mantenimiento de equipo militar, copia del cual proveerá a la Comisión de Seguridad.

El registro se llevará de conformidad con la reglamentación que acuerde la Comisión de Seguridad, la que podrá, además, acordar límites razonables en el número de asesores en todas sus categorías y especialidades militares y de seguridad pública, tomando en cuenta las realidades y necesidades internas de cada Parte.

Artículo 39. Si se produjese un incidente de índole militar entre dos o más de Las Partes, los Ministros de Relaciones Exteriores deberán ponerse en contacto de inmediato para analizar la situación, evitar el aumento de la tensión, cesar cualquier actividad militar y prevenir nuevos incidentes.

Artículo 40. En caso de que los canales directos de comunicación no fuesen suficientes para alcanzar los objetivos descritos en el artículo anterior, cualquiera de Las Partes podrá solicitar la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguridad o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, si así lo estimase necesario. En este último caso, la presidencia del Consejo de Ministros hará las consultas necesarias con los estados miembros y podrá convocar previamente a la Comisión de Seguridad para obtener sus recomendaciones.

Artículo 41. La Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, tomarán sus decisiones por consenso, en todos los asuntos relativos a la paz y la seguridad de la región.

Artículo 42. Cualquier agresión armada, o amenaza de agresión armada, de un estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia de un estado centroamericano, será considerada como un acto de agresión contra los demás estados centroamericanos.

En tal caso, los países centroamericanos, a petición del estado agredido, actuarán conjuntamente y de manera solidaria, para asegurar en los foros y organismos internacionales la defensa jurídica y política, por la vía diplomática, del estado centroamericano agredido.

Artículo 43. En caso de agresión armada, agotadas las instancias de conciliación y solución pacífica de los conflictos, si fuese posible, los países centroamericanos, a petición del estado agredido, asegurarán para el pronto restablecimiento de la paz, la defensa colectiva y solidaria frente al agresor, mediante las medidas y procedimientos que se acuerden en el seno del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de conformidad con las respectivas disposiciones constitucionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los tratados vigentes de que sean Parte.

El Consejo de Ministros establecerá una organización operativa ad hoc encargada de planificar y coordinar el cumplimiento de los compromisos contenidos en este Artículo, así como para el apoyo operativo en materia de cooperación solidaria frente a emergencias, amenazas y desastres.

Artículo 44. En la eventualidad de algún conflicto armado externo y para preservar las garantías y los derechos de la población, Las Partes se comprometen a cumplir plenamente con las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos sobre arreglo pacífico de controversias, Las Partes reafirman su obligación de resolver cualquier diferencia que pueda poner en peligro la paz y la seguridad de la región, por la vía de la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o cualquier otro medio pacífico de solución de controversias.

Artículo 46. Las Partes reafirman las obligaciones asumidas en el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina, del 14 de febrero de 1967, así como la importancia de iniciar en caso de que no lo hubiesen hecho, los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los siguientes convenios internacionales:

- a) Protocolo Para la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfíxiantes Tóxicos y Similares, de 1925; y
- b) Convenio sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas, Tóxicas y Sobre su Destrucción, de 1972;

TITULO IV: ORGANIZACION E INSTITUCIONALIDAD

Artículo 47. Son instancias del Modelo de Seguridad Democrática en Centroamérica las siguientes:

- a) la Reunión de Presidentes;
- b) el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; y,
- c) la Comisión de Seguridad.

Los Consejos sectoriales e intersectoriales establecerán las coordinaciones necesarias con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, al que informarán de todos sus acuerdos y resoluciones en materia de seguridad.

En ese contexto, los Ministros de Defensa y de Seguridad o sus equivalentes, asesorarán y asistirán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en los asuntos relativos a la ejecución del mismo, en las áreas de su competencia.

El Comité Consultivo creado por el Protocolo de Tegucigalpa podrá exponer, por conducto de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, sus opiniones a la Comisión de Seguridad sobre las materias concernientes a la seguridad de las personas y sus bienes previstas en este Tratado.

Artículo 48. La Reunión de Presidentes es la instancia suprema de este modelo y a ella corresponde conocer los asuntos de seguridad, regional e internacional, que requieran de sus decisiones de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa.

Artículo 49. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia competente, en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, en su condición de órgano principal de coordinación del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 50. La Comisión de Seguridad es una instancia subsidiaria de ejecución coordinación, evaluación y seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 51. La Comisión de Seguridad está compuesta por las delegaciones de los estados centroamericanos integradas por los Viceministros de Relaciones Exteriores y Viceministros o autoridades competentes en los ramos de Defensa y Seguridad Pública. Los Viceministros de Relaciones Exteriores presidirán las delegaciones de cada estado.

Artículo 52. Son responsabilidades o funciones de la Comisión de Seguridad:

- ejecutar las decisiones que, en materia de seguridad, le encomiende la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y aquellas que ella misma adopte en el marco de sus competencias;
- evaluar el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos en materia de seguridad;
- examinar los problemas de seguridad existentes en la región que requieran de una acción concertada y elaborar propuestas para enfrentarlos de manera efectiva. Dichos estudios y recomendaciones serán elevados al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación;
- establecer la comunicación y las coordinaciones necesarias, por medio de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, con los Organismos, Instituciones y Secretarías de los subsistemas de integración regional, cuya colaboración se estime necesaria para enfrentar de manera integral los problemas de la seguridad;
- fortalecer los mecanismos de coordinación operativa en las áreas de defensa, seguridad pública y cooperación humanitaria frente a las emergencias, amenazas y desastres naturales;
- elaborar propuestas de coordinación y apoyo regional con los organismos y cuerpos internacionales dedicados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la lucha contra las amenazas a la seguridad de las personas y sus bienes, las que serán elevadas previamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación;
- organizar el Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad;
- elaborar un programa anual pertinente de actividades de fomento de la confianza, que involucren la participación de las fuerzas armadas y de seguridad pública de la región, conjuntamente con la sociedad civil centroamericana;
- elaborar el régimen de los informes periódicos y el sistema de registro de los armamentos y sus transferencias, de manera que la información proporcionada sea completa, transparente y fácilmente verificable, y hacer propuestas para el establecimiento gradual de un balance razonable de fuerzas en la región;

examinar la información proporcionada por Las Partes sobre asesores y personal militar extranjero y otros elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad pública en su territorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38 del presente Tratado;

examinar la información proporcionada por los gobiernos sobre sus respectivos presupuestos militares y de seguridad para el año fiscal en ejercicio y elaborar propuestas conjuntas para la eventual adecuación de los presupuestos futuros, tomando en cuenta la situación interna de cada estado;

establecer contacto con las organizaciones centroamericanas que agrupan a otros Poderes u Organos del Estado, a fin de acordar programas de armonización y modernización legislativa sobre la materia y programas de capacitación de funcionarios judiciales y policiales;

elaborar su reglamento interno de funcionamiento, el que se hará del conocimiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana;

proporcionar todas las medidas de protección necesarias para la seguridad y confidencialidad de la información, que se reciba de los diferentes estados centroamericanos; y

velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y cumplir con las demás funciones que el mismo le confiere.

Artículo 53. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Seguridad podrá organizar sus trabajos en subcomisiones sectoriales, las cuales podrán ser de defensa, de seguridad pública, jurídica o intersectoriales.

Artículo 54. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana brindará los servicios de secretaría técnica administrativa, en las reuniones de la Comisión de Seguridad y de las subcomisiones.

Artículo 55. La Comisión de Seguridad se reunirá ordinariamente con la periodicidad que establezcan sus miembros y extraordinariamente, en cumplimiento de una decisión de la Reunión de Presidentes o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o cuando así lo solicite uno o varios de sus miembros, para examinar un asunto con carácter de urgencia. El quórum requerido para las sesiones será el de la presencia de todos sus miembros.

Artículo 56. La falta de consenso en la adopción de una decisión, facultará a la presidencia de la Comisión de Seguridad, a elevar el tema al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su resolución.

Artículo 57. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en su calidad de Organo Principal de Coordinación del Sistema de la Integración Centroamericana, será el responsable de adoptar o recomendar a la Reunión de Presidentes las medidas preventivas, de manejo de crisis o de solución de conflictos y controversias que estime pertinentes frente a las situaciones de cualquier índole que, a Juicio de los gobiernos o de los Organos Competentes del Sistema de la Integración Centroamericana, constituyan una potencial amenaza a la seguridad de los estados y de sus habitantes.

Artículo 58. Los Gobiernos, por medio de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, someterán al examen de las situaciones previstas en el artículo anterior a la Comisión de Seguridad. Podrán asimismo, acudir directamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Los Organos, Instituciones, y Secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana, por medio de su Secretaria General, podrán llamar a la atención del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre cualquier situación prevista en el Artículo anterior.

Artículo 59. Sin perjuicio del Programa Anual de Actividades de Fomento de la Confianza, que deberá preparar y ejecutar la Comisión de Seguridad, Las Partes se comprometen a: establecer y fortalecer mecanismos de comunicación directa y expedita entre las autoridades fronterizas; y, propiciar intercambios de experiencias e información militar y de seguridad pública, consultas y visitas periódicas entre autoridades de instituciones de defensa, seguridad pública y similares, así como el otorgamiento recíproco de becas de estudio en sus respectivas academias militares y de policía.

Artículo 60. El Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación Para la Seguridad estará conformado por:

- a) el Índice Centroamericano de Seguridad, organizado y administrado por la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana con el apoyo de las Secretarías e Instituciones de la integración centroamericana y de los organismos internacionales que se estime pertinentes; y,
- b) el mecanismo Permanente de comunicación que Las Partes se comprometen a crear y poner en funcionamiento, para facilitar el contacto seguro, eficaz y rápido, entre las respectivas autoridades civiles, militares y de seguridad pública competentes, entre sí y con la Comisión de Seguridad, con el objeto de prevenir incidentes, atender alertas y facilitar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos en el presente Tratado.

Artículo 61. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores velará por la aplicación de las disposiciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Tratado.

Para estos propósitos la Comisión de Seguridad, deberá informar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en particular sobre los siguientes aspectos:

- el cumplimiento por Las Partes de los actos materiales previstos en este Tratado, tal como la entrega oportuna los informes requeridos;
- el cumplimiento por Las Partes con los límites máximos de armamentos que lleguen a establecerse, tomando en cuenta la situación interna y externa de cada una de Las Partes y, las condiciones imperantes en la región;
- el cumplimiento por Las Partes, de la obligación de no introducción de armas prohibidas en el Artículo 34 del presente Tratado o que lleguen en un futuro a prohibirse;
- el cumplimiento por Las Partes de las obligaciones en materia de notificación de actividades o maniobras militares, así como, otras notificaciones, contenidas en este Tratado; y,
- el resultado de las investigaciones que por propia iniciativa o por mandato del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, lleve a cabo en relación denuncias de violación de las obligaciones contenidas en el Presente Tratado.

Artículo 62. Las investigaciones serán llevadas a cabo por la Comisión de Seguridad o por el cuerpo colegiado de expertos ad hoc que ésta designe y estime más apropiado para el caso. Serán realizadas mediante inspecciones in situ, la recopilación de datos, la realización de pruebas técnicas de laboratorio y cualquier otro procedimiento que se estime necesario para la objetiva verificación de los hechos.

Artículo 63. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores será el órgano encargado de coordinar los esfuerzos de la región en su conjunto, con las iniciativas en la lucha contra las amenazas a la seguridad democrática en el continente y otras partes del mundo, y en este sentido, será el órgano responsable de preparar posiciones y suscribir los acuerdos o convenios de cooperación con las instituciones y cuerpos encargados de mantener la paz y la seguridad

internacionales, dejando a salvo los compromisos preestablecidos de cada Estado Parte con la comunidad internacional.

TITULO V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática es parte del Sistema de la Integración Centroamericana y su contenido complementa las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, a las cuales está subordinado el presente Tratado.

Artículo 65. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores informará a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos, todos los arreglos o decisiones que tengan que ver con la paz y la seguridad regional y cuyo conocimiento consideren de relevancia para los órganos encargados de la seguridad a nivel hemisférico y mundial.

Artículo 66. Ninguna disposición del presente Tratado podrá ser interpretada de manera contraria a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el Protocolo de Tegucigalpa.

Artículo 67. Toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente Tratado será elevada al conocimiento de la Reunión de Presidentes y, en caso de no resolverse, se utilizarán los medios de solución pacífica de las controversias estipulados en el Artículo 45, y en su caso, serán sometidas al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia.

Artículo 68. El presente Tratado admite reservas.

Artículo 69. El presente Tratado será ratificado por cada Estado signatario, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. El presente Tratado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 70. El presente Tratado tendrá una duración indefinida y entrará en vigencia una semana después de ser depositado el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros, estados depositantes, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación para los demás estados.

Artículo 71. A los cinco años de haber entrado en vigor el presente Tratado, y antes o después, a solicitud de dos Estados Parte, la Comisión de Seguridad convocará una reunión de todas Las Partes con el propósito de evaluar y acordar las modificaciones que estimen necesarias. Dichas modificaciones serán sometidas a consideración de la Reunión de Presidentes por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 72. Las denuncias al presente Tratado deberán comunicarse al depositario, quien notificará las mismas a Las Partes. Dichas denuncias producirán sus efectos un año después de su notificación; sin embargo, las disposiciones del presente Tratado se seguirán aplicando a aquellos proyectos y acciones regionales en ejecución hasta tanto éstas finalicen. Este Tratado permanecerá en vigencia en tanto permanezcan vinculados a él por lo menos tres de los Estados Parte.

Artículo 73. Las disposiciones del presente Tratado se interpretarán y aplicarán de conformidad con su letra, su espíritu y a la luz del Protocolo de Tegucigalpa y las normas del Derecho Internacional

Artículo 74. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, al entrar en vigor el presente Tratado, procederá a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de las

Naciones Unidas, para los efectos del artículo 102, párrafo 2, de la Carta de esa Organización, y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

TITULO VI: DISPOSICION ESPECIAL

Artículo 75. Las Repúblicas de Costa Rica y Panamá suscriben el presente Tratado con expresa reserva de los siguientes artículos: 26 literales g) y h); 27 literales a), b), c);, 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38, 42 y 43.

TITULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 76. Mientras entre en vigencia el presente Tratado, la Comisión de Seguridad continuará funcionando de conformidad con los mandatos recibidos de la Reunión de Presidentes y los que se deriven del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y respetará la finalidad del presente Tratado.

Artículo 77. Las Partes fortalecerán sus esfuerzos para la obtención de la cooperación técnica y financiera que contribuya a la eliminación de la existencia de campos minados en la región, de conformidad con los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean Parte o aquellos que se suscriban en la materia.

Artículo 78. El presente Tratado sustituye todas las normas que en materia de seguridad o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de los Estados Centro Americanos (ODECA) y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieren adoptado a nivel regional.

EN FE DE LO CUAL, suscriben el presente Tratado en siete originales del mismo tenor, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos y cinco.

JOSE MARIA FIGUERES	OLSEN	ARMANDO	CALDERON	SOL
Presidente de la	República	Presidente de la		República
de Costa Rica		de El Salvador		
RAMIRO DE LEON	CARPIO	CARLOS	ROBERTO	REINA
Presidente de la	República	Presidente de la		República
de Guatemala		de Honduras		
JULIA MENA	RIVERA	TOMAS	GABRIEL	ALTAMIRANO
Presidente de la	República	Presidente de la		
de Nicaragua		de Panamá		DUQUE
				República

PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)

Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá:
CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar el marco jurídico de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), readecuándolo a la realidad y necesidades actuales, para alcanzar efectivamente la integración centroamericana; y

Que dicha readecuación debe orientarse al establecimiento y consolidación del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA que dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes y coordinará su ejecución.

POR TANTO:

Deciden reformar la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 12 de diciembre de 1962, por medio del presente Protocolo. Al efecto, los Presidentes Constitucionales de las mencionadas Repúblicas, convienen en el siguiente SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA:

NATURALEZA, PROPOSITOS, PRINCIPIOS Y FINES

Artículo 1. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito se constituye el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, integrado por los Estados Miembros originales de ODECA y por Panamá, que se incorpora como Estado Miembro.

Artículo 2. EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA es el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica.

Artículo 3. EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituir la como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

En ese sentido, se reafirman los siguientes propósitos:

- a) Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
- b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas.
- c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto.
- d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.
- e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.

- f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional.
- g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.
- h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.
- i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.
- j) Conformar el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros.

Artículo 4. Para la realización de los propósitos citados el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y sus Miembros procederán de acuerdo a los principios fundamentales siguientes:

- a) La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;
- b) Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;
- c) La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región.
- d) La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común;
- e) La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción.
- f) La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en el mismo, de todos los sectores sociales.
- g) La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución Pacífica de sus controversias.
- h) La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA o la consecución de sus objetivos.
- i) El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986.

MIEMBROS

Artículo 5. Son Miembros del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, los Estados centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de esta Carta, mediante su aprobación, ratificación o adhesión, y que lo pongan en vigor de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 36 del presente Instrumento.

Artículo 6. Los Estados Miembros se obligan a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que pongan en peligro la consecución de los propósitos y el cumplimiento de los principios fundamentales del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.

Artículo 7. Se establece el Procedimiento de Consulta Previa como sistema permanente entre los Estados Miembros para aquellos casos en que no hubiere lineamientos previos, en materia de relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregionales.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Artículo 8. El presente Protocolo modifica la estructura institucional de Centroamérica, regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución eficiente y el seguimiento constante de las decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes.

El funcionamiento de la estructura institucional deberá garantizar el desarrollo, equilibrado y armónico, de los sectores económico, social, cultural y político.

Artículo 9. Los órganos e instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, deberán guiarse por los propósitos y principios de este Protocolo e inspirarse en ellos tanto en sus decisiones, estudios y análisis como en la preparación de todas sus reuniones.

Artículo 10. Los Organos e Instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA deberán contribuir a la efectiva observancia y ejecución de los propósitos y principios de este Protocolo. Esta obligación es imperativa y primaria en sus ordenamientos complementarios o derivados, en los cuales deberán garantizar siempre la publicidad de sus resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las personas según la naturaleza de cada Organo o Institución y de los asuntos a tratar.

Artículo 11. El SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA velará por la eficiencia y eficacia del funcionamiento de sus órganos e instituciones asegurando la unidad y la coherencia de su acción intrarregional y ante terceros Estados, grupos de Estados u organizaciones internacionales.

Artículo 12. Para la realización de los fines del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA se establecen los siguientes Organos:

- a) La Reunión de Presidentes;
- b) El Consejo de Ministros;
- c) El Comité Ejecutivo;
- d) La Secretaría General

Forman Parte de este Sistema:

La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República, que será un Organo de Asesoría y Consulta. Dicha Reunión se realizará ordinariamente cada semestre y extraordinariamente, cuando los Vicepresidentes así lo deseen. Sus resoluciones serán adoptadas por consenso.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Transitorias, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como Órgano de Planteamiento, Análisis y Recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su Tratado Constitutivo y Protocolos vigentes. La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. La integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse en el Estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Protocolo. El Comité Consultivo estará integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano representativas de los sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica. Este Comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo.

REUNION DE PRESIDENTES

Artículo 13. - La REUNION DE PRESIDENTES es el Órgano Supremo del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.

Artículo 14. La REUNION DE PRESIDENTES se integra por los Presidentes constitucionales de los Estados Miembros, y se realizará ordinariamente cada semestre, y extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. Sus decisiones se adoptarán por consenso. El país sede de la REUNION DE PRESIDENTES será el Vocero de Centroamérica, durante el semestre posterior a la realización de la misma.

Artículo 15. Le corresponde a la REUNION DE PRESIDENTES conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad.

Corresponde particularmente a la REUNION DE PRESIDENTES:

- a) Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de sus mandatos y decisiones.
 - b) Armonizar las políticas exteriores de sus Estados.
 - c) Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una Centroamérica unida.
 - d) Aprobar, en su caso, las reformas a este Instrumento que se planteen de conformidad con el Artículo 37 del mismo
 - e) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Instrumento y en los demás Acuerdos, Convenios y Protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.
 - f) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.
- CONSEJO DE MINISTROS.

Artículo 16. El Consejo de Ministros estará integrado por los Ministros del Ramo y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado. El Ministro del Ramo del Estado Miembro que sea el Vocero de Centroamérica, según el Artículo 14 del presente Protocolo, presidirá en ese mismo semestre el Consejo de Ministros respectivo.

Corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la REUNION DE PRESIDENTES en lo que concierne a su ramo y preparar los temas que pueden ser objeto de la mencionada Reunión

Por la naturaleza de los temas a tratar, los Ministros podrán celebrar reuniones intersectoriales. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el Organo Principal de Coordinación.

Artículo 17. Es competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales. Le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización central, la elaboración de la agenda y preparación de las Reuniones de Presidentes, la representación de la región ante la comunidad internacional, la ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia de política internacional regional, la recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros al SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, así como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores conocerá de las propuestas de los distintos foros de Ministros, a efecto de elevarlas al conocimiento de la REUNIÓN DE PRESIDENTES con sus observaciones y recomendaciones.

Artículo 18. Es competencia del Consejo de los Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, ejecutar las decisiones de la REUNIÓN DE PRESIDENTES en materia de integración económica e impulsar la política económica integracionista en la región.

Artículo 19. Los Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia.

Artículo 20. La Reunión intersectorial de los Ministros de Relaciones Exteriores y de los Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional tendrá como atribución analizar, discutir y proponer a los Señores Presidentes la estrategia regional con respecto a la participación activa de la región en el sistema económico internacional y ejecutarla concertadamente.

Artículo 21. El quórum del Consejo de Ministros se integra con la participación de todos los Ministros respectivos y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado.

En el Consejo de Ministros, cada Estado Miembro tendrá sólo un voto. Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser adoptadas por consenso. Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento, se resolverá por mayoría de votos.

El Consejo de Ministros, en las diferentes reuniones ordinarias, sectoriales o intersectoriales, se realizará con la frecuencia que fuere necesaria o a convocatoria de uno de sus miembros o de la REUNIÓN DE PRESIDENTES.

Artículo 22. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10, las decisiones de los Consejos serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados miembros y sólo podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal. En tal caso, el Consejo, previo los estudios técnicos pertinentes, analizará de nuevo el asunto y acomodará la decisión, en su caso, al respectivo ordenamiento legal.

No obstante, tales decisiones podrán ser ejecutadas por los Estados miembros que no las hubieren objetado.

Artículo 23. El Comité Ejecutivo y la Secretaría General son los Organos Permanentes del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.
COMITE EJECUTIVO

Artículo 24. El Comité Ejecutivo se integra con un representante de cada uno de los Estados Miembros. Estos serán nombrados por sus Presidentes, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores.

El Comité Ejecutivo será presidido por el representante del Estado sede de la última Reunión Ordinaria de Presidentes. El Comité se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente.

El Comité Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Asegurar la ejecución eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes;
 - b) Velar por que se cumplan las disposiciones del presente Protocolo y de sus instrumentos complementarios o actos derivados;
 - c) Establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su Presidente, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las propuestas que sean necesarias en concordancia con las directrices generales emanadas de las Reuniones de Presidentes;
 - d) Someter, por conducto de su Presidente, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Proyecto de Presupuesto de la organización central del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;
 - e) Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el establecimiento de las Secretarías órganos subsidiarios que estime convenientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, especialmente para hacer posible a participación de todos los sectores vinculados con el desarrollo integral de la región y el proceso global de integración;
 - f) Aprobar los Reglamentos e Instrumentos que se elaboren por las Secretarías u otros órganos Secretarías del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;
 - g) Revisar los informes semestrales de actividades de la Secretaría General y demás Secretarías trasladarlos, con las observaciones y recomendaciones de los Consejos de Ministros respectivos, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo menos un mes antes de la celebración de su última reunión previa a la REUNIÓN DE PRESIDENTES, para que este último las eleve a dicha Reunión;
 - h) Las demás que señale el presente Protocolo y sus Instrumentos derivados o complementarios.
- SECRETARIA GENERAL

Artículo 25. La Secretaría General estará a cargo de un Secretario General, nombrado por la REUNIÓN DE PRESIDENTES por un período de cuatro años.

Artículo 26. El Secretario General es el más alto funcionario administrativo del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y tiene la representación legal de la misma.

El Secretario General deberá ser nacional de cualquiera de los Estados Miembros, persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad.

El Secretario General tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Representar al SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA en el ámbito internacional de conformidad a lo establecido en el presente Protocolo y cuando le sea encomendado por el Consejo de Ministros;
- b) Ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las Reuniones de Presidentes, Consejos de Ministros y Comité Ejecutivo;
- c) Elaborar el Reglamento Administrativo y otros instrumentos de la Secretaría General y someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo;
- d) Gestionar y suscribir, previa aprobación del Consejo de Ministros competente, instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus competencias de conformidad a los principios y propósitos del presente Instrumento;
- e) Gestionar ante Estados, grupos de Estados, organismos y otros entes internacionales. la cooperación financiera y técnica necesaria para el buen funcionamiento del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y el logro de los objetivos centroamericanos, y en tal sentido, suscribir contratos, convenios y aceptar donaciones y otros aportes extraordinarios;
- f) Formular su programa de labores, elaborar su informe anual de actividades y el proyecto de presupuesto, los cuales presentará al Comité Ejecutivo;
- g) Participar con voz en todos los órganos del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, actuar como la Secretaría permanente de las Reuniones de Presidentes, asegurando también los servicios de Secretaría y los servicios técnicos y administrativos que fueran necesarios;
- h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Protocolo y de sus instrumentos derivados y complementarios y por la ejecución eficaz de las decisiones de las Reuniones de Presidentes y del Consejo de Ministros, por todos los organismos e instituciones de integración. A este efecto, el Secretario General se podrá reunir con dichos organismos e instituciones, cuando lo estime oportuno o por indicación del Comité Ejecutivo;
- i) Gestionar ante los Estados Miembros el efectivo aporte correspondiente al Presupuesto Ordinario y los extraordinarios si los hubiere;
- j) Nombrar y remover el personal técnico y administrativo de la Secretaría General de conformidad al Reglamento respectivo y tomando debidamente en cuenta un criterio proporcional de representación de las nacionalidades de los Estados Miembros;
- k) Llamar la atención de los órganos del Sistema sobre cualquier situación que, a su juicio, pueda afectar el cumplimiento de los propósitos o de los principios del Sistema o amenazar su ordenamiento institucional;
- l) Ejercer las demás atribuciones que le confiere el presente Protocolo o que le asignen los órganos superiores y las que resulten de sus instrumentos complementarios o derivados.

Artículo 27. La Secretaría General y el Personal de la Secretaría actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusivo al SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno.

Cada uno de los Estados Miembros se obliga a respetar el carácter centroamericanista del personal de la Secretaría General y a no tratar de ejercer influencia alguna en el desempeño de sus funciones.

Artículo 28. La Secretaría que se ocupará de los asuntos económicos será la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la cual conservará la personería jurídica, atribuciones y funciones que le asigna dicho Tratado.

La SIECA informará de sus actividades a la Secretaría General, a fin de promover el desarrollo armónico y equilibrado, de los aspectos económicos, con los aspectos políticos, sociales y culturales, en la perspectiva de la integración global de la región centroamericana.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29. El SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA tendrá personalidad jurídica y su sede en San Salvador, República de El Salvador, Estado con el cual concluirá un Acuerdo de Sede para la organización central del Sistema.

Artículo 30. El SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA gozará internacionalmente y en cada uno de los Estados Miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos y acuerdos, comparecer en juicio, conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias.

Artículo 31. El SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, podrá, en el marco de sus competencias, celebrar con terceros Estados u organismos, tratados o acuerdos de conformidad a los propósitos y principios del presente Instrumento. Podrá también concluir acuerdos de asociación con terceros Estados, en donde se estipulen derechos y obligaciones recíprocas y, en su caso, se tenga en cuenta el carácter equitativo y complementario del trato que debe lograrse para el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA en sus relaciones con organismos o Estados de mayor desarrollo.

Las iniciativas o propuestas correspondientes las someterá el Secretario General a la consideración del Comité Ejecutivo, que las elevará, con sus observaciones y recomendaciones, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Las comunicaciones telefónicas o electrónicas o de otra naturaleza y la correspondencia del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, gozarán de franquicias en el territorio de los Estados Miembros.

Artículo 32. Los Estados Miembros del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA contribuirán a su sostenimiento, incluyendo al de sus organismos, con cuotas iguales.

Artículo 33. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Responsables de la Integración Económica y el Desarrollo Regional organizará y pondrá en funcionamiento un sistema de auditoría y fiscalización financiera de los Organos e Instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA.

Los resultados de la auditoría y fiscalización financiera se publicarán anualmente en los Diarios Oficiales de los Estados Miembros.

Artículo 34. Los instrumentos complementarios o derivados que se suscriban de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo podrán entrar en vigencia mediante acuerdos ejecutivos.

Artículo 35. Este protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana. No obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos.

Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia.

Artículo 36. El presente Protocolo será aprobado o ratificado por los Estados de Centroamérica, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador será depositario inicial de los Instrumentos de Ratificación y Adhesión del presente Instrumento, debiendo trasladarlos, para su depósito final, a la Secretaría General cuando ésta entre en funciones.

Este Protocolo tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los Estados que lo hayan ratificado, ocho días después de la fecha en que la mayoría de los Estados signatarios de la Carta de la ODECA depositen sus instrumentos de ratificación.

Una vez en vigencia se depositará copia certificada de las mismas en las Secretarías Generales de la ONU y de la OEA.

El presente Protocolo queda abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación

Artículo 37. Los proyectos de reformas al Protocolo serán sometidos a consideración de la REUNIÓN DE PRESIDENTES, por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 38 Este Instrumento no admite reservas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1. Los Organos e Instituciones creados en el marco del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica y los originados en esfuerzos integracionistas precedentes a este Protocolo serán parte del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA si fueren compatibles con sus propósitos, principios y con la estructura orgánica, de acuerdo al estudio de los ordenamientos jurídicos institucionales.

Artículo 2. Mientras se integra el Comité Ejecutivo, sus atribuciones las asumirá directamente el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 35 y en tanto no esté integrada la Corte Centroamericana de Justicia, las controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo deberá conocerlas el Consejo Judicial Centroamericano.

Artículo 4. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 12 con respecto al Parlamento Centroamericano, tal disposición se aplicará a los Estados que ya han efectuado la ratificación del Tratado Constitutivo y sus Protocolos.

EN FE DE LO CUAL, los Presidentes Constitucionales de las Repúblicas Centroamericanas firman el presente Protocolo en seis originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, República de Honduras, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)

RAFAEL ANGEL CALDERON FOURNIER
Presidente de la República de Costa Rica

ALFREDO F. CRISTIANI BURKARD
Presidente de la República de El Salvador

JORGE SERRANO ELIAS
Presidente de la República de Guatemala

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO
Presidente de la República de Honduras

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
Presidenta de la República de Nicaragua

GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Presidente de la República de Panamá

UNESCO Y LA CULTURA DE LA PAZ

"La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo"

(Artículo 1 de la Constitución de la UNESCO).

Por iniciativa del Director General de la UNESCO, Federico Mayor, la "cultura de paz" se ha convertido en la política principal de la Organización, que, por su parte, ha venido preconizando continuamente la no violencia, la tolerancia y la solidaridad. Con su capacidad de difusión, la UNESCO está impulsando y acompañando las actividades inspiradas por estos valores. En los albores del próximo milenio, la Organización está militando más que nunca por convertir el "espíritu de paz" en una realidad cotidiana para todos.

Cabe preguntarse cómo hacer patente el gran reto que se nos plantea en este fin de siglo, a saber: iniciar la transición de una cultura de guerra a una cultura de paz. También cabe preguntarse cómo encontraremos los caminos y medios apropiados para cambiar las actitudes, conductas y creencias

Hay demasiadas guerras basadas en la identidad que persiguen la eliminación de los que son diferentes, hay demasiada violencia en la modernidad que atenta contra la identidad, y también hay demasiadas exacciones silenciosas y frustraciones provocadas por la mundialización de los intercambios económicos y culturales que desintegran los valores comunitarios. Hoy en día, la intolerancia impulsa los nacionalismos y hace renacer las disparidades étnicas y religiosas, al mismo tiempo que arroja a las rutas terrestres y marítimas a millones de personas desposeídas brutalmente del "derecho a poseer derechos".

En su búsqueda de la paz, la UNESCO parte del supuesto de que la violencia subsiste, aunque haya cambiado de aspecto. Si bien las guerras tradicionales han disminuido, los presupuestos militares de la mayoría de los países siguen siendo considerables, sobre todo para el armamento sofisticado. En cambio, los presupuestos destinados al desarrollo social se reducen cada día más. Además, en los últimos veinte años se han multiplicado los conflictos dentro de los Estados con el consiguiente exacerbamiento de las intolerancias étnicas o religiosas.

Es menester movilizarse contra lo inaceptable y en pro de la paz y la no violencia, que han de convertirse en una realidad cotidiana para todos los seres humanos.

La reiteración de la lucha por la paz

La lucha por la paz, la solidaridad y la no violencia está jalonada por etapas importantes: 1899, Conferencia de Paz de La Haya; 1919, fundación de la Sociedad de Naciones; 1945, creación de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO, su institución especializada para la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

Desde que fue creada, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Organización ha llevado a cabo su misión inspirada en los principios enunciados en el preámbulo de su Constitución: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz."

La visión de futuro de la Constitución de la UNESCO es más actual que nunca, porque se basa en el análisis pertinente de los procesos que conducen a la guerra o a la paz, y porque se refiere al ideal democrático: "Una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos y (...), por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad."

Aunque la UNESCO lleva a cabo actividades en frentes muy diversos, su única misión es la paz, como se especifica en el Artículo 1º de su Constitución: "La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo" (Artículo 1 de la Constitución de la UNESCO).

La idea de una "cultura de paz" se formuló por vez primera en Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), en el año 1989, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Desde entonces, se ha convertido en un movimiento mundial.

En febrero de 1994, con motivo del Primer Foro Internacional sobre Cultura de Paz celebrado en San Salvador (El Salvador), Federico Mayor inició una reflexión internacional sobre el establecimiento de un derecho a la paz refiriéndose a la Declaración de Viena (1993), en la que se proclama que los derechos humanos, la democracia y el desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

En 1995, los Estados Miembros de la UNESCO decidieron que la Organización debía movilizar todas sus energías al servicio de la cultura de paz. En el marco de su Estrategia a Plazo Medio (1996-2001), la Organización creó un Proyecto Transdisciplinario denominado Hacia una Cultura de Paz. En este marco, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, colectivos, jóvenes y adultos, redes de periodistas, radios comunitarias y dirigentes religiosos que obran en pro de la paz, la no violencia y la tolerancia, participan activamente *in situ* en la difusión de la cultura de paz en todas las regiones del mundo.

Por último, el 20 de noviembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 Año Internacional de la Cultura de la Paz y encargó a la UNESCO la tarea de asumir su coordinación.

¿Qué es la "cultura de paz"?

La cultura de paz está vinculada intrínsecamente a la prevención de los conflictos y a su solución por medios no violentos. Es una cultura fundada en la tolerancia, la convivencia y la solidaridad cotidiana, es una cultura que respeta los derechos de todos –este principio de pluralismo garantiza la libertad de opinión– y que se orienta esencialmente a prevenir los conflictos en sus raíces, concediendo toda la importancia debida a los nuevos peligros que, sin tener un carácter bélico, se ciernen sobre la paz y la seguridad: por ejemplo, la exclusión, la pobreza extrema y el deterioro del medio ambiente.

La cultura de paz trata de resolver los problemas a través del diálogo, la negociación y la mediación, a fin de lograr que la guerra y la violencia sean imposibles.

¿Cómo se puede convertir en una realidad viva y perdurable la cultura de paz? En nuestro mundo interactivo, todo es cuestión de realizar una labor infatigable de sensibilización, movilización, educación, prevención e información en todos los planos de la sociedad y en todos los países. La elaboración y la adopción de una cultura de paz requieren una plena participación de todos. A los ciudadanos les incumbe organizarse y responsabilizarse. Los países deben cooperar entre sí, las organizaciones internacionales han de coordinar estrechamente sus distintas actividades, y las poblaciones tienen que participar plenamente en el desarrollo de su sociedad.

Hacia un movimiento universal

Los valores "sagrados" que la UNESCO viene preconizando y difundiendo son la tolerancia, la democracia y los derechos humanos —es decir el respeto de los derechos y el respeto de los demás— y hoy en día la Organización pretende revalorizarlos, tomando en cuenta el carácter específico y la historia de cada sociedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho suya esta importante tarea prioritaria de la UNESCO, al proclamar el año 2000 Año Internacional de la Cultura de la Paz y la década 2001-2010 "Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo". Para preparar ese Año Internacional, un grupo de Premios Nobel de la Paz ha redactado un "Manifiesto 2000 por una cultura de paz y no violencia" con el concurso de las Naciones Unidas y la UNESCO. El Manifiesto se hizo público en París el 4 de marzo de 1999

El Manifiesto 2000

El "Manifiesto 2000" ha sido redactado el pasado mes de diciembre en París por un grupo de Premios Nobel de la Paz, con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los primeros firmantes de este manifiesto han sido Norman Borlaug, Adolfo Pérez Esquivel, Mijaíl Gorbachev, Mairead Maguire, Rigoberta Menchu Tum, Shimon Peres, José Ramos Horta, Joseph Rotblat, David Trimble, Desmond Tutu, Elie Wiesel, Carlos F. Ximenes Belo, Nelson Mandela y el Dalai Lama.

El objetivo del Manifiesto es provocar una toma de conciencia y un compromiso individuales. No se trata de un llamamiento dirigido a gobiernos u organismos jerárquicos. Es un testimonio de la responsabilidad de cada ser humano para plasmar en la realidad cotidiana los valores, actitudes y comportamientos que inspiran la cultura de paz, puesto que todas las personas pueden actuar imbuidas de un espíritu de cultura de paz en el seno de la familia, lugar de trabajo, barrio, ciudad y región, convirtiéndose en mensajeros de la tolerancia, la solidaridad y el diálogo.

En su condición de institución coordinadora del sistema de las Naciones Unidas para la preparación del Año Internacional de la Cultura de la Paz, la UNESCO se compromete a difundir el "Manifiesto 2000" en todo el mundo y a efectuar un llamamiento solemne a todas las organizaciones, instituciones y gobiernos para que se asocien a él.

Las escuelas, universidades, asociaciones e instituciones que llevan a cabo una labor cotidiana con la UNESCO y otras organizaciones de las Naciones Unidas, se movilizarán para difundir el "Manifiesto 2000". No obstante, será necesario también que participen personalidades de los

medios políticos, intelectuales y artísticos, como parlamentarios, periodistas, músicos, realizadores de cine, científicos, y representantes de organizaciones religiosas y militares del mundo entero.

El objetivo perseguido es reunir 100 millones de firmas, antes de la "Asamblea del Milenio" de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre del año 2000.

Las organizaciones que van a colaborar en la difusión del "Manifiesto 2000" se comprometerán también a recoger firmas. Para ello, ya se dispone de un sitio Internet en el que figurará la lista de todos los firmantes (www.unesco.org/manifiesto2000).

El 4 de marzo de 1999, el Director General de la UNESCO dio el título simbólico de "mensajeros de la cultura de paz" a cien jóvenes de orígenes y medios distintos, que se encargarán de difundir en su entorno el mensaje de la cultura de paz. (Ver adjunto el formulario de participación en el Manifiesto 2000)

Es importante insistir en que esta acción de gran envergadura tiene por objeto suscitar la adhesión del mayor número posible de personas, alertar y movilizar a la opinión pública a escala mundial, a la vez que promover ideas innovadoras y buscar soluciones alternativas. El Año Internacional de la Cultura de la Paz representa una oportunidad para dar a conocer el movimiento universal en pro de la cultura de paz y fomentar su emergencia, así como para establecer un sistema de redes informativas que ponga en contacto a las personas y organizaciones interesadas.

La cultura de paz es una tarea a largo plazo que debe tomar en cuenta el contexto histórico, político, económico, social y cultural en el que viven los seres humanos. Esta cultura se aprende, se cultiva y se practica a diario en la familia, la ciudad, la región y el país en que se vive. Representa una forma de actuación cívica que rechaza el individualismo atomizado y el ensimismamiento. Su edificación es permanente.

La paz no es un proceso pasivo sino activo: se tiene que desear, promover y conducir.

La paz en acción: ámbitos principales de acción y cooperación

Para la UNESCO, la paz no se puede limitar a la mera inexistencia de guerras. La Organización moviliza, informa, apoya y valoriza lo que ya existe. Para llevar a cabo sus iniciativas suscita foros, coloquios y encuentros, y recurre a nuevos interlocutores.

Desde que tuvo lugar en 1995 el Primer Foro Internacional sobre Cultura de Paz en El Salvador para dar alientos y apoyo a las nuevas democracias surgidas de prolongados conflictos armados y comprometidas en procesos de reconciliación nacional, se han celebrado varios encuentros regionales bajo los auspicios de la UNESCO que han permitido llevar a cabo una reflexión colectiva.

Simultáneamente, han ido surgiendo nuevos protagonistas de la movilización en pro de la cultura de paz:

- los parlamentarios en relación con el tema del desarrollo de la democracia;
- los alcaldes con la creación del Premio UNESCO Ciudades por la Paz;
- los mediadores para la búsqueda de nuevos medios de protección de los derechos humanos en el plano nacional;
- los medios de comunicación del sector público para conceder espacios de difusión al diálogo y al debate; y

- las fuerzas armadas e instituciones de estrategia militar para garantizar la seguridad democrática de las poblaciones.

"Pensar mundialmente, actuar localmente"

La educación, en su sentido lato, resulta ser el eje fundamental de toda acción en pro de la cultura de paz. Esa educación debe sensibilizar a todo ser humano con respecto al prójimo y debe imponer responsabilidades relacionadas con los derechos y libertades. Debe ser una educación básica para todos y a lo largo de toda la vida, que se ha de dispensar en un contexto formal e informal a la vez y que se ha de basar –como dice el informe La educación encierra un tesoro, preparado en 1996 por la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI presidida por Jacques Delors– en los cuatro pilares del saber: "aprender a aprender", "aprender a hacer", "aprender a ser" y "aprender a vivir juntos".

Ante todo, es menester acelerar la creación de un sistema integrado de educación y formación sobre la paz, los derechos humanos y la democracia. Para ello, la UNESCO ha adoptado numerosas iniciativas:

- creación de cátedras en más de 25 países de Africa, de Europa, del mundo árabe y de América Latina;
- investigación histórica y aprovechamiento compartido de los conocimientos históricos;
- revisión de los manuales escolares de historia y geografía;
- producción de distintas publicaciones y manuales de formación;
- elaboración y difusión de material didáctico a través de los 6.000 centros docentes de la Red del Plan de Escuelas Asociadas, diseminados por más de 150 países;
- evaluación y mejora de los planes nacionales de educación sobre los derechos humanos;
- investigación sobre las legislaciones, políticas y estrategias nacionales en el plano universitario;
- programas de formación para educadores y profesionales (docentes, periodistas, funcionarios de servicios públicos, personal policial y miembros de las fuerzas armadas).

En el Segundo Congreso Mundial de la Internacional de la Educación celebrado en Washington el 25 de julio de 1998, Federico Mayor declaró lo siguiente: "La UNESCO está dispuesta a establecer nuevas asociaciones entre los gobiernos y las organizaciones de docentes para fomentar conductas democráticas en las aulas de todo el mundo. La democracia se tiene que plasmar en la igualdad de oportunidades en materia de educación (...)."

Ante la rápida evolución del mundo de la educación, que está destinado a convertirse en un universo sin fronteras, es menester innovar en materia de programas escolares, así como de contenidos y métodos pedagógicos, tal y como proclamó el Foro Internacional Por una cultura de paz y un diálogo entre civilizaciones, contra una cultura de guerra y violencia, celebrado del 16 al 18 de mayo de 1998 en Chisinau (República de Moldova). Es necesario, también, que en los institutos de pedagogía y en todos los planes de estudios, desde la enseñanza preprimaria hasta la superior, se introduzcan cursos, seminarios y conferencias especialmente dedicados a las cuestiones relacionadas con la cultura de paz. En los países donde hay conflictos, y también en aquellos en los que la paz es reciente, se debe dar prioridad a la elaboración de cursos intensivos de formación mediante tecnologías audiovisuales destinadas especialmente a los analfabetos y grupos desfavorecidos.

Los derechos humanos y la lucha contra la discriminación son factores de movilización para la edificación de una paz justa y duradera. Dentro de la línea trazada por la Conferencia de Viena (1993) con la reiteración del principio de la universalidad y unidad de los derechos humanos, la

UNESCO lleva a cabo una actividad de información sobre los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos y la lucha contra las discriminaciones, así como sobre los procedimientos de índole jurídica u otra que permiten garantizar su aplicación. La Organización presta una atención especial a la situación de los grupos vulnerables o desfavorecidos (mujeres, niños discapacitados, personas desplazadas, refugiados, minorías, etc.).

En la esfera de la promoción de la democracia, se ha creado el Proyecto DEMOS con la idea de que la prevención de los conflictos es el mejor medio para establecer la seguridad y estabilidad necesarias para un desarrollo democrático. Este proyecto se inició en América Latina y en la actualidad comprende actividades de promoción de la democracia en África y Europa.

Con respecto a la protección de los derechos relacionados con asuntos de su incumbencia, la UNESCO alerta a la opinión pública sobre las violaciones flagrantes de los derechos de los profesionales e intelectuales y hace acopio de informaciones verificadas, en cooperación con los gobiernos concernidos, los organismos intergubernamentales competentes –sobre todo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– y las organizaciones no gubernamentales interesadas. También anima foros de reflexión sobre la naturaleza de la democracia, que sólo puede existir y subsistir con el apoyo de ciudadanos activos y conscientes.

Para pasar de la democracia formal a una democracia realmente vivida en las prácticas y conciencias de todos, la UNESCO fomenta los intercambios de información y experiencias a escala regional y subregional. En el plano universitario, se dispensa una formación a través del Programa UNITWIN y las Cátedras UNESCO de democracia.

La lucha contra la intolerancia es un combate continuo. Como la discriminación y la intolerancia corren parejas, la Organización ha emprendido una "cruzada" en pro de la tolerancia en distintas regiones del mundo, desde que adoptó en 1955 la "Declaración de Principios sobre la Tolerancia" con motivo de la celebración del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.

El pluralismo cultural es otro de los pilares de la paz y la solidaridad internacionales. La paz no implica uniformidad sino pluralismo y desarrollo sostenible. Con este planteamiento positivo de la diversidad cultural, la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, círculos empresariales, y redes asociativas y comunitarias) debe intervenir y actuar, sabiendo pertinentemente que corresponde a cada país y sociedad encontrar las estrategias más adaptadas a sus características. Se impone la adopción de un planteamiento innovador ante el proceso de mundialización que desdeña el pluralismo económico y cultural y tiene repercusiones peligrosamente distintas en los países, en función de que sean pobres o ricos. Por ese planteamiento abogaron Federico Mayor, Director General de la UNESCO, y el Jefe Emeka Anayaoku, Secretario General del Commonwealth, en el coloquio Hacia un pluralismo constructivo celebrado en París el 28 de enero de 1999.

Hace mucho tiempo que la UNESCO viene desarrollando una labor para proteger y valorizar la diversidad cultural, así como para propiciar el diálogo intercultural e interétnico, mediante su contribución a la realización de proyectos regionales y subregionales. Tres proyectos contribuyen a la interacción de las culturas y las civilizaciones:

Esta dinámica del diálogo entre las culturas y las civilizaciones está presente también en distintos programas nacionales de cultura de paz.

La reconciliación, el entendimiento intercultural y la edificación de una paz duradera dependen también de los medios de comunicación. La UNESCO encabeza las instituciones de las Naciones

Unidas en la tarea de proporcionar ayuda a la prensa independiente y los medios de comunicación del sector público que defienden la libertad de expresión e información, y también apoya a todos los que son víctimas de persecuciones y se oponen a la cultura de guerra y violencia.

En mayo de 1997, la Organización reunió en Puebla (México) a directores y redactores jefes de la prensa latinoamericana, que elaboraron una Declaración en la que reiteraban "su compromiso con una sociedad que conviva en paz y abandone la cultura de violencia en busca de una cultura de paz", recordaban "que la cultura de paz supone el diálogo y conocimiento de los otros, mediante el amplio y libre flujo de ideas, lo cual se expresa de manera principal a través de la prensa independiente", y declaraban "que la armonía interna en las sociedades y el entendimiento pacífico entre las naciones demandan transparencia informativa y de opinión". Después de esta reunión, en 1998 se celebraron otros encuentros de representantes de los medios de comunicación en Kingston (Jamaica), Tiflis (Georgia) y Moscú (Federación de Rusia).

No obstante, la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen se ve dificultada por las leyes del mercado, que predominan hoy en día sobre las leyes de la información y provocan la concentración de los medios de difusión en todo el mundo. Algunos de estos medios tienen tendencia a explotar la violencia, en vez de hacer hincapié en el entendimiento mutuo. De lo que se trata es de consolidar las capacidades de comunicación, sobre todo en los países en desarrollo, y más concretamente en los que acaban de salir de situaciones de conflicto.

MANIFIESTO 2000: POR UNA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA

El año 2000 debe ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Juntos podemos transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y de no violencia. Esta evolución exige la participación de cada uno de nosotros y les da a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más digno y armonioso, un mundo de justicia, solidaridad, libertad y prosperidad. La cultura de paz hace posible el desarrollo duradero, la protección del medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser humano.

Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

1. **respetar la vida** y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios;
2. **practicar la no violencia activa**, rechazando la violencia en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes;
3. **compartir mi tiempo y mis recursos materiales**, cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;
4. **defender la libertad de expresión y la diversidad cultural**, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo;
5. **promover un consumo responsable** y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta;

6. **contribuir al desarrollo de mi comunidad**, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 como el "**Año Internacional de la Cultura de Paz**" en noviembre de 1997, y los años 2001 al 2010, como "**Década Internacional de la Cultura de la Paz y de la No Violencia para los Niños del Mundo**" en octubre de 1998. En el marco de la preparación del Año Internacional de la Cultura de Paz, un grupo de Premios Nobel de la Paz, reunidos en París con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creó el Manifiesto 2000.

DECLARACION TRINACIONAL EL SALVADOR, GUATEMALA, Y NICARAGUA: INTEGRACIÓN PARA EL SIGLO XXI

Los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, han decidido suscribir el día 2 de mayo de 2000 la presente Declaración en las ciudades de San Salvador, Guatemala y Managua:

Convencidos de la necesidad de desarrollar nuevas iniciativas y de dar un nuevo impulso al proceso de integración regional para enfrentar con éxito los desafíos que impone la globalización.

Conscientes de que es necesaria la ejecución de acciones coordinadas y concretas, adecuadas a la distintas velocidades de desarrollo de cada país, que permitan avanzar efectivamente en el cumplimiento de los objetivos y principios de la integración centroamericana.

Consecuentes con los principios fundamentales de la integración centroamericana, contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa, en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática y demás instrumentos de la integración regional.

Guiados por el objetivo fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana, de consolidar a Centroamérica como región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Considerando que la última década del siglo pasado se caracterizó por fijar las bases de un nuevo modelo de integración centroamericana, fundada en principios y objetivos comunes, que recogen la voluntad de los pueblos y gobiernos de nuestros países.

Conscientes de la importancia de respetar los principios de gradualidad, especificada y progresividad del proceso de integración económica, lo cual significa que todos o algunos Estados podrán avanzar con la celeridad que acuerden dentro del proceso y tomando en consideración el precedente de la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador.

Considerando los resultados positivos que ha tenido en la región la aplicación de Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana, principalmente por la trascendencia práctica del concepto de seguridad vertido en un modelo único, integral e indivisible, y que es necesario continuar fortalecimiento la cooperación en este ámbito.

Conscientes de que los desafíos enfrentados requieren del esfuerzo común para alcanzar la plena vigencia de los objetivos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

Animados por la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad del proceso de desarrollo económico y social y de mejorar las condiciones de vida de los pueblos centroamericanos.

ACORDAMOS:

Adoptar medidas concretas para avanzar en la conformación de un sistema regional de bienestar y justicia económica y social; alcanzar la unión económica; fortalecer el sistema financiero centroamericano; robustecer la región como bloque económico para insertarla exitosamente en la economía internacional; y promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenible.

Aplicar prioritariamente medidas para la reducción de los desequilibrios intrarregionales que afectan al desarrollo sostenible; elevar las tasas de crecimiento económico que permitan reducir los niveles de pobreza; garantizar la sostenibilidad social y política de los procesos de apertura económica y democratización de los países de la región; armonizar las políticas macroeconómicas y sectoriales; formular políticas que racionalicen e incentiven las actividades agropecuarias; procurar la seguridad alimentaria, incrementar y diversificar las exportaciones, consolidando la articulación de las cadenas productivas, comerciales y de servicios; impulsar la reconstrucción, rehabilitación y modernización de la infraestructura regional, especialmente en materia de transporte, telecomunicaciones y energía, para elevar los niveles de eficiencia y competitividad de los sectores productivos, a nivel nacional, regional e internacional.

Asumir el compromiso de desarrollar iniciativas nuevas, complementarias y graduales, en el marco de la integración, que constituyan elementos sustantivos, que permitan alcanzar avances concretos en las áreas que se detallan a continuación: relaciones internacionales, política macroeconómica, política económica sectorial, infraestructura, política migratoria y política de seguridad.

Adoptar la siguiente Agenda de Trabajo:

Relaciones Internacionales

Negociación conjunta frente a terceros.
Sedes conjuntas de representaciones diplomáticas y consulares.

Política Macroeconómica

Compromiso con estabilidad de precios.
Compromiso con estabilidad cambiaria.
Integración de sistemas financieros.,
Protección del ahorro bancario.
Compatibilidad monetaria.

Política Económica Sectorial

Armonizar las políticas arancelarias.
Armonizar las políticas que regulan los servicios y las inversiones.
Armonizar las disposiciones sobre registros sanitarios.
Armonizar la política tributaria.
Armonizar la política agropecuaria.
Unificar la política aduanera.
Promover el turismo intra y extrarregional.

Infraestructura

Modernizar la red vial y los puertos marítimos y aéreos.
Adoptar estrategias comunes en materia de política energética.

Promoción de políticas en comunicaciones.

Migración

Actualizar los compromisos contraídos en el CA-4.

Política de Seguridad

Implementar acciones coordinadas contra el crimen organizado.

Apegarse a lo establecido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y a los mecanismos que provee el Derecho Internacional para garantizar la independencia, soberanía, seguridad e integridad territorial de los Estados signatarios.

Para garantizar el cumplimiento de la Agenda de Trabajo, se crea como mecanismo de aplicación y seguimiento las siguientes comisiones de trabajo:

Comisión Política (Relaciones Internacionales, seguridad, migración, aduanas y medio ambiente)

Comisión Económica. (Comercial y Financiera).

Comisión de Infraestructura.

Cada Comisión queda facultada para crear los grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las tareas asignadas.

Fijar un plazo máximo de noventa días para que las comisiones de trabajo presenten los estudios y proyectos realizados con base en el correspondiente Plan de Acción que es parte integrante de esta Declaración.

Invitar a los Gobiernos de los demás Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana a incorporarse a este esfuerzo común para impulsar la integración centroamericana.

Francisco Guillermo Flores Pérez
Presidente de la República de El Salvador

Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala

Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente de la República de Nicaragua

OEA/Ser.P AG/RES. 1623 (XXIX-O/99)
junio 1999

7

FOMENTO DE LA CONFIANZA Y DE LA SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999,
y pendiente de edición por parte de la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.3830/99) y, en particular, la sección que se refiere al Informe de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CP/CSH-180/99 rev. 3) la cual incluye el tema de "Fomento de la Confianza y de la Seguridad en las Américas";

TENIENDO PRESENTE que, de conformidad con el artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, uno de los propósitos esenciales de la Organización es afianzar la paz y la seguridad del Continente;

RECORDANDO sus resoluciones sobre fortalecimiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio, AG/RES. 1121 (XXI-O/91) y AG/RES. 1123 (XXI-O/91) y sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad AG/RES. 1179 (XXII-O/92), AG/RES. 1237 (XXIII-O/93), AG/RES. 1284 (XXIV-O/94), AG/RES. 1288 (XXIV-O/94), AG/RES. 1353 (XXV-O/95), AG/RES. 409 (XXVI-O/96), AG/RES. 1494 (XXVII-O/97) y AG/RES. 1566 (XXVIII-O/98);

DESTACANDO la importancia de las Declaraciones de San Salvador y de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, en las que se recomienda que las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad se apliquen de la manera que se considere más adecuada;

RECONOCIENDO la consolidación de la democracia en la región, los esfuerzos en favor del desarme, la paz y la seguridad internacionales y la voluntad de los Estados de continuar el proceso de fortalecimiento de la confianza y de la seguridad en el Hemisferio;

TOMANDO NOTA del avance importante logrado en la identificación y aplicación de medidas de fomento de la confianza y la seguridad desde la adopción de la Declaración de Santiago, que ha ayudado a disminuir los factores que generan desconfianza y ha contribuido a promover la transparencia y la confianza mutua, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la OEA, el respeto al derecho internacional y la promoción de las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados de la región;

TOMANDO NOTA con satisfacción de la solicitud formulada el 30 de julio de 1998 por los Gobiernos de Argentina y Chile a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas de que elabore una metodología común con el fin de facilitar la comparación de los gastos militares de ambos países;

TOMANDO NOTA asimismo con satisfacción de la entrada en vigencia el 26 de diciembre de 1997 del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y de la Declaración de los Presidentes de Centroamérica y la República Dominicana y del Representante del Primer Ministro de Belice sobre la No Participación en la Adquisición de Armamentos Estratégicos de Alta Tecnología, Destrucción Masiva y Altos Costos del 6 noviembre de 1997;

TOMANDO NOTA de los resultados de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Cartagena de Indias del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1998; y

REAFIRMANDO:

Que el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y al principio de no intervención y la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con los términos de las Cartas de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, son la base de la

convivencia pacífica y de la seguridad en el Hemisferio, y constituyen el marco para el desarrollo de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad; y

Que la aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, por medio de acciones prácticas y útiles, facilitará futuros procesos de cooperación de mayor alcance en ámbitos tales como el control de armamentos y la seguridad hemisférica,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que apliquen de la manera que consideren más apropiada las recomendaciones de las Declaraciones de San Salvador y de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad y de la resolución AG/RES. 1179 (XXII-O/92).
2. Exhortar a todos los Estados Miembros a que continúen proporcionando a la Secretaría General, antes del 15 de abril de cada año, información sobre la aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad para facilitar la preparación del inventario completo y sistemático de dichas medidas, a la luz de lo dispuesto en las Declaraciones de San Salvador y de Santiago y en las resoluciones AG/RES. 1284 (XXIV-O/94) y AG/RES. 1288 (XXIV-O/94), y encomiar a los Estados Miembros que han efectuado regularmente la presentación de sus informes para este propósito.
3. Solicitar al Secretario General que mantenga y facilite acceso al inventario detallado de las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, presentado por los Estados Miembros de conformidad con el párrafo precedente.
4. Instar nuevamente a los Estados Miembros a que continúen promoviendo la transparencia en materia de políticas de defensa, entre otros aspectos, en lo que se refiere a la modernización de las Fuerzas Armadas, la cual incluye modificaciones a su estructura y composición, y adquisición de equipo y materiales, así como a la presentación de información que permita la comparación del gasto militar en la región.
5. Solicitar al Consejo Permanente que, por medio de la Comisión de Seguridad Hemisférica, considere las medidas para promover el desarrollo y el intercambio de información relativa a las políticas y doctrinas de defensa.
6. Reiterar nuevamente la importancia de que todos los Estados Miembros participen plenamente en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y de que proporcionen la información requerida para la elaboración del Informe Internacional Estandarizado sobre Gastos Militares, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y renovar su solicitud a los Estados Miembros para que proporcionen al Secretario General de la OEA, a más tardar el 15 de junio de cada año, la información mencionada.
7. Solicitar al Consejo Permanente que, por conducto de la Comisión de Seguridad Hemisférica, tome las medidas necesarias para celebrar, a más tardar en el primer trimestre de 2000, una reunión de parlamentarios sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad prevista en la Declaración de San Salvador.
8. Instar nuevamente a los Estados Miembros a que continúen con las consultas y el intercambio de ideas dentro del Hemisferio para avanzar en la limitación y el control de armas convencionales en la región, y encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, procure avanzar en el desarrollo del enfoque más apropiado que permita, a nivel hemisférico, incrementar la transparencia y abordar las cuestiones relacionadas con las armas convencionales.
9. Recordar el mandato contenido en la resolución AG/RES.1566 (XVIII-O/98) que encomienda al Consejo Permanente que celebre anualmente una sesión especial de la Comisión de Seguridad Hemisférica, con la participación de expertos, dedicada a analizar e intercambiar información sobre las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad en la región, y especialmente las identificadas en las Declaraciones de San Salvador y de Santiago.

10. Solicitar al Secretario General que actualice anualmente, con base en la información presentada por los Estados Miembros, el registro de expertos sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad y que lo distribuya a los Estados Miembros antes del mes de junio de cada año.
11. Encomendar al Consejo Permanente que continúe apoyando la participación de la Comisión de Seguridad Hemisférica en otros foros regionales, como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.
12. Encomendar, asimismo, al Consejo Permanente que continúe estimulando el intercambio de experiencias en materia de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad con otras regiones, que incluya el intercambio de información entre la Comisión de Seguridad Hemisférica y otras organizaciones internacionales que trabajen en la materia, entre ellas la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
13. Encomendar al Consejo Permanente que realice, por medio de la Comisión de Seguridad Hemisférica, un seminario con participación de representantes de otras organizaciones regionales con el fin de intercambiar experiencias sobre la solución de conflictos, la contribución de las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad a la prevención de conflictos, el manejo de crisis y la reconstrucción posterior a los conflictos.
14. Solicitar que el Consejo Permanente, por medio de la Comisión de Seguridad Hemisférica, celebre en la OEA la próxima ronda de consultas de OEA-OSCE en el año 2000.
15. Encomendar al Consejo Permanente que considere, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, la posibilidad de realizar, en el momento oportuno, otra conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad.
16. Encomendar al Consejo Permanente a llevar a cabo las actividades mencionadas en la presente resolución de acuerdo con los recursos que se asignen en el programa-presupuesto y otros recursos.
17. Reiterar su invitación a la Junta Interamericana de Defensa para que, en los términos de la resolución AG/RES. 1240 (XXIII-O/93), brinde asesoramiento y preste servicios de carácter consultivo en materia de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de carácter militar y solicitarle que mantenga actualizado el inventario de dichas medidas.
18. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General sobre la implementación de la presente resolución.
19. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a otras organizaciones regionales pertinentes.

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático

Las Partes en el presente Protocolo, **Siendo** Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en adelante "la Convención", **Persiguiendo** el objetivo último de la Convención enunciado en su artículo 2, **Recordando** las disposiciones de la Convención, Guiadas por el artículo 3 de la Convención, **En cumplimiento** del Mandato de Berlín, aprobado mediante la decisión 1/CP.1 de la Conferencia de las Partes en la Convención en su primer periodo de sesiones,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos del presente Protocolo se aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 1 de la Convención. Además:

1. Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en la Convención.
2. Por "Convención" se entiende la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
3. Por "Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático" se entiende el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988.
4. Por "Protocolo de Montreal" se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y en su forma posteriormente ajustada y enmendada.
5. Por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes presentes que emiten un voto afirmativo o negativo.
6. Por "Parte" se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, una Parte en el presente Protocolo.
7. Por "Parte incluida en el anexo I" se entiende una Parte que figura en el anexo I de la Convención, con las enmiendas de que pueda ser objeto, o una Parte que ha hecho la notificación prevista en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:
 - a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:
 - i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;
 - ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;
 - iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;
 - iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

- v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;
 - vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;
 - vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;
 - viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía;
- b) Cooperará con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia individual y global de las políticas y medidas que se adopten en virtud del presente artículo, de conformidad con el apartado i) del inciso e) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. Con este fin, estas Partes procurarán intercambiar experiencia e información sobre tales políticas y medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar su comparabilidad, transparencia y eficacia. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primer período de sesiones o tan pronto como sea posible después de éste, examinará los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta toda la información pertinente.
2. Las Partes incluidas en el anexo I procurarán limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal generadas por los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, respectivamente.
3. Las Partes incluidas en el anexo I se empeñarán en aplicar las políticas y medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas, para otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo y en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá adoptar otras medidas, según corresponda, para promover el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.
4. Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las políticas y medidas señaladas en el inciso a) del párrafo 1 *supra*, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales y los posibles efectos, examinará las formas y medios de organizar la coordinación de dichas políticas y medidas.

Artículo 3

1. Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.
2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo.
3. Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde

1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en cada período de compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I dimanantes del presente

artículo. Se informará de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que guarden relación con esas actividades de una manera transparente y verificable y se las examinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8.

4. Antes del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, para su examen, datos que permitan establecer el nivel del carbono almacenado correspondiente a 1990 y hacer una estimación de las variaciones de ese nivel en los años siguientes. En su

primer período de sesiones o lo antes posible después de éste, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo determinará las modalidades, normas y directrices sobre la forma de sumar o restar a las cantidades atribuidas a las Partes del anexo I actividades humanas adicionales relacionadas con las variaciones de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en las categorías de suelos agrícolas y de cambio del uso de la tierra y silvicultura y sobre las actividades que se hayan de sumar o restar, teniendo en cuenta las incertidumbres, la transparencia de la presentación de informes, la verificabilidad, la labor metodológica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de conformidad con el artículo 5 y las decisiones de la Conferencia de las Partes. Tal decisión se aplicará en los períodos de compromiso segundo y siguientes. Una Parte podrá optar por aplicar tal decisión sobre estas actividades humanas adicionales para su primer período de compromiso, siempre que estas actividades se hayan realizado desde 1990.

5. Las Partes incluidas en el anexo I que están en vías de transición a una economía de mercado y que hayan determinado su año o período de base con arreglo a la decisión 9/CP.2, adoptada por la Conferencia de las Partes en su segundo período de sesiones, utilizarán ese año o período de base para cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo. Toda otra Parte del anexo I que esté en transición a una economía de mercado y no haya presentado aún su primera comunicación nacional con arreglo al artículo 12 de la Convención podrá también notificar a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo que tiene la intención de utilizar un año o período histórico de base distinto del año 1990 para cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo.

La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se pronunciará sobre la aceptación de dicha notificación.

6. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 de la Convención, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo concederá un cierto grado de flexibilidad a las Partes del anexo I que están en transición a una economía de mercado para el cumplimiento de sus compromisos dimanantes del presente Protocolo, que no sean los previstos en este artículo.

7. En el primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción de las emisiones, del año 2008 al 2012, la cantidad atribuida a cada Parte incluida en el anexo I será igual al porcentaje consignado para ella en el anexo B de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A correspondientes a 1990, o al año o período de base determinado con arreglo al párrafo 5 *supra*, multiplicado por cinco. Para calcular la cantidad que se les ha de atribuir, las Partes del anexo I para las cuales el cambio del uso de la tierra y la silvicultura constituían una fuente neta de emisiones de gases de efecto invernadero en 1990 incluirán en su año de base 1990 o período de base las emisiones antropógenas agregadas por las

fuentes, expresadas en dióxido de carbono equivalente, menos la absorción por los sumideros en 1990 debida al cambio del uso de la tierra.

8. Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 como su año de base para los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre para hacer los cálculos a que se refiere el párrafo 7 *supra*.

9. Los compromisos de las Partes incluidas en el anexo I para los períodos siguientes se establecerán en enmiendas al anexo B del presente Protocolo que se adoptarán de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 21. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo comenzará a considerar esos compromisos al menos siete años antes del término del primer período de compromiso a que se refiere el párrafo 1 *supra*.

10. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, que adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se sumará a la cantidad atribuida a la Parte que la adquiera.

11. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, que transfiera una Parte a otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se deducirá de la cantidad atribuida a la Parte que la transfiera.

12. Toda unidad de reducción certificada de emisiones que adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 se agregará a la cantidad atribuida a la Parte que la adquiera.

13. Si en un período de compromiso las emisiones de una Parte incluida en el anexo I son inferiores a la cantidad atribuida a ella en virtud del presente artículo, la diferencia se agregará, a petición de esa Parte, a la cantidad que se atribuya a esa Parte para futuros períodos de compromiso.

14. Cada Parte incluida en el anexo I se empeñará en cumplir los compromisos señalados en el párrafo 1 *supra* de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones sociales, ambientales y económicas adversas para las Partes que son países en desarrollo, en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención. En consonancia con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes sobre la aplicación de esos párrafos, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo estudiará en su primer período de sesiones las medidas que sea necesario tomar para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático y/o el impacto de la aplicación de medidas de respuesta para las Partes mencionadas en esos párrafos. Entre otras, se estudiarán cuestiones como la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología.

Artículo 4

1. Se considerará que las Partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a un acuerdo para cumplir conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3 han dado cumplimiento a esos compromisos si la suma total de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excede de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 3. En el acuerdo se consignará el nivel de emisión respectivo asignado a cada una de las Partes en el acuerdo.

2. Las Partes en todo acuerdo de este tipo notificarán a la secretaría el contenido del acuerdo en la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de adhesión a éste. La secretaría informará a su vez a las Partes y signatarios de la Convención el contenido del acuerdo.

3. Todo acuerdo de este tipo se mantendrá en vigor mientras dure el período de compromiso especificado en el párrafo 7 del artículo 3.

4. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de integración económica y junto con ella, toda modificación de la composición de la organización tras la aprobación del presente Protocolo no incidirá en los compromisos ya vigentes en virtud del

presente Protocolo. Todo cambio en la composición de la organización se tendrá en cuenta únicamente a los efectos de los compromisos que en virtud del artículo 3 se contraigan después de esa modificación.

5. En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren el nivel total combinado de reducción de las emisiones fijado para ellas, cada una de las Partes en ese acuerdo será responsable del nivel de sus propias emisiones establecido en el acuerdo.

6. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de integración económica que es Parte en el presente Protocolo y junto con ella, cada Estado miembro de esa organización regional de integración económica, en forma individual y conjuntamente con la organización regional de integración económica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, será responsable, en caso de que no se logre el nivel total combinado de reducción de las emisiones, del nivel de sus propias emisiones notificado con arreglo al presente artículo.

Artículo 5

1. Cada Parte incluida en el anexo I establecerá, a más tardar un año antes del comienzo del primer período de compromiso, un sistema nacional que permita la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo impartirá en su primer período de sesiones las directrices en relación con tal sistema nacional, que incluirán las metodologías especificadas en el párrafo 2 *infra*.

2. Las metodologías para calcular las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal serán las aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y acordadas por la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. En los casos en que no se utilicen tales metodologías, se introducirán los ajustes necesarios conforme a las metodologías acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer período de sesiones. Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión

de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente y, según corresponda, revisará esas metodologías y ajustes, teniendo plenamente en cuenta las decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. Toda revisión de metodologías o ajustes se aplicará exclusivamente a los efectos de determinar si se cumplen los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a esa revisión.

3. Los potenciales de calentamiento atmosférico que se utilicen para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A serán los aceptados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y acordados por la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente y, según corresponda, revisará el potencial de calentamiento atmosférico de cada uno de esos gases de efecto invernadero, teniendo

plenamente en cuenta las decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes.

Toda revisión de un potencial de calentamiento atmosférico será aplicable únicamente a los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a esa revisión.

Artículo 6

1. A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3, toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de la economía, con sujeción a lo siguiente:

- a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes participantes;
 - b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las emisiones por las fuentes, o un incremento de la absorción por los sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u otro incremento que se produciría de no realizarse el proyecto;
 - c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de emisiones si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones dimanantes de los artículos 5 y 7; y
 - d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será suplementaria a las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3.
2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá, en su primer período de sesiones o tan pronto como sea posible después de éste, establecer otras directrices para la aplicación del presente artículo, en particular a los efectos de la verificación y presentación de informes.
3. Una Parte incluida en el anexo I podrá autorizar a personas jurídicas a que participen, bajo la responsabilidad de esa Parte, en acciones conducentes a la generación, transferencia o adquisición en virtud de este artículo de unidades de reducción de emisiones.
4. Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8, se plantea alguna cuestión sobre el cumplimiento por una Parte incluida en el anexo I de las exigencias a que se refiere el presente artículo, la transferencia y adquisición de unidades de reducción de emisiones podrán continuar después de planteada esa cuestión, pero ninguna Parte podrá utilizar esas unidades a los efectos de cumplir sus compromisos contraídos en virtud del artículo 3 mientras no se resuelva la cuestión del cumplimiento.

Artículo 7

1. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en su inventario anual de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, presentado de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, la información suplementaria necesaria a los efectos de asegurar el cumplimiento del artículo 3, que se determinará de conformidad con el párrafo 4 *infra*.
2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en la comunicación nacional que presente de conformidad con el artículo 12 de la Convención la información suplementaria necesaria para demostrar el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo, que se determinará de conformidad con el párrafo 4 *infra*.
3. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará la información solicitada en el párrafo 1 *supra* anualmente, comenzando por el primer inventario que deba presentar de conformidad con la Convención para el primer año del período de compromiso después de la entrada en vigor del presente Protocolo para esa Parte. Cada una de esas Partes presentará la información solicitada en el párrafo 2 *supra* como parte de la primera comunicación nacional que deba presentar de conformidad con la Convención una vez que el presente Protocolo haya entrado en vigor para esa Parte y que se hayan adoptado las directrices a que se refiere el párrafo 4 *infra*. La frecuencia de la presentación ulterior de la información solicitada en el presente artículo será determinada por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta todo calendario para la presentación de las comunicaciones nacionales que determine la Conferencia de las Partes.

4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará en su primer período de sesiones y revisará periódicamente en lo sucesivo directrices para la preparación de la información solicitada en el presente artículo, teniendo en cuenta las directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I adoptadas por la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá también antes del primer período de compromiso las modalidades de contabilidad en relación con las cantidades atribuidas.

Artículo 8

1. La información presentada en virtud del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I será examinada por equipos de expertos en cumplimiento de las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes y de conformidad con las directrices que adopte a esos efectos la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo con arreglo al párrafo 4 *infra*. La información presentada en virtud del párrafo 1 del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I será examinada en el marco de la recopilación anual de los inventarios y las cantidades atribuidas de emisiones y la contabilidad conexas. Además, la información presentada en virtud del párrafo 2 del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I será estudiada en el marco del examen de las comunicaciones.

2. Esos equipos examinadores serán coordinados por la secretaría y estarán integrados por expertos escogidos entre los candidatos propuestos por las Partes en la Convención y, según corresponda, por organizaciones intergubernamentales, de conformidad con la orientación impartida a esos efectos por la Conferencia de las Partes.

3. El proceso de examen permitirá una evaluación técnica exhaustiva e integral de todos los aspectos de la aplicación del presente Protocolo por una Parte. Los equipos de expertos elaborarán un informe a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en el que evaluarán el cumplimiento de los compromisos de la Parte y determinarán los posibles problemas con que se tropiece y los factores que incidan en el cumplimiento de los compromisos. La secretaría distribuirá ese informe a todas las Partes en la Convención. La secretaría enumerará para su ulterior consideración por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo las cuestiones relacionadas con la aplicación que se hayan señalado en esos informes.

4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará en su primer período de sesiones y revisará periódicamente en lo sucesivo directrices para el examen de la aplicación del presente Protocolo por los equipos de expertos, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.

5. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, con la asistencia del Órgano Subsidiario de Ejecución y, según corresponda, del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, examinará:

- a) La información presentada por las Partes en virtud del artículo 8 y los informes de los exámenes que hayan realizado de ella los expertos de conformidad con el presente artículo;
- b) Las cuestiones relacionadas con la aplicación que haya enumerado la secretaría de conformidad con el párrafo 3 *supra*, así como toda cuestión que hayan planteado las Partes.

6. Habiendo examinado la información a que se hace referencia en el párrafo 5 *supra*, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará sobre cualquier asunto las decisiones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 9

1. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente el presente Protocolo a la luz de las informaciones y estudios científicos más exactos de que se disponga sobre el cambio climático y sus repercusiones y de la información técnica, social y económica pertinente. Este examen se hará en coordinación con otros exámenes

pertinentes en el ámbito de la Convención, en particular los que exigen el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 y el inciso a) del párrafo 2 del artículo 7 de la Convención. Basándose en este examen, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará las medidas que correspondan.

2. El primer examen tendrá lugar en el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. Los siguientes se realizarán de manera periódica y oportuna.

Artículo 10

Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las prioridades, objetivos y circunstancias concretos de su desarrollo nacional y regional, sin introducir ningún nuevo compromiso para las Partes no incluidas en el anexo I aunque reafirmando los compromisos ya estipulados en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y llevando adelante el cumplimiento de estos compromisos con miras a lograr el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 3, 5 y 7 del artículo 4 de la Convención:

- a) Formularán, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas nacionales y, en su caso, regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión, datos de actividad y/o modelos locales que sean eficaces en relación con el costo y que reflejen las condiciones socioeconómicas de cada Parte para la realización y la actualización periódica de los inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando las metodologías comparables en que convenga la Conferencia de las Partes y de conformidad con las directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales adoptadas por la Conferencia de las Partes;
- b) Formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente programas nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático;
- i) tales programas guardarían relación, entre otras cosas, con los sectores de la energía, el transporte y la industria así como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los desechos. Es más, mediante las tecnologías y métodos de adaptación para la mejora de la planificación espacial se fomentaría la adaptación al cambio climático; y
- ii) las Partes del anexo I presentarán información sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Protocolo, en particular los programas nacionales, de conformidad con el artículo 7, y otras Partes procurarán incluir en sus comunicaciones nacionales, según corresponda, información sobre programas que contengan medidas que a juicio de la Parte contribuyen a hacer frente al cambio climático y a sus repercusiones adversas, entre ellas medidas para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la absorción por los sumideros, medidas de fomento de la capacidad y medidas de adaptación;
- c) Cooperarán en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y adoptarán todas las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en particular en beneficio de los países en desarrollo, incluidas la formulación de políticas y programas para la transferencia efectiva de tecnologías ecológicamente racionales que sean de propiedad pública o de dominio público y la creación en el sector privado de un clima propicio que permita promover la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y el acceso a éstas;
- d) Cooperarán en investigaciones científicas y técnicas y promoverán el mantenimiento y el desarrollo de procedimientos de observación sistemática y la creación de archivos de datos para reducir las incertidumbres relacionadas con el sistema climático, las repercusiones adversas del cambio climático y las consecuencias económicas y sociales de las diversas estrategias de respuesta, y promoverán el desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad y de los medios nacionales para

participar en actividades, programas y reded internacionales e intergubernamentales de investigación y observación sistemática, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención;

e) Cooperarán en el plano internacional, recurriendo, según proceda, a órganos existentes, en la elaboración y la ejecución de programas de educación y capacitación que prevean el fomento de la creación de capacidad nacional, en particular capacidad humana e institucional, y el intercambio o la adscripción de personal encargado de formar especialistas en esta esfera, en particular para los países en desarrollo, y promoverán tales actividades, y facilitarán en el plano nacional el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta. Se deberán establecer las modalidades apropiadas para poner en ejecución estas actividades por conducto de los órganos pertinentes de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención;

f) Incluirán en sus comunicaciones nacionales información sobre los programas y actividades emprendidos en cumplimiento del presente artículo de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes; y

g) Al dar cumplimiento a los compromisos dimanantes del presente artículo tomarán plenamente en consideración el párrafo 8 del artículo 4 de la Convención.

Artículo 11

1. Al aplicar el artículo 10 las Partes tendrán en cuenta lo dispuesto en los párrafos 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 4 de la Convención.

2. En el contexto de la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 y en el artículo 11 de la Convención y por conducto de la entidad o las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas incluidas en el anexo II de la Convención:

a) Proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos en que incurran las Partes que son países en desarrollo al llevar adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el inciso a) del artículo 10;

b) Facilitarán también los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, que necesiten las Partes que son países en desarrollo para sufragar la totalidad de los gastos adicionales convenidos que entrañe el llevar adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el artículo 10 y que se acuerden entre una Parte que es país en desarrollo y la entidad o las entidades internacionales a que se refiere el artículo 11 de la Convención, de conformidad con ese artículo. Al dar cumplimiento a estos compromisos ya vigentes se tendrán en cuenta la necesidad de que la corriente de recursos financieros sea adecuada y previsible y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. La dirección impartida a la entidad o las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención en las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, comprendidas las adoptadas antes de la aprobación del presente Protocolo, se aplicará *mutatis mutandis* a las disposiciones del presente párrafo.

3. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II de la Convención también podrán facilitar, y las Partes que son países en desarrollo podrán obtener, recursos financieros para la aplicación del artículo 10, por conductos bilaterales o regionales o por otros conductos multilaterales.

Artículo 12

1. Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio.

2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como

ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3.

3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio:

- a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; y
- b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.

4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la dirección de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.

5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre la base de:

- a) La participación voluntaria acordada por cada Parte participante;
- b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático; y
- c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada.

6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas.

7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer las modalidades y procedimientos que permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una auditoría y la verificación independiente de las actividades de proyectos.

8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes de las actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de la adaptación.

9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular en las actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 *supra* y en la adquisición de unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades privadas o públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.

10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período comprendido entre el año 2000 y el comienzo del primer período de compromiso podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en el primer período de compromiso.

Artículo 13

1. La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención, actuará como reunión de las Partes en el presente Protocolo.

2. Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones en el ámbito del Protocolo serán adoptadas únicamente por las Partes en el presente Protocolo.

3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que represente a una Parte en la

Convención que a la fecha no sea parte en el presente Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las Partes en el presente Protocolo y por ellas mismas.

4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará regularmente la aplicación del presente Protocolo y, conforme a su mandato, tomará las decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz. Cumplirá las funciones que le asigne el presente Protocolo y:

- a) Evaluará, basándose en toda la información que se le proporcione de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo, la aplicación del Protocolo por las Partes, los efectos generales de las medidas adoptadas en virtud del Protocolo, en particular los efectos ambientales, económicos y sociales, así como su efecto acumulativo, y la medida en que se avanza hacia el logro del objetivo de la Convención;
- b) Examinará periódicamente las obligaciones contraídas por las Partes en virtud del presente Protocolo, tomando debidamente en consideración todo examen solicitado en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 y en el párrafo 2 del artículo 7 de la Convención a la luz del objetivo de la Convención, de la experiencia obtenida en su aplicación y de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos, y a este respecto examinará y adoptará periódicamente informes sobre la aplicación del presente Protocolo;
- c) Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre las medidas adoptadas por las Partes para hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo;
- d) Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las medidas adoptadas por ellas para hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo;
- e) Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo de la Convención y las disposiciones del presente Protocolo y teniendo plenamente en cuenta las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, el desarrollo y el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables para la aplicación eficaz del presente Protocolo, que serán acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo;
- f) Formulará sobre cualquier asunto las recomendaciones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo;
- g) Procurará movilizar recursos financieros adicionales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 11;
- h) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
- i) Solicitará y utilizará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación de las organizaciones internacionales y de los órganos intergubernamentales y no gubernamentales competentes y la información que éstos le proporcionen; y
- j) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo y considerará la realización de cualquier tarea que se derive de una decisión de la Conferencia de las Partes en la Convención.

5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros aplicados en relación con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en relación con el presente Protocolo, a menos que decida otra cosa por consenso la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.

6. La secretaría convocará el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en conjunto con el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes que se programe después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Los siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad

de reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán anualmente y en conjunto con los períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.

7. Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cada vez que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la secretaría haya transmitido a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes.

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado miembro de esas organizaciones u observador ante ellas que no sea parte en la Convención, podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. Todo órgano u organismo, sea nacional o internacional,

gubernamental o no gubernamental, que sea competente en los asuntos de que trata el presente Protocolo y que haya informado a la secretaría de su deseo de estar representado como observador en un período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá ser admitido como observador a menos que se oponga a ello un tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de los observadores se regirán por el reglamento, según lo señalado en el párrafo 5 *supra*.

Artículo 14

1. La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeñará la función de secretaría del presente Protocolo.

2. El párrafo 2 del artículo 8 de la Convención sobre las funciones de la secretaría y el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención sobre las disposiciones para su funcionamiento se aplicarán *mutatis mutandis* al presente Protocolo. La secretaría ejercerá además las funciones que se le asignen en el marco del presente Protocolo.

Artículo 15

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención actuarán como Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo, respectivamente. Las disposiciones sobre el funcionamiento de estos dos órganos con respecto a la Convención se aplicarán *mutatis mutandis* al presente Protocolo. Los períodos de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo se celebrarán conjuntamente con los del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la Convención, respectivamente.

2. Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los órganos subsidiarios actúen como órganos subsidiarios del presente Protocolo las decisiones en el ámbito del Protocolo serán adoptadas únicamente por las Partes que sean Partes en el Protocolo.

3. Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención ejerzan sus funciones respecto de cuestiones de interés para el presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de los órganos subsidiarios que represente a una Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las Partes en el Protocolo y por ellas mismas.

Artículo 16

La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará tan pronto como sea posible la posibilidad de aplicar al presente Protocolo, y de modificar según corresponda, el mecanismo consultivo multilateral a que se refiere el artículo 13 de la Convención a

la luz de las decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. Todo mecanismo consultivo multilateral que opere en relación con el presente Protocolo lo hará sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos establecidos de conformidad con el artículo 18.

Artículo 17

La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos de emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo.

Artículo 18

En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo aprobará unos procedimientos y mecanismos apropiados y eficaces para determinar y abordar los casos de incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, incluso mediante la preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo en cuenta la causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Todo procedimiento o mecanismo que se cree en virtud del presente artículo y prevea consecuencias de carácter vinculante será aprobado por medio de una enmienda al presente Protocolo.

Artículo 19

Las disposiciones del artículo 14 de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo.

Artículo 20

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo.
2. Las enmiendas al presente Protocolo deberán adoptarse en un período ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. La secretaría deberá comunicar a las Partes el texto de toda propuesta de enmienda al Protocolo al menos seis meses antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría comunicará asimismo el texto de toda propuesta de enmienda a las Partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al Depositario.
3. Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto de enmienda al Protocolo. Si se agotan todas las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, la enmienda será aprobada, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará la enmienda aprobada al Depositario, que la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarán al Depositario. La enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 3 entrará en vigor para las Partes que la hayan aceptado al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de por lo menos tres cuartos de las Partes en el presente Protocolo.
5. La enmienda entrará en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan entregado al Depositario sus instrumentos de aceptación de la enmienda.

Artículo 21

1. Los anexos del presente Protocolo formarán parte integrante de éste y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al Protocolo constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos. Los anexos que se adopten después de la entrada en vigor del presente Protocolo sólo podrán contener listas, formularios y cualquier otro material descriptivo que trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos.
2. Cualquiera de las Partes podrá proponer un anexo del presente Protocolo y enmiendas a anexos del Protocolo.

3. Los anexos del presente Protocolo y las enmiendas a anexos del Protocolo se aprobarán en un período ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes. La secretaría comunicará a las Partes el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo al menos seis meses antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría comunicará asimismo el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo a las Partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al Depositario.
4. Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto de anexo o de enmienda a un anexo. Si se agotan todas las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, el anexo o la enmienda al anexo se aprobará, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará el texto del anexo o de la enmienda al anexo que se haya aprobado al Depositario, que lo hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
5. Todo anexo o enmienda a un anexo, salvo el anexo A o B, que haya sido aprobado de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 *supra* entrará en vigor para todas las Partes en el presente Protocolo seis meses después de la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes la aprobación del anexo o de la enmienda al anexo, con excepción de las Partes que hayan notificado por escrito al Depositario dentro de ese período que no aceptan el anexo o la enmienda al anexo. El anexo o la enmienda al anexo entrará en vigor para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el retiro de la notificación.
6. Si la aprobación de un anexo o de una enmienda a un anexo supone una enmienda al presente Protocolo, el anexo o la enmienda al anexo no entrará en vigor hasta el momento en que entre en vigor la enmienda al presente Protocolo.
7. Las enmiendas a los anexos A y B del presente Protocolo se aprobarán y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20, a reserva de que una enmienda al anexo B sólo podrá aprobarse con el consentimiento escrito de la Parte interesada.

Artículo 22

1. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 *infra*, cada Parte tendrá un voto.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.

Artículo 23

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Protocolo.

Artículo 24

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados y de las organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en la Convención. Quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 16 de marzo de 1998 al 15 de marzo de 1999, y a la adhesión a partir del día siguiente a aquél en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en el presente Protocolo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a todas las obligaciones dimanantes del Protocolo. En el caso de una organización que tenga uno o más Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo, la organización y sus Estados miembros determinarán su respectiva responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud del

presente Protocolo. En tales casos, la organización y los Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el Protocolo.

3. Las organizaciones regionales de integración económica indicarán en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por el Protocolo. Esas organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial de su ámbito de competencia al Depositario, que a su vez la comunicará a las Partes.

Artículo 25

1. El presente Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que se cuenten Partes del anexo I cuyas emisiones totales representen por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990.

2. A los efectos del presente artículo, por "total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990" se entiende la cantidad notificada, en la fecha o antes de la fecha de aprobación del Protocolo, por las Partes incluidas en el anexo I en su primera comunicación nacional presentada con arreglo al artículo 12 de la Convención.

3. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él una vez reunidas las condiciones para la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1 *supra*, el Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

4. A los efectos del presente artículo, el instrumento que deposite una organización regional de integración económica no contará además de los que hayan depositado los Estados miembros de la organización.

Artículo 26

No se podrán formular reservas al presente Protocolo.

Artículo 27

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo notificándolo por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.

3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Protocolo.

Artículo 28

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

HECHO en Kioto el día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los *infrascritos*, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente Protocolo en las fechas indicadas.